

**AUDIENCIA DE COMUNICACIÓN DE SENTENCIA.**

Fecha	San Fernando, nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.		
Jueza Redactor	MARCELA YÁÑEZ CABELLO		
Fiscal	Fabiola Echeverría García		
Fiscal	Andrés Jara González		
Ab. Querellante	Guillermo Lara Fernández		
Defensor Privado	Christian Guerra Peña		
Hora inicio	15:00 A.M.		
Hora término	15:03 P.M.		
Tribunal	Tribunal de Juicio Oral en lo Penal San Fernando.		
Acta/Audio	Camilo Bravo Ahumada		
Enc. Sala	Lilyam Osses Rivera		
RUC	2300609088-5		
RIT	66 - 2024		
Nombres acusados	Rut	Dirección	Comuna
JUAN ENRIQUE ASTORGA OPAZO (asiste vía zoom)	5.586.206-0	Calle VILLA CENTINELA, ALCIDES ROLDAN N° 1398 N° .	San Fernando.
RODRIGO ANTONIO HERRERA BUSTAMANTE (asiste vía zoom)	11.951.933-0	Calle CALLE GUADALUPE N°1350	San Fernando.
Se deja constancia que esta audiencia se realizó de manera presencial			

*(La presente acta solo constituye un registro administrativo en el que se resume lo acontecido en audiencia. Los argumentos vertidos por las partes y la fundamentación de la resolución dictada, se encuentran íntegramente en el registro de audio de este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 del Código Procesal Penal).*

**Lectura de sentencia:**

RUC	RIT	Ambito afectado
2300609088-5	66-2024	RELACIONES.: ASTORGA OPAZO JUAN ENRIQUE / COHECHO COMETIDO POR EMPLEADO PÚBLICO.ART.248 24
		RELACIONES.: HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO ANTONIO / COHECHO COMETIDO POR EMPLEADO PÚBLICO.ART.248 24
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - ECHEVERRÍA GARCÍA FABIOLA ISABEL
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - MEZA PEÑA GABRIEL ANDRÉS
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - JARA GONZÁLEZ ANDRÉS IGNACIO
		PARTICIPANTES.: Defensor privado. - GUERRA PEÑA CHRISTIAN RODRIGO
		PARTICIPANTES.: Abogado patrocinante. - LARA FERNANDEZ GUILLERMO HUMBERTO
		PARTICIPANTES.: Abogado patrocinante. - HALD RAMIREZ LYA GABRIELA
		CAUSA.: R.U.C=2300609088-5 R.U.I.=66-2024

**Dirigió la audiencia doña MARCELA YÁÑEZ CABELLO, Jueza titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando.**

SENTENCIA DEFINITIVA

**San Fernando**, nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

**PRIMERO: Individualización de los intervinientes.** Ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, constituido por las juezas Marisol López Machuca, Marcela Paredes Olave y Marcela Yáñez Cabello, se llevó a efecto la audiencia de Juicio Oral de la causa Rol Interno del Tribunal **66-2024**, seguida en contra de los acusados **JUAN ENRIQUE ASTORGA OPAZO**, chileno, cédula nacional de identidad 5.586.206-0, nacido en San Fernando el 15 de abril de 1949, 75 años, casado, auxiliar de educación, con domicilio en Villa Centinela, pasaje Alcides Roldán N°1398, comuna de San Fernando y **RODRIGO ANTONIO HERRERA BUSTAMANTE**, chileno, cédula nacional de identidad 11.951.933-0, nacido en San Fernando el 25 de diciembre de 1971, 52 años, soltero, asistente de educación, con domicilio en calle Guadalupe N°1350, comuna de San Fernando.

Sostuvo la acusación fiscal el Ministerio Público, en cuya representación intervinieron la fiscal **Fabiola Echeverría García** y el fiscal **Andrés Jara González**, por el Consejo de Defensa del Estado, como querellante particular, intervinieron los abogados **Guillermo Lara Fernández**. Por su parte, la defensa de ambos acusados estuvo a cargo del defensor penal privado, **Christian Guerra Peña**.

Todos los abogados con domicilio y forma de notificación registrados en el tribunal.

**SEGUNDO: Acusación y argumentaciones de la fiscalía.** La acusación materia de este juicio, según se expresó en el auto de apertura, se fundó en los siguientes hechos:

*“JUAN ENRIQUE ASTORGA OPAZO, es asistente de la educación y tiene domicilio y residencia en VILLA CENTINELA, ALCIDES ROLDAN N° 1398, San Fernando; por su parte RODRIGO ANTONIO HERRERA BUSTAMANTE, es también asistente de la educación y se desempeña en el Colegio Leandro Schilling, ubicado en Argomedo 583, de la misma comuna.*

*En dichas calidades, los acusados se desempeñaron como dirigentes sindicales del sector de los Asistentes de la Educación, desde, a lo menos, el año 2015.*

*ASTORGA OPAZO fue presidente de SIDETRACOM, “Sindicato de Trabajadores de la Corporación Municipal”, que agrupaba al año 2015, a lo menos, a 123 asistentes de la educación municipalizada.*

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL  
SAN FERNANDO

---

*HERRERA BUSTAMANTE fue presidente de SETRACOM, "Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Corporación Municipal que agrupaba, al año 2015, a lo menos a 275 asistentes de la educación municipalizada.*

*Una de las funciones de los acusados en el desempeño de sus cargos, era la de negociar proyectos de contratos colectivos con la CORMUSAF, en su calidad de empleadora, los que eran presentados por ambos sindicatos en forma conjunta.*

*En el año 2015, los acusados negociaron con la CORMUSAF un proyecto que llegó a convertirse en contrato colectivo, y que tuvo efecto por 3 años, esto es, hasta el último día hábil del mes de noviembre de 2018.*

*El instrumento fue suscrito por las partes y presentado ante la Inspección Provincial del Trabajo, el día 14 de enero de 2016.*

*Por la Corporación firmó LUIS BERWART ARAYA como presidente de la Corporación, LEONEL LITTIN LUENGO, como secretario general, VICTOR CALQUÍN PERALTA como jefe de Recursos Humanos, LEONARDO GAETE FAUNDEZ como encargado de logística; por los sindicatos, SIDETRACOM y SETRACOM, firmaron, entre otros, JUAN ASTORGA OPAZO y RODRIGO HERRERA BUSTAMANTE.*

*El 22 de octubre de 2019, los acusados ASTORGA y HERRERA ingresan en la Inspección provincial del trabajo de San Fernando un proyecto de contrato colectivo, con el estampado respectivo de recepción y firma de la CORMUSAF, representada por LEONARDO GAJARDO VALENZUELA en calidad de gerente de la Corporación. Desde el día de recepción del documento, la Cormusaf tuvo el plazo de 10 días para pronunciarse respecto del proyecto, sin que lo haya hecho.*

*El proyecto tenía una cantidad importante de beneficios para los afiliados, lo que se traducía en un desembolso económico considerable para la CORMUSAF.*

*Transcurrido el plazo legal que tenía la Corporación Municipal para dar respuesta al proyecto, los acusados no solicitaron se hiciera efectivo el apercibimiento legal, que se traducía en que dicho proyecto se entendía aceptado por la corporación y pasaba a tener el carácter de contrato colectivo.*

*A raíz de lo anterior la Inspección del Trabajo, archivó los antecedentes.*

*La inactividad de los acusados ASTORGA y HERRERA se explica en lo acordado con LEONARDO GAJARDO VALENZUELA en su calidad de gerente de la Corporación y con el exalcalde LUIS BERWART ARAYA.*

*Dicho acuerdo consistió en que los acusados dejaban transcurrir el plazo de respuesta del empleador, omitían cualquier solicitud posterior, con el propósito de recibir a cambio, cada*

*uno de ellos, la suma de única de 15 millones de pesos (quince millones de pesos) a pagar en cuotas.*

*La suma convenida era inferior a los beneficios que contenía el proyecto de contrato colectivo, teniendo presente que sólo respecto del BONO de TERMINO DE CONFLICTO se establecía la suma de \$100.000 (cien mil pesos por trabajador) y teniendo presente la planilla total de trabajadores de ambos sindicatos a esa fecha, alcanzaba a una suma cercana a los 45 millones de pesos a desembolsar por la CORMUSAF.*

*La instrucción de pago la efectúa LUIS BERWART ARAYA a LEONARDO GAJARDO VALENZUELA, quien la acata y gestiona.*

*Además de GAJARDO VALENZUELA, la instrucción de BERWART ARAYA fue acatada y avalada por la estructura de la Corporación y de la agrupación de imputados, a saber por el jefe de finanzas LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO, quien autorizó que se realizaran estos pagos, por RODRIGO QUINTANILLA MALDONADO, en ese momento Jefe de Recursos Humanos, quien efectuó, a lo menos, un pago en forma directa y personal; HUMBERTO HERMOSILLA CABRERA jefe de control, quien visó el pago y además aportó documentos falsos para justificar el egreso de dineros de las arcas de la Corporación.*

*Los pagos se hicieron en dinero en efectivo, siendo esta la modalidad habitual usada, consistente en el armado de sobres con el dinero por parte del tesorero ALEJANDRO AGUILERA BAVA. Los sobres les eran entregados a los acusados por funcionarios de la CORMUSAF, entre ellos el propio ALEJANDRO AGUILERA.*

*En una oportunidad, los dineros fueron entregados personalmente por RODRIGO QUINTANILLA MALDONADO, quien recibe de ALEJANDRO AGUILERA BAVA un sobre con \$4.000.000.- (cuatro millones de pesos), suma que entrega a los acusados, en su oficina privada" (sic)*

A juicio de la **Fiscalía** los hechos descritos son constitutivos de un **delito consumado de cohecho pasivo**, previsto y sancionado en el artículo **248 del Código Penal**, en carácter de reiterado, en el que le cupo a ambos imputados participación en calidad de **autores**, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Ambos acusadores reconocen la configuración de la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior en favor de los dos acusados y no se invocan agravantes.

Por tales consideraciones, el **Ministerio Público** requirió se impusiera a cada uno de los imputados la pena 818 días de Reclusión menor en su grado

medio, una multa de \$15.000.000 (quince millones de pesos), 4 años de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo.

Además, ambos acusadores solicitaron la condena en costas.

En su **alegato de apertura** la fiscal sostuvo que cada vez son más habituales las noticias o los comunicados referidos a escándalos de corrupción relacionados con municipalidad y con corporaciones municipales, tanto de educación, deportiva y culturales. En general, estos temas indignan a la ciudadanía, pero al parecer estas malas prácticas acompañan a la humanidad desde el inicio. Es así que buscando en la historia dijo se encontró con casos en Egipto de un funcionario público coludido con banda de profanadores de tumba. Luego pasamos por Grecia, por Roma, donde hay una dualidad en lo que es la corrupción pública y privada.

Luego verbalizó que, en lo público el honor es lo que buscaban los funcionarios desde que entraban y salían, y debían salir con el mismo erario que habían declarado al inicio. Las penas iban desde el destierro hasta el propio suicidio que mantenía el honor del funcionario público. Pronto nos enfrentamos al absolutismo, regulación francesa que con Robespierre nos mantuvo por un tiempo en una situación de tranquilidad, era conocido como el incorruptible, pero esto duró poco, llegó Bonaparte. Y luego la burguesía desenfrenada, los totalitarismos del siglo XX que sin duda hicieron de un hábito la corrupción. Incluso los estados demócratas que tenían colonias en las situaciones de corrupción fueron un hábito.

Es un desafío para las democracias actuales el combatir contra transparencia y probidad las situaciones de corrupción. Y también es un desafío que los ciudadanos mantengamos esta situación de reacción frente a las situaciones que afectan al erario público y en definitiva a los más desvalidos. ¿Qué hemos hecho en lo legislativo? A nivel latinoamericano tenemos la Convención Interamericana Contra la Corrupción del año 1996 y luego la ONU en el año 2003 es una convención importante que da directrices respecto del combate a la corrupción. Es así que en la convención interamericana, una de las primeras figuras que aparecen descritas es el delito de cohecho y lo mismo respecto de la convención de la ONU en su artículo 15 refería al soborno de funcionarios.

Prosiguió y afirmó que en el cohecho en específico el bien jurídico a proteger por esta norma debe ser la imparcialidad que guía la actividad pública, esto es, el funcionario debe actuar con la debida neutralidad y objetividad en la prestación de sus servicios ajenos a toda interferencia en sus decisiones. Esto es lo que debe primar y que cree que en el caso de este juicio no fue así, sino que todo al contrario. Luego están las distinciones entre el cohecho pasivo, el cohecho activo, lo que ira desarrollando en este juicio, respecto incluso de la calificación y sus diferentes opciones de calificación, apuntando hacia la figura que debe como infringida y como en definitiva cometida por los imputados.

Ya al termino de sus alegaciones hizo lectura al prólogo de la convención de la ONU, que señaló parecerle absolutamente pertinente. Dicho texto fue escrito por Don Kofi Annan, secretario general de la ONU en el año 2004 y dice lo siguiente “ la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.”

**En su alegato de clausura**, dijo que abordaría en primer término, la naturaleza del tipo penal, su estructura, indicando el contexto legislativo en que este ve la luz y los elementos propios de la figura penal. En seguida, señaló que iba esbozar lo que debía probar en el juicio y qué elementos no requerían prueba y por último la atribución del dolo.

Así señaló, que la intención legislativa nacional de hacerse cargo del fenómeno de corrupción ha sido manifiesta y evidente ya desde la década de los años 90, con la sucesiva dictación de cuerpos legales, pero que en definitiva lo que hicieron fue aumentar las penas sin hacer grandes modificaciones a los tipos. Se complementaron estas modificaciones con la dictación de una ley más relevante, que es la de responsabilidad jurídica, responsabilidad penal de las personas jurídicas y también la ley del lobby.

Luego llegamos al año 2018, se dicta la ley 21.121, cuyo objetivo, dijo el legislador, era prevenir, detectar y perseguir la corrupción. Tiene relevancia porque modifica tanto el Código Penal como otras normas legales y además crea figuras típicas nuevas, que dicen relación con la corrupción pública y la corrupción entre privados. Así se llegó al análisis de la figura del artículo 248 del Código

Penal, es esto es, el cohecho por la función. Esta norma sanciona al empleado público que en razón de su cargo solicita o acepta un beneficio al que no tiene derecho, un beneficio de naturaleza económica o de otra naturaleza, para sí o para un tercero. Ahí termina la norma. Es la figura básica y tiene relevancia porque tiene el menor contenido de injustos, según se ve del catálogo propio del 248 y siguiente.

En dicho sentido se subsumen actividades cometidas que antes de la modificación legal quedaban impunes. ¿Por qué? Porque se estimaba que ante la infracción de un deber genérico no se cumplía con la estructura penal existente a esa fecha, que exigía el acto debido del cargo o la infracción de deberes del cargo. Hizo alusión a un fallo contra un ex fiscal que una vez que termina su ejercicio, donde la Corte Suprema modifica la sentencia a través de la revisión por la nulidad, termina absolviendo a contrario de que había sido condenado en primera y segunda instancia por haber solicitado a un ex colaborador funcionario de la fiscalía que revisara el sistema SAF de ciertas personas. Se estimó que analizando los reglamentos institucionales había más que nada un deber genérico de actuación de conformidad a la probidad y que por tanto no habiendo una individualización de la frase infracción en los deberes de su cargo supone aislar ese deber, singularizarlo, individualizarlo, denominarlo con miras a la identificación. Esas situaciones de infracción a deberes genéricos del cargo quedaban impunes, a la luz de la antigua legislación.

Por tanto, sostuvo no ser necesario probar que el beneficio o la prestación estaba vinculada a un acto o una omisión determinada, lo que sí debía probar y que ha probado es una vinculación subjetiva entre el beneficio solicitado y el cargo que detentaban los funcionarios públicos, asistentes de la educación y representantes de sus bases como líderes sindicales.

Luego esgrimió que el cohechado, como ya lo dijo, debe ser un funcionario público. El diccionario de la Real Academia señala que empleado público es una persona que desempeña un trabajo y este empleado debe ser público, por lo que en este tema ya recurrimos al concepto normativo, al concepto jurídico penal que la doctrina ha ido dando a través del tiempo en cuanto a la extensión que el artículo 260, tiene a la luz de la interpretación para efectos penales del término funcionario o empleado público.

Acertadamente, la doctrina sostiene que el Código Penal Chileno establece un concepto funcional de empleado público que abarca situaciones mucho más amplias que el estatuto administrativo. Hizo alusión a una sentencia del año 2021 de la Corte Suprema, también a una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas que juzgaba la situación de una funcionaria del Banco del Estado, señalando el fallo en su décimo octavo considerando que se trataba de una funcionaria pública a pesar de tener un contrato reglado por las normas del Código del Trabajo, porque en definitiva lo que administraba o lo que ella gestionaba eran fondos públicos y pertenecía en definitiva a un servicio público, el Banco del Estado como un servicio público descentralizado al igual como lo son la Universidad de Chile, el Servicio Nacional de Aduana, gobiernos regionales, municipalidades, ferrocarriles del Estado, etcétera.

Por tanto, el cargo público es aquel que vincula al empleado a la actividad del Estado. La sentencia de la Corte Suprema en el rol 33.353 del año 2020 se dicta como recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad de Cauquenes que había sido condenada por un despido indebido y cobro prestaciones laborales de un guardia de un aparcadero municipal de vehículos. Tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones entendieron que el funcionario no tenía calidad de empleo público ya que estaba regido por las normas del trabajo y su prestación era en este aparcadero público de vehículos. El fallo de la Corte Suprema lo que hace es analizar las disposiciones vigentes y en definitiva los aparcaderos municipales son un servicio público municipal en beneficio de la mantención de la integridad de los vehículos que son retirados de la vía pública. Además, señala que lo determinante es que las expresiones cargo u oficio contenidas en la norma penal, no pueden aludir a una misma definición y después habla de que para determinar qué es un oficio se recurre al artículo 20 y lo determina como una ocupación habitual y en este caso esta ocupación habitual además está en orden a satisfacer intereses generales o de utilidad pública ya que hay un mandato a las municipalidades de mantener en forma permanente este servicio y por lo tanto este guardia de seguridad con contrato de trabajo si ejerce una función pública a la luz de lo que señala este fallo.

Prosiguió y afirmó que dicho empleado público según el tipo penal del 248 debe solicitar o aceptar. Solicitar es pedir, pretender, pedir algo de manera respetuosa no necesariamente de forma verbal puede ser a través de gestos pero



tiene que ser entendido por el receptor del mensaje, aceptar por su parte es aprobar, acceder a algo, bastando cualquier comportamiento que revele inequívocamente la manifestación de voluntad en el sentido de consentir. ¿Cuál es el objeto material del ilícito del artículo 248? El beneficio económico o de otra naturaleza a lo que el funcionario en razón de su cargo no tiene derecho. La aceptación o solicitud de este beneficio según el tipo penal del artículo 248 a diferencia de lo que señaló y sostuvo la defensa en su apertura no exige una contraprestación probada, por lo tanto no es requisito ejecutar o haber ejecutado una actuación determinada como contraprestación. Luego ¿qué significa la expresión en razón del cargo? Recurrió también a la Real academia en razón es el entendimiento, el raciocinio, el intelecto y cargo es una dignidad, empleo o u oficio. Empleo, puesto, destino, plaza, función, oficio, ocupación, dignidad. Luego en relación al monto señaló tener relevancia para dos ítems, primero para la determinación de la multa y segundo para discriminar aquellas dádivas que han sido reconocidas por la costumbre y que no configurarían un tipo de cohecho. Ahora ¿cuál es el objetivo del sujeto que soborna, que no ha pedido un acto determinado o no requiere pedir un acto determinado y propio del cargo? Es mantener a este funcionario cohechado en una disposición permanente, en una actitud propicia en relación a cualquier solicitud. Existirá por lo tanto una relación más o menos estable entre las dos personas y continuada en el tiempo. Se ha dicho que vulgarmente se trata de aceitar o engrasar el sistema a través de este funcionario, mantenerlo como a disposición de cualquier solicitud que se haga en lo futuro.

Continuó y señaló que el bien jurídico protegido por la norma se estima por la mayoría de la doctrina es la recta imparcialidad en el ejercicio de la función pública, entendido como probidad, la honradez, integridad, rectitud y derivado de aquello para el caso en concreto se trata de la probidad y de la imparcialidad del ejercicio de la función pública, la fidelidad en la actuación que debían respetar los representantes de los trabajadores asistentes de la educación de San Fernando. Precisó que eligió la figura del artículo 248 y no 248 bis porque estimó que la actividad desplegada por los representantes de los asistentes de la educación no es de aquellas actuaciones o actos debido del cargo o infracción de deberes específicos, sino que es una infracción genérica a un deber de probidad, de

actuación leal, de actuación con fidelidad a los derechos que protegían de sus representados.

En cuanto a lo probado en juicio verbalizó que los dirigentes sindicales eran funcionarios públicos, eran trabajados de la Corporación, la Corporación era presidida por el alcalde de la comuna, recibía fondos ministeriales y fondos municipales, por lo tanto al estar su erario constituido por estos fondos sin duda la actuación debe ser supervigilada por más de un ente público en cuanto a la forma en que estos se invierten y se gastan. La Corporación Municipal de San Fernando, era una institución de derecho privado y así fue creada por el decreto con fuerza de ley 1 del año 1980 que tuvo por objetivo facilitar la contratación, el uso de los fondos públicos a través de esta figura de derecho privado pero que extrañamente está dirigida por un funcionario público que es el alcalde y que además como ya se dijo recibe fondos públicos ministeriales y municipales.

Señaló entonces haber probado que los acusados fueron elegidos en su momento como los líderes de los sindicatos más grandes de los asistentes de la educación y que tenían más de 10 años de ejercicio en el cargo. Lo que ocurre en el año 2019 en el marco de la negociación colectiva que se inicia, solicitan un pago directamente al alcalde, al señor Berwart, con quien mantienen una relación de colaboración interesada, permanente, donde hay beneficios más allá de estos pagos. Esto para que una vez que presentan el proyecto, no se haga ninguna actividad posterior que habría correspondido al derecho y en ese tenor señaló que el artículo 337 del Código del Trabajo señala que llegado el 20º día de presentado el proyecto de contrato colectivo sin que el empleador le haya dado respuesta se entenderá que lo acepta. Salvo que las partes hayan acordado una prórroga del inciso primero del artículo 335.

Luego indicó, que hubo un documento de prórroga firmado por los trabajadores, por los directivos y acusados y el funcionario o secretario general de la corporación, el que fue fechado 4 de noviembre del año 2019, fecha que sí correspondía a los plazos legales para presentar esta prórroga como un acuerdo pero sólo es presentado a la Inspección del Trabajo cinco meses después en el mes de marzo del año 2020. Luego se preguntó ¿Qué consecuencia acarrea a la vulneración de derechos de los asistentes a la educación, la actividad sostenida por los imputados en cuanto a acciones u omisiones durante este trayecto de negociación fallida? Dijo recordar que por disposición de la ley 21.040 Colchagua

comenzaba a funcionar en cuanto a su servicio local de educación en el año 2020. El traspaso se verificaba el día 2 de enero del año 2021. Que el artículo octavo de esta norma dice que este traspaso es por el solo efecto de la ley. Por lo tanto, es una manifestación tajante de la voluntad del legislador de que las cosas pasan tal como están, tanto los bienes muebles, inmuebles, recursos financieros y personas asociadas a la prestación de los servicios de educación.

Ahora, relevante señalar que el artículo 42 transitorio de la norma en su inciso cuarto salvaguarda, eso sí, los derechos de los trabajadores al manifestar lo siguiente, con todo, solo les serán oponibles a los servicios locales de educación pública las condiciones pactadas con anterioridad seis meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del personal que trata este párrafo. Si esto no era así, ¿quién pagaba los beneficios si es que hubiese habido contrato? La Municipalidad. ¿Se afectó a los asistentes de la educación? Cree que sí. Se les consultó y también lo señaló el señor defensor en su momento, se acabaron los derechos sociales pactados en los convenios colectivos o contratos colectivos que pueden parecer superfluos, pero para estos sindicatos eran muy relevantes. La fiesta que celebraba el día del asistente de la educación, las fiestas de fin de año donde había una coproducción desde la Corporación Municipal bastante importante, se señaló por algunos de los asistentes de la educación que además ponían bebidas, que ponían carne, que estaban dentro también de la producción de esta fiesta y que además concurría la directiva de la Corporación Municipal. Por lo tanto, al no tener el contrato vigente, el contrato colectivo, perdieron estos derechos colectivos y también señala la ley algún tipo de reajustabilidad, además del bono de término de negociación. ¿

En cuanto a ciertas alegaciones de la defensa, manifestó que confunde el tipo penal, toda vez que estima que una exigencia es la utilidad para el sujeto que cohecha al funcionario público en razón de su cargo, situación que no es parte del tipo penal. Luego señala que por el traspaso por el solo el ministerio de la ley, llegaban a su fin los derechos sociales como si fuera una situación legal y la verdad que por el artículo 42 transitorio esto no era así, que de haber pasado con un contrato colectivo vigente, los asistentes de la educación habrían puesto en una situación muy difícil al SLEP, que debería haber asumido el pago de estas prestaciones sociales que contenía el contrato. Ha señalado también la defensa que los dirigentes sindicales no eran garantes de estos derechos colectivos, sin duda

que cree que si lo eran, al momento de haber tramitado de conformidad a la ley y dentro de los seis meses anteriores y haber tenido un contrato colectivo, este habría pasado de esta forma según el artículo 42 transitorio a la administración del SLEP. También nos dice la defensa que hay confusión en quién sobornó, quién pagaba, cuánto se pagaba.

Luego se refirió, a partes puntuales de las declaraciones relevantes, cuáles eran del alcalde y los demás directivos de la Corporación. ¿Qué dijo el exalcalde? Me dijeron que había una deuda pendiente que tenía en presión por la gente de los sindicatos, de su asociado, y que ellos podían dilatar todo esto siempre y cuando se pudiese cancelar una cierta suma de dinero. Dice que los dirigentes llegan a su oficina para poder conversar, se necesitaba, había una deuda, no me acuerdo quién, eran hartos millones que efectivamente ellos pedían. En cuanto al monto del dinero solicitado indicó Berwart que no recordaba si eran 10 o 15 por persona. Que les dijo que tenían que conversar y los derivó con Leonardo Gajardo. Se le pregunta por la defensa en cuanto a las diferencias que pudiesen existir en sus declaraciones ante Fiscalía y lo que estaba deponiendo en este juicio, señalando vuelvo a reiterar recopilando después y haciendo memoria no era préstamo sino que era una solicitud de recursos por el tema de los convenios colectivos para pedir recursos para uso personal.

Prosiguió y señaló que en cuanto a los conocedores de esta situación por parte de los directivos de la Corporación y municipales teníamos a Pablo Bravo, Leónidas Quiroga, Leonardo Gajardo, a Carlos Bozo, Albino Hermosilla, Rodrigo Quintanilla, Alejandro Aguilera y al mismo alcalde ya referido. Todos hablan de la existencia de esta necesidad de pagar, de mantener tranquilo también al alcalde con esta situación. Carlos Bozo por ejemplo señaló que en una oportunidad cuando Janito estaba con licencia Leonardo Gajardo le indicó que había que efectuar pagos para Pinky Cerebro, lo que fue expuesto por diferentes de testigos durante el juicio. Luego Albino Hermosilla que era jefe de control en esa época señaló en el contexto general de las visitas de los dirigentes, la concurrencia era de al menos una o dos veces a la semana, se relacionaban con Janito, el jefe de finanzas y a veces con él, teniendo que reconocer que habían conversaciones en su WhatsApp bastante amigable y cercana con el señor Herrera que solicitaba un beneficio, un préstamo al propio padre del señor Herrera. También señaló Albino Hermosilla que Rodrigo Quintanilla le contó que tenían que cancelar algunos dineros por

mantener tranquilo al alcalde. Que Rodrigo Quintanilla que era el jefe de recursos humanos tuvo una relación fluida con los dirigentes e indicó que lo que supo fue que no tuvieron negociación colectiva porque les ofrecieron dinero, que un día fue a la Corporación por un tema de vehículos que arrendaba a salud, ya no trabajaba en la Corporación y ahí le comentan que estaban con estos inconvenientes, que le habían pedido dinero para no sacar adelante el contrato colectivo los dirigentes don Juan y don Rodrigo. En cuanto la materialización de ello señaló el Leo me pide que converse con ellos, que si les podía pasar algo de dinero que Alejandro se lo pasaría, se lo piden porque él no tenía la Leónidas no tenía buena relación con ellos y ahí fue a la oficina de Alejandro Aguilera, quien le pasó una cajita de dinero, una caja de termómetro digital, cree que eran 4 millones ya que lo vi cuando Janito introducía el dinero, se juntó con ellos para entregárselo, no recuerda donde, se la pasó a don Juan.

Ahora bien, prosiguiendo indicó que la declaración de Leonardo Gajardo fue una declaración muy ordenada y muy clara respecto de lo que él recordaba que había ocurrido, así dijo recuerdo que me entregaron el convenio, el que quedó guardado en mi escritorio de manera dilatar y ellos poder cumplir con su palabra, de que no iban ingresarlo para que no tuvieran que pagar a los funcionarios, manifestando además que el monto a pagar a los dirigentes era de 15 millones cada uno.

En cuanto a las consecuencias del actuar de los acusados, señaló fue abordado con mucha claridad por doña Marcela López Ávila, que explicó cada uno los pasos las fechas en que fueron presentados el proyecto de contrato colectivo en octubre del año 2019, que no hubo solicitud de prórroga dentro de plazo, que archivaron los antecedentes ya que no había respuesta, que ellos actúan como ministros de fe ante una negociación que se realiza entre dos partes, que posteriormente en marzo del año 2020 aparece esta solicitud de prórroga fecha el 4 de noviembre del año 2019 y que los diferentes dictámenes u opiniones jurídicas expertas dentro de la propia Dirección del Trabajo fue que los dirigentes ya no estaban en una negociación colectiva reglada al haberse excedido todos los plazos esto quedaba sin efecto y sin la posibilidad de celebrar el contrato colectivo por el camino de lo reglado.

En cuanto a la fecha y lugar de ejecución indicó contar con la misma declaración Berwart, quien dijo que la solicitud ocurre en su propio despacho, que

Leonardo Gajardo la sitúa ya en el año 2019 recibe la instrucción de postergar el convenio colectivo, que Alejandro Aguilera dijo que hubo una reunión en junio del año 2019 en la cual participó Pablo Bravo, el alcalde, Leónidas, Rodrigo quintanilla, que Leónidas al salir de la reunión le manifiesta vamos a tener que pagarle estos chiquillos, ya que los dirigentes habían pedido dinero para no sacar adelante el contrato colectivo, e individualizado a don Juan y Rodrigo. En cuanto al monto solicitado, refirió que en todos los casos se estaba sobre la suma de 10 millones, que la persona que no sólo recibió la instrucción sino que también tenía que proveer los fondos para pagar era Leonardo Gajardo quien señaló que eran 15 millones para cada uno y en definitiva es Alejandro Aguilera quien hace una suma de las cuotas que fue pagando y llega a una suma de 10 millones de pesos.

Asimismo adujo existir prueba documental que se debía tener a la vista y que son los informes de la Dirección del Trabajo que si bien fueron expuestos por la a exdirectora del trabajo, también van explicando en forma puntual y detallada cuál fue la situación ocurrida en los tiempos que se determinaron. Luego adujo ser destacable como otro medio de prueba las planillas Excel donde estaban las siglas P y C al costado derecho del documento, siendo aquellos pagos que no correspondían a los estrictamente legal.

En cuanto a la prueba testimonial de funcionarios de la Corporación, sostuvo aportaron un gran contexto a todos estos hechos y además algunos elementos que son indicadores de que estos hechos sí pudieron ocurrir. Se habló de una cercanía, de una relación fluida con los directivos de la corporación, se habló de visitas seguidos.

Acto seguido afirmó ser una de las testigos relevante doña Valentina Dana, en cuanto señaló que el fallecido jefe de operaciones Aníbal Quezada en una oportunidad en que ella recibe estos documentos, donde decía hacer decreto pago al señor Astorga y Herrera de pago de cuotas sindicales, ella le pregunta pero a qué corresponden, a qué fecha, le decían hay que pagarlas para mantener a su gente tranquila y para que no se fueran a paro.

En cuanto al dolo dijo que, mirado como la creación del riesgo jurídicamente relevante y prohibido y al cual puede llegarse a través de indicadores. Es así como los imputados crearon el riesgo jurídicamente prohibido y lo realizaron concurriendo a la oficina del señor Berwart, existía una relación previa que les permitía llegar a esta instancia, que luego frente a Leonardo

Gajardo presentan este proyecto con la intención de dejar sin movimiento la gestión, el riesgo, pero dicho riesgo seguía en dominio de ambos imputados, para que estos no presentaran la solicitud de prórroga dentro de plazo que sí estaba datada 4 de noviembre, pero se presenta fuera de plazo y con esta situación vulneran en definitiva el deber de probidad que los ligaba con la actuación que realizaban dentro de sus cargos.

Reiteró como indicador la relación fluida cercana de los acusados con los directivos de la Corporación, recursos humanos, control y gestión, tesorería y con el propio alcalde, obteniendo a lo largo de los años un trato preferencial, así al señor Astorga se le pagaban horas extra sin los requisitos generales que era la solicitud del director del establecimiento sino que con la sola la firma del jefe operaciones, al señor Herrera por su parte se le pagaron boletas por apoyo a la operación en circunstancias que habían maestros en la corporación que realizaban las reparaciones. Los imputados optaron siempre por el diálogo, pues el diálogo mantenía esta situación en que ellos podían por una parte obtener ciertos beneficios como hablarle por WhatsApp a uno de los funcionarios, un préstamo para el papá o que le depositaran los dineros en la cuenta de otra persona, no participaban en movilizaciones. Que para mantener tranquilo a los sindicatos no sólo estaban los beneficios propiamente sociales de los contratos sino que había aparte de carne, bebida. En definitiva sostuvo que los imputados eran dirigentes sindicales de hace más de 10 años, también pertenecían a una federación de sindicatos, eran frecuentemente recibidos por el alcalde y tenían cercanía con Pablo Bravo.

En concreto indicó que el accionar de los acusados se enmarca en la figura nueva del artículo 248, cohecho por la función, donde hay un deber genérico vulnerado por la actividad por ellos desplegados, solicitando su condena.

**TERCERO: Acusación y argumentaciones del abogado Guillermo Lara Fernández.** La parte querellante formuló la misma acusación fiscal, con las siguientes salvedades. Así, lo primero que indicó es que los hechos descritos califican jurídicamente como un **delito consumado de cohecho**, previsto y sancionado en el artículo **248 bis del Código Penal**, en el que le cupo a ambos acusados participación en calidad de **autores**, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal. Y por otra parte solicitó para cada acusado la pena de 5 años de reclusión menor en su grado máximo, una multa de \$30.000.000 (treinta

millones de pesos), las penas accesorias del artículo 29 del Código Penal y 7 años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo.

En la **apertura**, comenzó expresando que el primer gran secreto de la elocuencia es tener ideas en la cabeza, cosas que decir, inclusive el dicho se le atribuye no a un jurista, sino a un químico. Luego adujo que la primera idea que quisiera indexar en la mente del tribunal, es que el reproche a efectuar a los dos imputados, no puede entenderse sino conjugando los mismos en una causa de mayor extensión, esto es, del periodo comprendido entre el 2014 al 2021, en que el alcalde, el señor Luis Berwart Araya junto con la plana mayor de la Corporación Municipal de San Fernando, y junto a quien era su mano derecha en la municipalidad, su administrador don Pablo Bravo, forjó las condiciones para el mega fraude más grande que se ha conocido en la región. Este fraude no fue detectado por el Consejo de Defensa del Estado ni por el Ministro Público, sino por la Contraloría General de la República, informe 295, 19 de marzo de 2021, que dice haber detectado proveedores falsos, prestadores de servicios falsos, funcionarios fantasmas, sociedades creadas al efecto para putativas prestaciones que no eran tales, teniendo todos como correlato la dictación de decretos de pago espurios falsificados. Esto es, nominalmente veraces, pero falaces en su fondo, falsificación ideológica.

Prosiguió indicando que si se extraen las conductas de los dos imputados, que básicamente eran dos dirigentes sindicales a la época de los hechos, cada uno representando a decenas de auxiliares de la educación, por lo tanto empleados públicos a efectos del artículo 260, tanto respecto de su actividad como auxiliares de la educación, pero también como dirigentes sindicales, el efecto que tiene la extracción, la separación de esas conductas, desde luego no tiene el mismo efecto que si las mismas se conjugan en este estadio jurídico penal que ya ha anunciado, no porque las conductas no sean graves, sino porque la manera de entender el proceso es aquella que refirió.

En cuanto a los hechos propiamente tal indicó que dentro de las funciones de los señores dirigentes sindicales era haber tramitado adecuadamente proyectos de negociación colectiva. ¿Qué sucedió? Que ralentizaron, no gestionaron adecuadamente, y con eso se cumple la descripción objetiva del tipo penal. ¿Qué dice el tipo penal del artículo 248? El empleado público que solicitare o aceptare un



beneficio económico para sí o para un tercero, por ejecutar o omitir un acto propio de dedo de su cargo, tendrá las penas que señala la ley. Hay que distinguir ahí entonces el cohecho agravado antes de la Ley 21.121 o posterior. Por lo tanto, lo que se está reprochando es que el 22 de octubre de 2019 los acusados Astorga y Herrera ingresan en la Inspección Provincial de Trabajo de San Fernando un proyecto de contrato colectivo con el estampado respectivo de recepción y firma de la Cormusaf representada por Leonardo Gajardo Valenzuela en calidad de gerente de la corporación. Desde el día de recepción del documento, la Cormusaf tuvo el plazo de 10 días para pronunciarse respecto al proyecto sin que lo haya hecho. El proyecto tenía una cantidad importante de beneficios para los afiliados, lo que se traducía en un desembolso económico considerable para la Cormusaf. Era más caro cumplir el convenio colectivo que pagarles la dación a los imputados, siendo un hecho un objetivo. Que Transcurrido el plazo legal, y aquí está el acto omitido, transcurrido el plazo legal que tenía la corporación municipal para dar respuesta al proyecto, los acusados no solicitaron se hiciera efectivo el aprecio legal que se traducía en que dicho proyecto se entendía aceptado por la corporación y pasaba a tener el carácter de contrato colectivo, siendo ello lo reprochado.

El tipo penal es claro en que se trata de ejecutar u omitir un acto propio de oído al cargo. La conducta en este caso es una conducta omisiva acompañada de un deber del cargo, porque si hay un tipo penal en este país que indexa las obligaciones funcionarias como parámetro para justamente establecer si se materializa o no, es el artículo 248 bis.

Luego, señaló que cuando Chile intenta ingresar a la OCDE el año 2009, se le imponen ciertos requisitos. Por favor, agilice las penas de lo que le hizo un funcionario y además trate usted de indexar el concepto de incumplimiento de deberes funcionarios. Pues bien, es el primer delito que cumple con ese parámetro de la OCDE, porque fue modificado el año 2009, o entra en vigor el año 2009 y en el año 2018 se perfecciona.

En cuanto a la prueba afirmó que va superar el estándar del artículo 340, que si las cosas salen como pretenden traerán a estrados a los principales personeros de la Cormusaf y municipalidades de San Fernando quienes van a declarar cómo fueron los hechos, pues no es un secreto, desde luego, la dificultad probatoria que tienen los delitos funcionarios y el cohecho agravado no es la excepción. Pero cuando se trata de hechos objetivos, de un depósito de un contrato

colectivo en que nada se hizo a posterior, en que estaba la descripción de cargo, las obligaciones, desde luego aquello pasa a tener un carácter objetivo. Pero cuando á declararen en estrados a aquellos que tenían la potestad de haber decidido sobre eso, que estaban en connivencia con los imputados, que hoy día no tienen nada que perder, porque son personas que igualmente van a ser objeto de juzgamiento, no son testigos que vayan a ganar algo con lo que van a declara, son entonces personas que lo van a hacer verazmente.

A su vez, dijo existir en argumentación jurídica una institución que se llama Prolapsis, adelantamiento a debilidades, lo que va a decir el otro. ¿Quiénes nos van a traer como prueba la contraparte? Muy probablemente porque desde luego es una suposición, testigos que van a decir, no, si los señores dirigentes sindicales lo hacían regio, los señores Herrera y Astorga lo hacían regio, pero aquí no se trata si lo hacían regio, sino de una cuestión puntual. Un contrato colectivo se depositó, había diez días, nada se hizo para desde luego recabar los derechos que le asistían como dirigentes sindicales y el asunto se archivó. ¿Qué pasó en medio? Está la dadiva, también conocida como COIMA o beneficio.

Concluyó diciendo que hay distintos tipos de cohecho. El cohecho activo o soborno en el artículo 250 y el cohecho pasivo que tiene hoy día dos variantes 248 o cohecho por la función después de la modificación de la 21.121, por el solo hecho de cumplir una función pública, cuyo es el caso, pero está el agravado que cree es aquella figura pertinente y que conforme la prueba aportar se libre veredicto condenatorio respecto a los imputados.

Al momento de la **clausura**, señaló que se cometió por los acusados el delito de cohecho, que tales imputados son funcionarios públicos a efectos penales, conforme a la interpretación unánime de la doctrina que hace del artículo 260 del Código Penal, ya que son funcionarios públicos por prestar una función que es de carácter público, como es ser auxiliares de la educación, y por extensión haber sido elegidos dirigentes sindicales. El artículo 260 privilegia el concepto funcional, así lo dice el profesor Echeverri, y lo demostrara en el curso de este alegato.

El delito de cohecho básicamente supone un empleado público que pide o acepta beneficios, que en razón de su cargo y que le están desde luego prohibidos. Que aquello lo dice en virtud que existe una figura desde el año 2018 por la Ley 21.121 que es el denominado cohecho por el cargo, es decir, el funcionario acepta o solicita un beneficio en razón de su cargo, esta es la figura base. Luego de ello, y

mucho antes, el año 99, se acuña la figura del artículo 248 bis, que supone lo mismo, un empleado público que solicita o acepta beneficios, pero con incumplimiento de sus deberes funcionarios por omitir o ejecutar un acto propio debido a su cargo, la cual es su tesis, estando a su juicio sobre acreditado por el Ministerio Público los dos hechos, es decir, si el tribunal no se inclina por la tesis del artículo 248 bis, a lo menos deberían inclinarse por el artículo 248.

Prosiguió y afirmó que la Real Academia Española de la Lengua, incluso define en una de sus acepciones el cohecho, la edición 2002, delito consistente en sobornar un juez o un funcionario en el ejercicio de sus funciones o en la aceptación del soborno por parte de aquellos. Es decir, hoy día entonces tenemos que el lenguaje cotidiano ya incorpora la figura de cohecho, que básicamente consiste entonces en solicitar o aceptar en razón de su cargo 248 a contar de la ley de 21.121 de noviembre de 2018 o directamente 248 bis con las modificaciones que ha tenido.

Chile entra a la OECD, a este selecto grupo de países, y se le exige establecer una ley de responsabilidad penal, la ley 23.343. Los tres primeros delitos base eran cohecho funcionario público nacional o extranjero. Es decir, ya tenemos, hace más de 15 años que el legislador se preocupó de establecer que este delito ingresara como delito base a esta importante ley, que es la 23.343. Por lo tanto, estamos hablando de conductas sensibles, desde luego, que afectan, como bien dijo la señora fiscal, la probidad pública, el buen funcionamiento de la administración pública.

Reiteró que el artículo en cuestión, 248, fue modificado el año 2018 por la ley 21.121, y es la figura base. En el artículo 248 bis establece el cohecho agravado, esto es, ya le ponemos un aditamento, esto de que se establece por primera vez en nuestro derecho el concepto de incumplimiento de deberes funcionarios. Aseveró que los dirigentes sindicales cumplían una función pública, que son dirigentes sindicales, desde luego, pero antes son auxiliares de la administración pública en el sentido de la educación que se otorga desde el año 80, 81, a través de la municipalización, por las municipalidades a través de las Corporaciones.

Luego señaló dónde estaba la figura de los dirigentes sindicales, y dijo en el artículo 220 del Código del Trabajo, donde su función básica proteger los derechos de sus asociados. Entonces dijo que la gran pregunta y lo que reprocha es que acá esos derechos no se protegieron ¿Y por qué no se protegieron? Porque

finalmente el contrato colectivo que se presenta en octubre del año 2019 nunca llega a ser un contrato colectivo, así lo dijo doña Marcela López. En concreto, para la llegada del traspaso al SLEP no había contrato colectivo vigente y eso es lo que se reprocha, porque no hicieron efectivo el apercibimiento legal ante la no respuesta de su contraparte negociadora, que era la corporación. Artículo 337 del Código del Trabajo.

En definitiva sustentó, que nunca hubo contrato colectivo y que eso desde luego perjudicó a los trabajadores y de eso dan cuenta los informes de fiscalización. Hay uno que abiertamente es avieso, porque señala uno de los informes que sí lo había, pero claramente eso no es así, ergo, no hubo nunca contrato colectivo.

Luego dijo que no quería dejar pasar esta oportunidad para referirse a quiénes pueden acometerlo, el dolo que se requiere. Para ello se valió de una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema rol 5898- 2008, que dice que la figura contemplada en el artículo 248 bis del Código Penal consiste en que un empleo público solicite o acepte recibir un beneficio económico para si o un tercero, ya sea para omitir o por haber omitido un acto debido propio a su cargo o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. Con mayor exactitud, apunta la Corte Suprema, la doctrina apunta que la estructura del ilícito investigado reposa sobre la solicitud de aceptación de una ventaja económica, de contenido patrimonial, reducible por lo menos a un valor pecuniario, que se encuentra o no el empleo público para cobrar dinero al público por el ejercicio de sus funciones. Es decir, la Corte Suprema dice no tiene nada que ver que pueda cobrar, que se trata de un cajero, que maneje fondos, la solicitud de aceptación es independiente.

A su vez, señaló ser necesario que el sujeto activo haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones o ejecute o haya realizado un acto en contravención a los deberes de su investidura. Concepto amplio del artículo 260. Bajo este prisma, la figura grabada del artículo 248 bis del Código Penal al valerse las expresiones para omitir o por haber omitido y para ejecutar o por haber ejecutado requiere una importante exigencia a nivel subjetivo por parte del sujeto activo. Esto es, solo es punible la comisión con dolo directo. El agente debe tener conocimiento y voluntad de realizar los elementos que integran el tipo penal objetivo. Pues solo de

quien obra con dolo directo puede decirse que pide o acepta algo para realizar una acción o por haberla realizado.

El aspecto subjetivo, elemento esencial de todo injusto penal revista especial trascendencia en el caso en análisis, desde que como lo precisa la doctrina solo se satisface cuando el agente obra con la especie de dolo denominada dolo directo, quedando excluidas por ende otras formas. El dolo es el elemento subjetivo integrante del tipo criminal. Es un componente indispensable que integra el delito en un sistema punitivo, como el nacional, que lo define como la acción u omisión voluntaria penada por la ley. Se trata así de desterrar de nuestro ordenamiento punitivo todo vestigio de responsabilidad objetiva. Enseñoreándose de modo inequívoco el principio culpabilidad como faro iluminador de cualquier enjuiciamiento penal, lo que supone la acentuación de un régimen de garantías propio de un estado derecho. El dolo aparece como compendio a un proceso anímico abarcador del conocimiento que el sujeto ha de tener comprensivo los elementos esenciales, fundamentadores, descriptivos y valorativos y de la definida y firme voluntad de realización del injusto típico. En el fondo, sostuvo que cometen el delito de cohecho del 248 y del 248 bis, sujetos activos especiales.

Acto seguido refiriéndose a los autores dijo que los señores imputados se acerquen a la oficina del señor Berwart y le solicitan el beneficio económico. El señor Berwart dijo los chiquillos me pidieron, el señor Quiroga a los chiquillos hay que pagar, le dice Gajardo. Es decir, estaba completa la conducta, ¿pudo haberse evitado? Sí. ¿Tenían el dominio del hecho? Sí. Subjetivamente, ¿actuaron con dolos? Sí. Porque es evidente, aquí no se trata de que, miren, nosotros creíamos que el contrato estaba vigente. ¿Cuántos testigos de la contraria vinieron a decir que el contrato estaba vigente? Porque eso les dijeron, pero el contrato no estaba vigente.

Además, señaló que en el alegato de apertura, el señor defensor dijo, refiriéndose a esta cláusula que supuestamente iba inserta en los contratos, que sus representados y así también la gente instruida, los abogados de la Corporación la entendían válida y la inspección del trabajo que visaba estas negociaciones jamás hizo alusión que dicha cláusula tuviera algún vicio de ilegalidad o alguna contradicción con los principios generales de la negociación colectiva. Sin embargo, dijo que la testigo Rocío Escudero les dijo que no estaba vigente esa cláusula y que se lo había advertido y que le había preguntado quiénes la asesoraban antes.

Entonces, cuando se afirma una cosa, pero derechamente en estrados se dice otra, pues la testigo dijo que no estaba vigente, entonces, derechamente les advirtió que aquello no era así.

Luego afirmó ser sumamente relevante lo anterior, pues al interrogar a los acusados, el señor Astorga dijo que tenía 20 años de dirigente sindical y el señor Herrera dijo 10 años de dirigente sindical. Entonces, no podían menos que saber que la cláusula no era válida y que además no podían menos que saber que había un plazo legal de 20 días. Atestó la señora testigo, inspectora comunal, profesional, que tenía la corporación para haber dicho algo respecto del contrato y nada dijo. Por lo tanto, hay claramente un incumplimiento de deberes funcionarios.

En cuanto al artículo 260, el que lee, dice se privilegia un concepto funcional de los funcionarios públicos. Se privilegia la función pública. Lo dice así el profesor Echeverri, Sí, Código Anotado y Concordado, edición 1986, Don Mario Verdugo Marinkovich. Pero también, y que interesante, que aparte que lo diga la doctrina penal, lo diga administrativista el profesor Jaime Arancibia, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de los Andes, nos dice, en otras palabras, el concepto empleo público del Código Penal goza de una amplitud mayor que la exhibida en el Derecho Administrativo, laboral o previsional. Pues se identifica con la idea de funcionario estatal en el sentido lato, que trasciende del ejercicio de un cargo público. De esta forma se asegura, la tipicidad de la conducta punible respecto de todos los sujetos que puedan afectar el bien jurídico protegido penalmente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido penalmente en el cohecho por la función y en el cohecho agravado? ¿La recta administración pública? ¿La función pública última ratio? ¿O derechamente la probidad? . Acá se trata de la conducta de dos personas que representaban a decenas de otros y que finalmente se vieron afectados como coligió el propio Ministerio Público. Hay jurisprudencia que dice que los funcionarios de una corporación son empleados públicos, causa rol 334-2011 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Rancagua, y todos los miembros del directorio se consideraron empleados públicos a efectos penales y que podían ser sujetos activos del tipo penal del artículo 236 que aplicación pública diferente. Por lo tanto, no es un mero antojo o dicho infundado en términos tales de que los funcionarios de una corporación son empleados públicos. Los acusados son autores conforme al

artículo 15 número 1, porque tomaron parte de la ejecución del hecho, de una manera inmediata y directa.

Ya realizando un análisis de la prueba, dijo que en relación a la dádiva, que en cuanto a la solicitud, el señor Luis Berwart dijo una vez que llegan a mi oficina los acusados para poder conversar qué necesitaban, que había una deuda pendiente de unos, no me acuerdo qué, pero eran hartos millones y que efectivamente ellos pedían una cierta cantidad de dinero para poder que eso, que ese bono o que esa materia se pudiera dilatar. Ese es el incumplimiento que reprochan conforme a su cargo. A las preguntas de la defensa surge un punto controversial en relación a las declaraciones, pero después se ve aclarado, porque lo va a decir el defensor, al decir este deponente un crédito, pero ellos querían, y a lo mejor entendí mal, pero ellos querían recursos, ellos querían recursos para ellos y a lo mejor devolverlos o pagarlos, pero no fue así. Ellos al final recopilando y haciendo memoria, efectivamente lo que pasó es lo que estoy contando ahora. Y complementando el punto dice, pero en ese tiempo yo estaba súper complicado, hay situaciones en las cuales muchas veces uno se bloquea un poco y cuesta recuperar un poco la memoria, en el detalle de todas las circunstancias, pero recopilando después y haciendo memoria, no era préstamo, sino que era una solicitud de recursos por el tema de los convenios colectivos para poder dilatar, recursos para uso personal. Si eso no es dádiva si eso no es aquello que señala el artículo 248 a secas, o el agravado 248 bis, no sé qué podrá ser. En cuanto a los pagos, Carlos Bozo señaló que era el encargado de realizar pago y que en una oportunidad Leonardo Gajardo le indicó que había que efectuar pagos para “pinky y cerebro”, apodos que fue expuesto por distintos deponentes a lo largo del juicio y que decía relación con la forma en que estos eran conocidos, en este caso los dirigentes sindicales, al interior de la corporación, indicándose, inclusive pagos ilícitos en registros de tesorería acompañados en otros medios de prueba a través de dos planillas, Excel con las iniciales P y C.

En cuanto Alvino Hermosilla, en relación a los dirigentes sindicales, es lo que me contó Rodrigo, refiriéndose a Rodrigo Quintanilla. La visita de ellos era recurrente y tenían un sistema de trabajo que era parte del tesorero y jefe de finanzas, refiriéndose en cuanto al tesorero a Alejandro Aguilera, jefe de finanzas a Quiroga. Yo observé la visita de los dirigentes en relación a sus asociados, ítem que se les pudiera dar. La concurrencia de ellos era a lo menos una vez a la semana. La

relación con ellos era atenderlo y resolver sus dudas. A su vez, indicó que Rodrigo Quintanilla trabajó en la Corporación Municipal, pero hasta el mes de marzo de 2020 y que supo que no tuvieron negociación colectiva porque les ofrecieron dinero. Me enteré de ello porque un día fui a la corporación por un tema de vehículos que arrendaba a salud. Yo ya no trabajaba en la corporación. Leónidas, refiriéndose a la Leónidas Quiroga, me vio que estaba esperando ser atendido por la gente de operaciones y ahí me comenta que estaban con estos inconvenientes que les habían pedido dinero para no sacar adelante el contrato colectivo, los dirigentes Juan y Don Rodrigo. Inequívocamente se refieren a Don Juan Astor y Don Rodrigo Herrera. Y en cuanto a la materialización de ello, Leónidas Quiroga le pidió que conversara con ellos. A ver, o sea, le pedían 15 millones de pesos, 12, 13, no me acuerdo, pero eran más de 10, que le dijeron si les podía pasar algo de dinero, que Alejandro me lo pasaría. Me lo piden porque él no tenía buena relación con ellos y yo sí la había tenido. Voy a la oficina Alejandro Aguilera y me pasa una cajita de dinero en una cajita de termómetro digital. Creo que eran 4 billones de pesos. Lo vi meter el dinero. Yo me acuerdo de que me junté con ellos para entregárselo. Me junté con ellos y no me acuerdo dónde. Y le pasé la cajita a Don Juan. Le dije que revise la cajita, la vio y ahí se fueron.

En tal sentido, Leonardo Gajardo, señaló haber recibido una instrucción personal de Luis Berwart en relación a la no presentación del proyecto de contrato colectivo, que guardó la prórroga de su escritorio. El convenio quedó guardado en su escritorio de manera dilatar y ellos pudieran cumplir con sus palabras. Ellos no iban a ingresar esto para que no tengan que pagar todo esto a los funcionarios y de esta forma retribuirles a ellos lo que ellos habían pedido. Manifestando además que el monto a pagar a los dirigentes por aquello era de 15 millones de pesos a cada uno.

Finalmente, refirió sobre una interpretación amplia del artículo 260 del Código Penal, que establece que los señores imputados son funcionarios públicos de efectos penales. La doctrina es unánime en ese sentido. Es un concepto amplio. Es un hecho público y notorio que la educación pública a contar del año 80 se municipaliza. Luego se hace múltiples preguntas y dice ¿La dirigencia sindical es una función pública y regulada? Sí. ¿A qué deben propender? A resguardar los derechos de los trabajadores. ¿Recibieron Coima, dádiva, un beneficio ilícito en razón de sus cargos? Sí. ¿En razón de sus cargos? Sí. ¿Pero además incumplieron



deberes funcionarios? Sí. ¿Cuáles deberes funcionarios? Los que le imponían su cargo de dirigentes sindicales. Artículo 20 siguientes. ¿Resguardaron los derechos de sus defendidos, de las personas que tenían a su cargo, como afiliados al sindicato? No. ¿Hubo contrato colectivo? No. ¿Se verifica el tipo penal del artículo 248? Sí. ¿En subsidio, si no se acoge, se verifica el tipo penal del artículo 248 que hubo hecho por la función? Sí. Pidió en consecuencia un veredicto condenatorio

**CUARTO: Posición y argumentaciones de la defensa.** La defensa, en su **alegato de apertura**, sostuvo que comenzaría presentando a las personas que representaba. Don Rodrigo Herrera, funcionario asistente de la educación por décadas, quien además ingresa al mundo sindical de dicho estamento, primero como partícipe, luego como parte de la directiva y termina dirigiendo uno de los sindicatos más grandes de funcionarios de asistentes de San Fernando, que al momento de la negociación colectiva de que se ha hecho referencia contaba con 235 socios, lo que está presente en la documentación que se va conocer en el presente juicio. Don Rodrigo Herrera, además de ser asistente de la educación, realiza trabajos manuales, todo tipo de reparaciones y pequeñas obras civiles, que es una forma también de incrementar su ingreso. Él tiene que pagar pensión de alimentos, vive en una casa que es arrendada, cuenta con el apoyo de su familia, de su madre en sus actividades diarias, en más, es su madre y puede incluso parecer curioso quien le maneja el dinero, disponiendo para él una cantidad por un supuesto estilo de vida que mantendría medio licenciosa. Luego don Juan Astorga, también funcionario por décadas como auxiliar de aseo y de servicio de la educación municipal de San Fernando, casado, con hijos, con nietos, que al igual que don Rodrigo Herrera ingresa al sindicato, compone directiva y termina siendo electo y reelecto como dirigente de uno de los sindicatos no grandes, sino que de término medio, en el caso del presente contrato colectivo, al momento de sucederse los hechos contaba con 107 socios asociados. En el caso de don Juan, además, prestaba servicios como nochera, entonces vivía en un inmueble que está dentro del liceo comercial de San Fernando, donde él trabajaba

Luego afirmó que el presente juicio trata sobre contratos colectivos, esto es derecho laboral, y sobre la participación que le cupo a sus presentados, no solo en el contrato colectivo que rigió la relación laboral de sus afiliados entre el año 2020 y hasta que se incorporaron al servicio local de educación pública, esto es a partir del 2 de enero del 2021. Esta incorporación por el solo ministerio de la ley

termina la relación laboral vigente con la corporación municipal de educación salud y menores de San Fernando y sin solución de continuidad, sin finiquitos de por medio pasan a depender directamente del servicio local de educación. Con esto los contratos colectivos, llegan a su fin en cuanto a las prestaciones colectivas. Que los contratos colectivos contienen dos tipos de prestaciones, y que una vez terminado el contrato se incorporan jurídicamente a los contratos individuales de los asociados y aquellas que son colectivos, derechos colectivos. En el caso de estos derechos colectivos, puso como ejemplo: fiesta del día de los funcionarios, fiesta de fin de año, caja de mercadería para el 18 de septiembre, otras prestaciones para navidad, estos eran beneficios colectivos que una vez terminado el contrato se dejaban de pagar. Estos contratos colectivos, regían al estamento de trabajadores más mal pagados de la corporación municipal de educación de San Fernando, estaba entre trescientos, cuatrocientos o quinientos mil pesos aproximadamente.

Acto seguido, señaló que los dirigentes son funcionarios de aseo y servicios menores, no estando acompañado de profesionales como si lo era la plana directiva de la corporación. Dentro de su autoformación como dirigentes fueron desarrollando esta actividad a través del tiempo con mucha voluntad pero poco conocimiento. Que acá se dirá por algunos testigos del ministerio público que eran expertos en la materia y quedará acreditado que esto no era así.

Prosiguió y afirmó que había en los contratos colectivos celebrados entre la corporación y los sindicatos una cláusula especial, que es determinante, que planteaba que en caso de vencimiento de estos contratos, automáticamente, salvo que alguna de las partes dijera lo contrario, los contratos se entendían prorrogados por un periodo igual. Esta cláusula está en todos los contratos colectivos, salvo el último que se presenta en el año 2019 pero termina suscribiéndose a mediados del año 2020. Esta cláusula, sus representados y así también la gente instruida como los abogados de la corporación la entendían válida, y también la inspección del trabajo que visaba estas negociaciones y jamás hizo alusión a que dicha cláusula tuviera algún vicio de ilegalidad o alguna contradicción con los principios generales de la negociación colectiva. En el año 2018, en noviembre del 2018 vencía el contrato colectivo del trienio 2015-2018, por lo tanto a más tardar en octubre del 2018 se debía presentar el proyecto de contrato colectivo de la continuidad y eso sus representados no lo hicieron, siendo un hecho de la causa, es algo que es parte

de la acusación, entendiendo que esta cláusula de prórroga automática los tenía cubiertos. Pero cuando se avisa ya de la inminencia del traspaso, ellos empiezan a hacer averiguaciones, y dentro de las averiguaciones era tener la certeza de que sus instrumentos colectivos estaban vigentes porque había un requisito, esto es, que los contratos colectivos tenían que estar vigentes a lo menos seis meses antes del traspaso. Por lo tanto, había una oportunidad y tiempo para presentar lo que tenía ese límite temporal. Estas averiguaciones ellos no las hicieron simplemente entre ellos, sino que acuden a las altas autoridades de la Inspección del Trabajo Provincial y Regional, logrando por intermedio de un parlamentario reuniones incluso con la Dirección Nacional del Trabajo. Ellos participan de distintas mesas técnicas de reuniones con altas autoridades del área donde ellos trabajan y terminan entendiendo que estaban sin contrato colectivo. ¿Cuál es el tema ahí? Es que como ambas partes entendían que la cláusula era legal, la corporación jamás dejó de pagar los beneficios individuales y colectivos del contrato colectivo que había vencido en octubre de 2018. La presentación del contrato, que es importante, cuando ellos ya descubren que están sin contrato, no había perjuicio para los asociados porque las liquidaciones no reflejaron jamás falta de pago de los beneficios de los contratos colectivo, también hicieron su fiesta, incluso en pandemia si bien es cierto no pudieron hacerla, se les dio el correspondiente dinero por funcionario que correspondía para la organización de esta fiesta. En esta última negociación el proyecto de contrato es presentado el 22 de octubre de 2019, debiendo aquí tener en especial consideración porque vamos a conocer testimonios de todo tipo, pero también se conocerá el testimonio de personas que siguen trabajando, no son imputados, eran parte de los sindicatos de los imputados, además sus dos representados actualmente siguen trabajando, siendo los únicos imputados de este caso que siguen trabajando en sus mismas funciones, ya no son dirigentes por las razones obvias, los sindicatos se disolvieron,

Se presenta este contrato el 22 de octubre de 2019, el 18 de octubre de 2019 es una fecha icónica en la historia contemporánea de nuestro país, pues el estallido social comienza ese día viernes en Santiago, se expande por el país y aquí en San Fernando pegó fuerte. Acá las protestas fueron fuertes, se quemaron los accesos a San Fernando, la gente salía todos los días, los servicios públicos cerraron. El caos que vivimos a partir del 18 de octubre de 2019 en adelante se encontró luego con la pandemia, en ese contexto el 22 de octubre habían pasado cuatro días, ya en San

Fernando había movilizaciones, ya la Inspección del Trabajo y muchas instituciones públicas no estaban atendiendo, lo mismo con la corporación. No se estaban haciendo clases, estaban todos los funcionarios en sus domicilios. En ese contexto se presenta este contrato y también paralelamente la corporación vivía un caos financiero. El año 2017 las movilizaciones de los estamentos de auxiliares de la educación y de docentes de esta ciudad fueron conocidas a nivel nacional, de hecho vinieron docentes y auxiliares de otras comunas y regiones a apoyar estas movilizaciones ante lo que era la debacle económica y financiera de la corporación municipal de San Fernando, siendo esa una de las razones de la creación de los servicios locales de educación pública, uno de los testigos de este juicio, un ex Seremi, quien ilustraría a vuestra señoría cómo San Fernando es elegido para iniciar esta nueva implementación, precisamente por lo que pasaba en la corporación. En ese contexto, los primeros días de noviembre de 2019 la corporación representada por Leonardo Gajardo y sus representados firman una prórroga para que la corporación pudiera dar respuesta al contrato colectivo. Hoy eso puede parecer lo que queramos, pero resulta que los primeros días de noviembre de 2019 estas personas eran los empleadores directos de sus representados. Que, todas las personas con las que se les acusa que se reunían constantemente eran sus jefes, el jefe de recursos humanos, el jefe de finanzas, el mismo alcalde y el secretario general de la corporación. Por lo tanto, en ese sentido que hayan acordado esta prórroga en circunstancias que no estaban siendo perjudicadas, les pagaban los beneficios colectivos, y esta prórroga se acuerda hasta mayo. La corporación explica y lo dice en el documento que firman que ellos estaban sujetos a una auditoría interna y que tras esa auditoría sabrían si contaban o no con los recursos para dar respuesta al proyecto de contrato colectivo. Y se firma esta prórroga. Don Leonardo Gajardo, luego de esto, primero sale de vacaciones, luego enferma, el tema es que no se vuelve a saber de él. En marzo, ante el cambio de secretario general, sus representados acuden a éste y el nuevo secretario general les dice que él no tiene idea de ningún contrato colectivo, ante ello se acude a la Inspección del Trabajo, donde ya se había ingresado el proyecto original recibido por Leonardo Gajardo, que le explica esta situación, y se ingresa el documento de prórroga a la Inspección del Trabajo, siendo allí donde la Inspección del Trabajo comienza a presionar a la corporación de que debe dar respuesta a este contrato dentro del plazo. Vencido el plazo, continúa la presión y

la corporación acepta el contrato colectivo 2019, en este caso ya 2020, hasta que terminase 2021 que asumía SLEP.

Que, se habla de un bono de término de conflicto, pero no hubo conflicto, primero estallido social, luego pandemia, todos los funcionarios en sus casas, todos, algunos podían hacer teletrabajo, pero la mayoría no, ellos hacen aseo. El bono de término de conflicto es como su nombre lo dice., es un preacuerdo o una pre-evaluación de daño que hacen los trabajadores con mirada a la huelga. Los trabajadores solamente se pueden movilizar en nuestro país legalmente, en el marco del convenio colectivo, una movilización fuera de dicho marco los pone en las situaciones del artículo 160 del Código de Trabajo, sobre todo si son reiteradas. Por lo tanto, el bono de término de conflicto tiene ese fin objetivo, resolver el conflicto pagándole a los trabajadores, pues los días de huelga no se pagan lo asumen los trabajadores de su bolsillo. El bono de término de conflicto tiende a evaluar ese perjuicio para que en caso de ir a huelga y llegar a un arreglo, el empleador sepa que va a tener que hablar en torno a esos montos, 100.000 pesos por trabajador se destacó y según documentación que se va a conocer en este juicio de la Inspección del Trabajo a noviembre, diciembre de 2019, el sindicato de don Juan Astorga tenía 107 afiliados y el de don Rodrigo Herrera 235. A don Juan Astorga tendrían que haberle pagado, si hubiera habido un conflicto, si hubiera habido una huelga \$ 10.700.000 pesos y a don Rodrigo Herrera 23.500.000 pesos. Estamos hablando que el soborno era por 15 millones, ósea a don Juan lo sobornan por más plata de la que le debían y la misma cantidad con la que sobornan a don Rodrigo, a quien se supone que le debían más de los 15 millones. Entonces no se explica. Se señala también que este contrato colectivo era un gasto enorme para la corporación y se puso acá como número de trabajadores 450, lo que no es así, son 342 trabajadores, por lo que si hubiese tenido que pagárselo a todos, eso señalaría 32.400.000 pesos y los sobornan con 30 millones, no era mejor abonar. ¿Y cómo iban a cobrar el bono de término de conflicto? También se les reprocha eso ¿En base a qué iban a demandar? ¿Qué abogado laboralista le iba a decir si tienen derecho?. Agregó que se habla de la aceptación tácita del contrato colectivo tiene efectos en las cláusulas del contrato, pero no en todas, hay cláusulas que quedan excluidas. Se habla del piso de la negociación y esta negociación no tenía piso, por cuanto el contrato anterior había caducado, por lo que el bono de

término de conflicto y esto lo he señalado la jurisprudencia laboral en derecho colectivo es así, tiene esa particularidad y por eso su nombre, pero acá no lo hubo.

La presente causa se da también en un contexto que quien advierte lo que pasa en la corporación en la Contraloría Regional, a través de distintos informes, no solo eso, esto ya venía de la administración de don Juan Pablo Molina. La contraloría comienza a reprochar los malos manejos de la corporación, pero hay un tema que reprocha especialmente y que también se va ver en este juicio, esto es, la sobredotación de auxiliares de la educación. La grasa le decían. Había que deshacerse de la grasa. ¿Y por qué esta sobredotación? Porque las campañas políticas pagaban favores políticos ingresando a esta gente que participaba, que votaba, como auxiliar de la educación, de lo que no requería mayor requisito y ello conllevó que hubiera en un momento siete auxiliares por docentes, lo que generó con los docentes una disociación, intereses totalmente contradictorios, porque la falta de plata para pagar las cotizaciones y los sueldos tenía que ver con esta sobredotación. Por lo tanto, ¿qué instruye la contraloría? Instruye los despidos. El estamento más barato y más vulnerable, más sujeto a despidos, eran los auxiliares de la educación y en derecho laboral para despedir a una persona tiene que tener su sueldo al día y sus cotizaciones previsionales al día, sino el despido es nulo, con las consecuencias que todos conocemos. Por lo tanto, la situación de los auxiliares de la educación, pese a la situación caótica, siempre fue mejor que la situación de los docentes. Ellos tenían tratos especiales que los van a conocer acá de los testimonios que se den, nunca se les quedó debiendo un mes de sueldo como si ocurrió con los docentes. A ellos les pagaban un trato de 70 a 30, 70 cuando había que pagar y 30 dentro del mes. Eso los docentes no lo tuvieron. Por lo tanto, cuando se habla que no apoyaban las movilizaciones de los docentes, es porque su interés se iba por cuerda distinta.

Luego refirió que sus representados, a diferencia de todos los otros imputados, son detenidos, formalizados y quedan en prisión preventiva el mismo día de la formalización por casi 50 días. En esos 50 días ellos prestaron declaración dos veces cada uno, fueron interrogados por la señora Fabiola, por gente de la Fiscalía y también concurrieron a declarar muchos testigos y los testigos de la defensa declararon en Fiscalía, no son nuevos testigos, es toda gente que estaba trabajando en ese momento y está trabajando hoy en el Servicio Local de

Educación Pública. Lo destaca, porque no es la situación de ningún otro imputado, pues ningún otro imputado está trabajando con los supuestos perjudicados, sus asociados, pues este cohecho es para perjudicar a los asociados y beneficiar al empleador. Que, las declaraciones de los testigos de cargo, entre los cuales están los imputados, pero también vienen personas que no son imputados, como la ex directora provincial del trabajo, viene un ex Seremi, vienen otras personas y también gente de la corporación que tenía labores administrativas, los que son totalmente disímiles. Tienen explicaciones totalmente disímiles. Dan cifras totalmente disímiles. Toda la investigación partió diciendo que era un funcionario en particular que estaba encargado de los pagos. Pero resulta que cuando ya la investigación transcurrió, terminaron siendo no uno, sino que más de uno..

Que bajo otra línea indicó que las razones para dejar detenidos a su representado, fue que don Juan Astorga había adquirido un vehículo nuevo y Rodríguez Herrera tenía depósitos por 1.200.000 pesos en su cuenta, lo cual eran absolutamente irregulares, respecto a todos los depósitos que eran su sueldo. El vehículo de Don Juan Astorga lo acreditó con los documentos que acompañó que lo había adquirido con la venta del vehículo anterior, que tenía un viejo Datsun, por el cual le dieron 2.700.000 y tanto. El saldo lo pagó con un crédito al Banco Estado en 48 cuotas, que se le descontaba mes a mes de sus remuneraciones. Don Juan Astorga vivía en la casa del liceo comercial, y tiene una casa propia que le arrendaba en aquel tiempo, casa que además tiene un local comercial, en la Villa Centinela, una casa esquina, por lo que sus ingresos estaban conformados por su sueldo, por lo que percibía por el arriendo de su casa y local comercial, y además Don Juan Astorga jubiló. Que a diferencia de los docentes, que al momento de jubilar son desvinculados sin pago de indemnización alguna, porque es causal legal de término, en el caso de Don Juan regido por el Código de Trabajo, no por el Estatuto Docente, no es causal de término.

Continuo y expuso que se dice que todo esto fue en dinero en efectivo y en sobre. A ello refirió que eran dirigentes sindicales de dos grandes sindicatos, a los cuales se les pagaba y se les tenía que pagar constantemente las cuotas sindicales y los beneficios colectivos. Los montos que se van a señalar y que han señalado los testigos van a coincidir con los beneficios colectivos cuando se trata de montos mayores, 5 millones de pesos, y es multiplicar 25 mil pesos por la cantidad

de socios de un sindicato y en el otro los mismos 25 mil o 30 mil en el caso de la gift card por la cantidad de socios.

Que la distinción de cohecho pasivo o activo, la que es doctrinaria, es importante de destacar, por qué cual el bien jurídico protegido del cual sus representados tenían la calidad de garante. ¿Cuál es la función de los sindicatos? ¿Es hacer política? No, la función de los sindicatos es lograr las mejores condiciones para sus asociados dentro de la relación laboral en materia de seguridad, también de remuneraciones y también de otras prestaciones que no son remuneraciones, capacitaciones, estas fiestas, estas convivencias, siento esta la calidad de e garante la de sus representados, por lo tanto, lo que tiene que acreditar el ente acusador, es que sus representados faltaron a esa calidad de garante respecto de ese bien jurídico, se e debe acreditar que los asociados fueron perjudicados, que no les pagaban las remuneraciones y demás prestaciones, bonos por bienes, por distintas cosas que tenían ellos durante el tiempo de la relación laboral y sobre todo durante la época que estamos hablando 2018 a 2021. Entonces tendría que haberse visto reflejado en sus liquidaciones de sueldo los no pagos, en el no cumplimiento de las obligaciones colectivas, de los derechos colectivos.

Que se hace una comparación entre el sindicato que sí era sindicato y los sindicatos de sus representados que eran obsecuentes, que eran dejados, que no peleaban. Había un sindicato, SAECON, dirigido por doña María Magdalena, quien se pone como ejemplo, ese sindicato tuvo el liceo comercial tomado durante tres meses, tres meses en que no hubieron clases, con sillas en las puertas, liceo comercial donde vivía su representado Juan Astorga. Él tuvo que recurrir de protección a la Corte de Apelaciones para poder entrar y salir de su casa contra la dirigente sindical a cargo de esta toma, año 2017. La forma en que ella se relacionaba, el ir a pelear, el ir al choque, ¿por qué se explica? Porque era buena dirigente plantea el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál era la diferencia que tenía con sus representados? ¿Por qué la forma era tan distinta? Lo van a conocer. El sindicato SAECON, en abril de 2018 caducó su contrato colectivo del trienio 2015-2018 y ese sindicato jamás volvió a presentar un proyecto, se le pasaron los plazos. Además, la dirigente en cuestión señaló en sus declaraciones, entre otras cosas que ella sí presentó el contrato, pero que nunca llegó al SLEP. Entonces, ¿dónde lo presentó? Sólo en la corporación y la inspección



del trabajo, que es el ente validador. Entonces, esta dirigente que se encadenaba, que peleaba, que maldecía, y que es vista como un ejemplo, resulta que no tenía contrato colectivo lo que explica su animosidad, en el sentido de tener que lograr de alguna forma lo que no podía demandar en tribunales. No tenía el derecho. Entonces, ¿y qué dice? No, nosotros no teníamos fiesta, no teníamos gift card ¿Y cómo si son derechos colectivos? Entonces, aquí no hay un tema de que este sí, este no, es que se hizo el trabajo que tenía que hacer. En más, a muchas reuniones su representado Juan Astorga no podía asistir por exigencia de esta dirigente y como había un problema judicial entre ellos, no lo hacía.

Prosiguió afirmando, que se iba tener que determinar acá si este soborno de 15 millones a cada uno era necesario, porque también este tipo penal conlleva una utilidad para el cohechador activo, nadie soborna a alguien para que haga lo que tiene que hacer, uno soborna para que la gente no haga lo que tiene que hacer o para que deje de hacerlo o para que haga un delito, que también son otras de las formas. Luego se preguntó si acá era necesario sobornar, no era mejor pagarle 10.700.000 de términos de conflicto a don Juan en cuotas como fuera y 23.500.000 a don Rodrigo y con 32 millones solucionar esto y no sobornar por 30 millones en circunstancias que todos los otros beneficios se estaban pagando, por lo que acá lo único que no se habría pagado es el bono de término conflicto, y el reproche es que no lo demandaron. No queda claro quién sobornó, quienes pagaban, cuánto pagaban, pues todos hablan de cifras distintas, de montos distintos.

Finalizó su exposición haciendo referencia al estándar probatorio y la presunción de inocencia, diciendo que el tribunal no dicta veredicto de inocencia sino de condena o absolución, incluso pueden salir absuelto por falta de prueba, pero sus representados nunca admitieron algo que no hicieron, tuvieron que salir bajo fianza, estando con arresto casi un año, luego pasan al nocturno y vuelven a trabajar inmediatamente. Pidió un veredicto absolutorio.

A su vez, en el **alegato de clausura**, sostuvo que respecto de las alegaciones de derecho realizadas por la contraparte adhería, tanto en lo que han señalado respecto al tipo penal que se imputa a sus representados como sus características. También dijo que no iba discutir el carácter de funcionarios públicos de sus representados, tanto en su calidad asistente de la educación como así también en

la calidad que se le imputa como dirigentes sindicales, lo único que iba cuestionar del tipo penal en el caso de la imputación del Ministerio Público, que habla de haber aceptado o pedido una dádiva, y en el caso de la imputación del Consejo de Defensa al Estado, que se refiere al 248 bis, que haber aceptado o pedido esta dádiva a objeto de omitir algo que tengan que hacer o hacer algo que no debían hacer. Es allí, donde la Defensa planteó su teoría del caso, desarrolló su prueba y llegó a este alegato de clausura.

Luego dijo que, todos queremos que la corrupción no avance en nuestra sociedad, es algo a lo que todos adherimos, quienes estamos aquí, pero también todos queremos, que nuestros tribunales de justicia juzguen y fallen en relación a una prueba que los convenza. Porque peor que la corrupción, es la situación de que una persona que no ha cometido un hecho ilícito sea condenada, así como también puede darse que una persona culpable deba ser absuelta. Recordemos que los fallos no declaran inocencia, sino que solamente absolución o condena. Y en ese sentido, adujo existir ciertos principios que debemos tener presentes en este juicio, uno de ellos el *in dubio pro reo*, es decir ante dos hipótesis que se deben verificar en los medios de prueba y que ambas hipótesis son posibles, en la duda la hipótesis que beneficia al encartado es la que debe prevalecer. Y también habló de uno de los principios de los estándares probatorios de nuestro derecho procesal, que está consagrado en aquella frase más o menos conocida de fuera de toda duda razonable, y con ellos superar la presunción de inocencia..

Que su defensa en este juicio hizo su propia investigación, hizo una defensa activa y esa propia investigación la aportó al Ministerio Público. Tempranamente sus representados declararon no una, sino más de una vez, estando en situación de prisión preventiva y también declararon los testigos que depusieron ante el tribunal. Así también aportó al Ministerio Público la prueba documental que terminó llegando al presente juicio. La defensa debía acreditar una afirmación negativa, no haber solicitado ni menos aún haber aceptado sobornos o cohecho, como se denomina jurídicamente. Y los hechos negativos no se pueden acreditar, los hechos negativos no se acreditan y por lo tanto la defensa lo que tenía que hacer era en base a hechos periféricos y positivos, que son verificables en el tiempo y el espacio, afirmar que los hechos imputados a sus representados no ocurrieron, que no les cupo participación culpable en estos hechos. Lo que hubo, entiende su parte, fue una extracción de dinero público para

hacer supuestos pagos de soborno, que al final de cuentas quedaron en manos de los que se supone son los agentes activos en este caso concreto del delito. Así sostuvo que entre los imputados acá uno de los testigos lo dijo, cree Alejandro Aguilera, que les pedía que por favor ya no pidieran más plata, también lo dijo Carlos Bozo. Entonces los imputados, Berwart en este caso relacionados con Quintanilla, su grupo, también aquí se habló que había dos grupos, uno Berwart, Quintanilla, Leonardo Gajardo y Leónidas Quiroga, idearon esto, señalaron entre ellos que tenían un arreglo con los dirigentes, que había que pagarles y que esta plata la iba a entregar Rodrigo Quintanilla, eso fue lo que hablaron. Entonces todos los testigos que se conocieron hablan de que otros les dijeron que supieron por otro, Alejandro Aguilera dice yo no estuve en la reunión, Rodrigo Quintanilla no reconoce haber estado en esa reunión, lo mismo Humberto Hermosilla

Luego reiteró que en base a hechos periféricos positivos su parte tenía que desacreditar lo que señala el Ministerio Público, que ha dicho que para ellos era muy fácil acreditar la dádiva y la función pública, no importaba el monto, no importaba la oportunidad, no importaba si había o no razón o utilidad para hacer este sobornos. Entonces de alguna forma le ponen a la defensa la tarea difícil de tener que acreditar hechos negativos, no haber incurrido los sobornos, no haber solicitado la dádiva, no haber causado o dejado de hacer lo que se le imputa que tuviera que hacer. Pero antes de entrar allí dijo que se habló mucho del trato de sus representados con los dirigentes de la corporación, se habló del trato cordial, cortés, de reír, de bromear, de ser pasivos, respetuosos al hablar, pero en ningún caso es demostrativo de nada. Sus representados desarrollaron su actividad sindical dentro de las normas de urbanismo y buen trato, pero a diferencia del sindicato y también voy a entrar en eso que se nos pone de ejemplo, ellos sí ejercieron las acciones legales, sí hicieron las denuncias administrativas, sí tuvieron juicios con su empleador. Lo que se les reprocha no haber salido a marchar, no haberse tomado colegio, pero eso no puede ser indiciario tampoco de que tenían esta relación subjetiva del empleador, de aquiescencia, de que aquí estamos para lo que usted quiera, de que no vamos a hacer problemas. Los sindicatos no están hechos para generar problemas al empleador, están hechos para facilitar las relaciones laborales entre sus asociados y el empleador tendiendo un poco a equilibrar o a equiparar la condición de cada uno. Un trabajador solo ante el poder del empleador básicamente no puede hacer nada más, pero asociado, organizado y

con las prerrogativas legales que tiene un sindicato obviamente pueden incidir en la mejor relación. Entonces que sus representados se reunieran con el jefe de finanzas, con el secretario general, con el jefe de personal y con el tesorero no puede bajo ningún punto de vista ser indiciario de una conducta indebida, ya que se estaba reuniendo con su empleador y con los representantes legítimos de su empleador. Casi todos los testigos que declararon hablaron de este buen trato, de estas reuniones permanentes, los propios testigos de cargo su señoría, resulta que aquí los únicos testigos de cargo que hablan así medio enredados de este acuerdo es el señor Berwart, que señaló que luego de una larga estadía en la cárcel pudo ir ordenando su idea, cuando al principio negaba este hecho y lo reiteraba, a medida que se fue prolongando la estadía empezó a dar visos, que le pidieron un préstamo, que fueron a hablar con él que era por una deuda. Entonces claro el ministerio público dice no importa porque se le pagaba, lo que importa es que se le pagaba, lo que importa es que ellos pedían, pero cuando uno está negando el pago, cuando uno está diciendo que esos hechos no ocurrieron, quien formula la imputación tiene la carga de la prueba, tiene que señalar para qué se le pagó, cuando se le pagó, cuál era el motivo, cuánto se les pagó.

A su vez, señaló, que el derecho colectivo no escapa a estas relaciones de cordialidad, de buen trato, de entendimiento, de diálogo, todo esto bajo un sustrato legal que permite que estas relaciones de buen trato no opten al ejercicio legítimo de derecho, a la exigencia de obligaciones, que fue lo que mis representados desarrollaron durante toda su actividad sindical. Para ello acudían a la jefatura en representación, sea de uno de sus asociados, de dos o tres, de todos. La representación del dirigente sindical es individual y conjunta respecto a los problemas de sus asociados y los testigos acá señalaron cuales eran esas problemáticas, que eran diarias, que eran recurrentes, recordemos que eran los sindicatos con más asociados dentro del estamento de auxiliares de la educación, llegando a sumar entre ambos sindicatos 342 personas en los momentos en que se desarrollan los hechos que han sido objeto de esta imputación, 342 personas que todos los días amanecían con un problema, todos los días tenían algún resquemor con el empleador, no le habían pagado alguna cosa, necesitaban un traslado, un certificado de antigüedad laboral, todo este tipo de situaciones se sumaba además a la problemática del cobro de las cuotas sindicales. Los testigos de cargo, tanto como los testigos de la defensa, refirieron como estas peregrinaciones a la

corporación la mayoría de las veces eran inocuas, lo hacían esperar, no llegaba el dinero, terminaban acumulándole las cuotas sindicales hasta un punto en que los dirigentes ya no podían permitir que no se les pagaran, que eran determinadas épocas del año. Recordemos que estos dineros tenían fines, los sindicatos les daban ciertos fines y tenían dos o tres fines particulares que para ellos eran importantes, la realización de una caja dieciochera o bolsa dieciochera en septiembre, la celebración del día de los asistentes en octubre y las celebraciones de fin de año. Eran en esta época, septiembre, diciembre donde los dirigentes las cuotas sindicales acumuladas, las exigían, insistían porque con ella cumplían estos fines. Una de las cosas que mucho se señaló, porque aquí se habla de indicios de corrupción, el buen trato, además llegaban y se estacionaban, ¿qué dijo el jefe de personal? Que ahí se estacionaba el que llegaba primero, que no había estacionamientos determinados salvo para el alcalde y para el concejo, pero el resto eran abiertos y el que llegaba primero podía acceder. Que, lo del trato preferencial, que pasaran directamente a hablar con los jefes, la señora Marcela López, señaló cuál era el trato que tenían los dirigentes en la Inspección del Trabajo, ingreso directo, no tenían que hacer cola ni esperar, si ella estaba disponible lo atendía inmediatamente, tenían trato preferencial y destacó las relaciones de cordialidad y buen trato que tenían los dirigentes. Entonces, si en el ámbito público, administrativo, los dirigentes sindicales que se entiende que representan a muchas personas, o sea, son muchas personas haciendo cola en una pura persona, tienen estas facilidades, tienen este trato deferente, este trato preferencial, como se ha reprochado en la Corporación, pero resulta que para efectos de la Inspección del Trabajo es lo mismo, tanto las instituciones públicas como privadas tienen este tipo de trato con estas personas.

Que, la actitud de sus representados, fue hacer denuncias ante la Inspección del Trabajo por no pago de cuotas sindicales, por prácticas antisindicales, por no cumplimiento en el pago de remuneraciones, que traían aparejadas múltiples de alguna forma lograban sus objetivos, se contraponían a la medidas de presión, que si bien es cierto pudieron haber logrado algún objetivo en su momento, generaron al sistema un problema mayor, del cual también se hace responsable a sus representados. Se dice, ¿cómo es posible que tuvieron estos contratos colectivos con tantos beneficios? Leonardo Gajardo habló de 50 a 60 bonificaciones de los contratos colectivos. Entonces, tenemos que ponernos de

acuerdo, ¿cuál era la función de sus representados? velar por los trabajadores o por las cuentas de la corporación, hacer exigibles los contratos colectivos o bajarse los sueldos, bajar sus prestaciones para que la corporación ordenara su desorden. Aquí hay dos problemas, una pérdida de subvenciones por la pérdida de matrículas que hizo bajar los recursos disponibles y por otro lado el actuar delictivo de todos estos dirigentes que según hemos conocido en este juicio, a raíz de las declaraciones de contexto de los testigos, fueron mermando los recursos de la corporación al punto de llevarle a aquella situación caótica y de deficiencia que se describió en el juicio.

Que, se conoció la opinión de la ex directora del trabajo, planteó que presentaron un proyecto de contrato colectivo en octubre del 2019 y presentaron una prórroga dentro de plazo, solo que después la prórroga no la llevaron a la Inspección sino recién en marzo, si entendemos de noviembre a marzo hay varios meses, pero también se conoció que los meses de febrero, enero y diciembre, en este estamento es de vacaciones, no queda nadie en la corporación, no queda nadie en los colegios, por lo tanto, en esta época de tres meses en que se demoraron en llevar está a la Inspección del Trabajo se explica por un lado por eso y por otro lado, se estaba en pleno estallido social ya noviembre, diciembre, enero, febrero del 2020, fueron de protesta y movilizaciones fuertes. Luego afirmó que la Inspectora del Trabajo obvia al igual que los acusadores que como no contestaron dentro de plazo, dieron la prórroga dentro de plazo, sí, pero la prórroga podía ser por diez días, y cualquier prórroga fuera de eso era ilegal, también se sostuvo que sus representados tenían amplio conocimiento de la legislación laboral, don Juan Astorga tenía mucho conocimiento pero tenía más conocimiento don Rodrigo Herrera, entonces ¿qué nos dice la ex directora del trabajo? Y dice la fiscalizadora solamente puede ser por diez días, y ellos tenían que saberlo, y debían saberlo, pero el manual práctico de la negociación colectiva, de don Cristian Andrés Aguayo quien en su página 182 dice lo siguiente, plazo para efectuar la respuesta de contrato colectivo, es de diez días contado desde su presentación, las partes de común acuerdo podrán prorrogar este plazo por el término que estimen necesario, y que pasa si sus representados hubieran accedido un manual parecido a este, se hubieran encontrado con esto. Luego se pregunta cuál es la sanción a una prórroga mayor de los diez días, la norma no lo especifica, la norma solo especifica la sanción a la no respuesta oportuna dentro de plazo, y

cuál es la sanción, los dirigentes sindicales no tienen que hacer nada, por el solo ministerio de la ley se transforma en contrato colectivo, o sea, los dirigentes no tenían que requerir el apercibimiento, no tenían que hacer alguna actuación especial, presentar un escrito, nada, por el solo ministerio de la ley, el contrato colectivo se verificó el día 21, tenían contrato colectivo, todo lo que hicieron después de esperar, después de insistir para que se lo aceptaran, estuvo de más en un contexto de desconocimiento, tanto por parte de los trabajadores como del empleador.

En cuanto a la prueba de cargo indicó que era una contradicción, que no se entiende, contradicciones insalvables en lo que os dijeron y depusieron respecto de estos hechos. La prueba de la defensa cuenta de declaraciones de testigo, un abogado, Rocío Escudero, que participó en todo esto, y las declaraciones de los miembros de los sindicatos que hablaron de la falta de perjuicio, las declaraciones de ambos tesoreros, que negaron cualquier tipo de participación delictiva de sus representados, ellos manejaban las plantas, daban cuentas, no tuvieron perjuicio, claro, dirán es gente ignorante que no sabía los perjuicios que se les causaron. Que los sindicatos por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre del 2020 se disolvieron, la relación laboral entre la corporación y los trabajadores terminó, por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad, pasó a SLEP, por lo tanto, señalar en estos estados, su señoría, que los trabajadores perdieron fiestas, perdieron gift card, el incremento del 7% o el 3%, es consecuencia de la ley, no tiene que ver con el actuar o no actuar de sus representados, pues un contrato colectivo vigente como el que tenían sus representados, no hacía ultra activo ni la fiesta, ni ninguno de los derechos colectivos, solamente los derechos y bonificaciones individuales, o sea, hay derechos que son individuales y que tampoco son para todos.

Referido lo anterior, hizo un análisis de la prueba de cargo señalando que María Quiroz Contreras, dijo que nunca escuchó que les pagaran, que los dirigentes llegaban a cobrar sus plata, que no había fondos, que iban por consultas de sus asistentes, que Magdalena nunca le habló del sobornos, ella era cercana a Magdalena, señaló también este testigo que ella no iba a las reuniones del sindicato, por lo tanto que en realidad participaba poco, y eso es con la mayoría de la gente de los sindicatos, no van a las reuniones, quienes van solo los directivos, hay uno que otro interesado, se rendían cuenta, eso declararon los testigos de

cargo. Esta testigo también dice que el contrato de Magdalena es totalmente distinto, que no tenía estas prestaciones, bueno, la prueba de cargo eso lo desmintió, también declaró doña Gladys Trujillo Donoso del sindicato de doña Magdalena, dice que solamente vieron a los dirigentes en la marcha el 2017, habló del trato de los dirigentes, declaró sobre Magdalena que le habían ofrecido dinero, hasta 50 millones para que se saliera del sistema, ningún testigo habló respecto de sus representados ni siquiera Magdalena hablo de sobornos respecto de ellos.

En cuanto a las planillas Excel dijo que la concepción de pago lícito y ilícito, que hicieron los testigos, es bastante extraña, a menos que los testigos estuvieran totalmente conscientes de la situación y supieran que destinar dinero de un presupuesto al pago de otras cosas, por muy legal que sea el pago, es también una desviación de fondos públicos.

Que, Valentina Dana también fue citada como una de las testigos importantes. Bueno, su señoría, decir que Valentina Dana fue despedida en enero de 2016 y nunca escuchó que les pagaran su soborno. En cuanto a la testigo Magdalena Valenzuela dijo que más que una declaración imparcial, una suerte de revanchismo, que con ella no tenían un buen trato y a sus representados siempre los trataban bien. Pero el señor Berwart dijo que no había discriminación con los sindicatos, y los mismos directivos dijeron que ella llegaba peleando, llegaba gritando. Y las supuestas diferencias no eran resortes de sus representados. Que el Leonardo Gajardo reconoció haber firmado una prórroga y dijo que la prórroga se hizo por las razones que el documento señala.

Luego afirmó, que los testigos de cargo dan distintas razones para el soborno, el señor Berwart dijo que debían un bono, que él no arregló los temas, lo mandó a hablar con Leonardo Gajardo, el señor Aguilera, el tesorero, dijo que también debían un bono, que estas negociaciones se hicieron antes de septiembre del 2019, que era un bono de 100 millones de pesos. Que el señor Gajardo dijo que llegó al acuerdo, el que era dejar el contrato colectivo escondido y no hacer nada, pero sin embargo sus representados ingresan a la Inspección el proyecto de contrato colectivo, y a partir de ahí la obligación pasaba al empleador, contestar, hacer las impugnaciones de legalidad, o no hacer nada y luego regía ipso facto, por lo tanto las afirmaciones que hace el señor Gajardo son desmentidas por los documentos, hay un hecho su señoría que da cuenta de que esto no es así, el señor Gajardo, en noviembre del 2019 dirigió un oficio a la Dirección Regional del



Trabajo, solicitando se informe si la cláusula de prórroga automática de los contratos colectivos de los sindicatos estaba vigente. Esta respuesta a su señoría llega en febrero del año 2020, donde le dicen que esa cláusula no corresponde por las razones que ya hemos expuesto. Por lo tanto, señalar que tanto la corporación como los sindicatos no hicieron nada no es así. O sea, lo pueden decir y lo dijeron acá, pero los documentos dicen lo contrario. Por un lado, los sindicatos hicieron lo que tenían que hacer, ingresaron el documento donde tenían que ingresarlo. La prórroga la ingresaron en marzo, es verdad, pero la ingresaron. Alguien que tenía que mantener una actitud pasiva, primero no ingresaba el contrato a la Inspección del Trabajo para que no comenzaran a correr los plazos, y luego no ingresaba la prórroga. Para la prórroga no hay plazo su señoría. No se dice que la prórroga tiene que ser ingresada en tal o cual parte, no hay una obligación legal que cumplir al respecto, como si la hay respecto al contrato colectivo.

Ahora bien, respecto del bono de término, pues la acusación la dejaron en segundo plano, dice que el acuerdo era para no pagar un término de bono de conflicto 45 millones, para no hacer efectivo el contrato colectivo. A lo que indicó que ambos sindicatos tenían en total 340 afiliados, el sindicato de don Juan Astorga tenía 107, a 100 mil pesos por cabeza, serían 10.700.000 pesos y le pagaran 15 millones, absurdo. Al señor Herrera le debían 23.500.000, y le pagaron 15 millones, no era mejor pagar el bono, Que sus representados siempre han negado los hechos pese a que les hicieron ofertas bajísimas de pena. Luego afirmó que sus representados hicieron muchas denuncias y hubieron sanciones al empleador, de los documentos que acompañó así se establece, lo que no se condice con la actitud pasiva de una persona que ha sido sobornada. Que los dirigentes siempre sostuvieron que tenían contratos colectivos vigentes, siempre entendieron eso, tanto que existe un informe de fiscalización del año 2021 que así lo verificó. Entonces, lo que aquí se pretendió decir, que perjudicaron a sus asociados al pasar al SLEP sin contratos colectivos vigentes, pero ello es desmentido por la prueba documental, es desmentido por la prueba de descargo, y también a por la prueba de cargo. Toda vez que es el propio Leónidas Quiroga, quien acepta el contrato colectivo en su calidad de secretario general de la corporación,

Respecto de Humberto Hermosilla dijo que todo esto lo conoce por Quintanilla, pero el señor Quintanilla dice que no le contó nada a Humberto Hermosilla. Entonces, las contradicciones entre los propios testigos son patentes, el

alcalde dice que es porque se debía un bono, Alejandro Aguilera que es porque debían 100 millones de pesos, Leonardo Gajardo que era para que esto no se presentara a la Inspección el contrato en circunstancias que se presentó. En circunstancias que firmó una prórroga. En circunstancias que mandó un oficio y recibió respuesta en febrero. Que toda la tesis de la fiscalía era que esto lo acuerda a Berwart, que el a, el encargado de los pagos era Quintanilla, que Alejandro Aguilera dice que le pasó sobres a Rodrigo Quintanilla y que solamente el último lo pagó él, Rodrigo Quintanilla acá dice que no recibió ningún sobre y que un día le pasaron una caja que le entregó no sabe cuándo y que por este dinero que pagó, don Juan le había dicho entonces nos va la huelga. En el año 2020, ¿huelga de qué? ¿Huelga de Zoom? Había paralización de colegio, de actividades, estábamos en cuarentena. Entonces, ¿cómo iba a haber una huelga? Además, cómo alguien no se va a acordar de algo tan relevante referente a dónde entregó cuatro millones de pesos y respecto a los otros pagos los negó. Y dice sí, que una vez le dio un sobre en su oficina en la corporación. Pero resulta que también nos dijo que él trabajó solamente hasta el 2020 y nos dicen que los acuerdos se empezaron a cumplir desde junio del 2020.

A continuación hizo alusión a dolo y dijo que el dolo en materia penal se hablaba antes que era voluntad y conocimiento, pero ya la doctrina ha dicho que en realidad es conocimiento. El conocimiento de la actuación de los agentes sindicales se ajusta a derecho. Acá se dijo, la corporación primero mandó el contrato el 2018 y hubo que pedirle a la Inspección del Trabajo y hubo que mandar el contrato que ellos tenían el último proyecto del 2019. Y eso generó este tema, pero al final les pagaron todo con efecto retroactivo.

Al concluir solicitó que el veredicto fuera absolutorio, dada las graves contradicciones, don Pablo Bravo dijo que esto pasó en 2017, por poner otro ejemplo. Luego aseveró que la prueba de cargo no fue suficiente para echar abajo la presunción de inocencia de sus representados y por el contrario haber sido la prueba de descargo suficiente para acreditar que la actuación de sus representados se ajustó a derecho, cumplieron sus obligaciones, sus obligaciones era representar a los asociados al sindicato, que estos no se hubieran perjudicado y que pasaran en el SLEP con su contrato colectivo vigente, lo que en definitiva se verificó pese a todo lo que se dijo.

**QUINTO.** Versión de los acusados. Informados ambos acusados de su derechos a guardar silencio renunciaron a ellos y optaron por declarar.

En primer lugar declaró **Rodrigo Herrera Bustamante**, quién sostuvo que inició como dirigente en el año 2009, cuando fue elegido secretario del sindicato, que era a la fecha el más representativo. En agosto del año 2011 el presidente del sindicato fallece y él quedó como presidente interino. De ahí en adelante se vinieron otras elecciones y los asociados y fue electo y reelecto varias veces como presidente sindical. En ese tiempo, 2010-2011, estaba de alcalde Juan Pablo Molina. En noviembre de 2012 no se les canceló el sueldo completo y por ello estuvo 16 días en huelga de hambre. En esa época en Fernando se estaba pasando por una crisis económica en la municipalidad y corporación municipal. Luego les pagaron los sueldos de diciembre y enero. En diciembre de 2012 estaba asumiendo el nuevo alcalde que era Luis Berwart.

Lo primero que se hizo cuando llegó la nueva administración fue que en mayo de 2012 las personas quedaron con un contrato indefinido y se aumentó la planta de los asistentes de la educación.

A la vez dentro del año 2012 a 2013, enero y febrero nunca se les había pagado sus remuneraciones a los asociados que tenían contrato a plazo fijo, pese a que había una ley y ese año se les canceló enero y febrero por primera vez.

Después en el transcurso de 2013 se siguió dejando gente con contrato indefinido por favores políticos.

En el año 2018 al 2019 se les dijo que la cláusula no aplicaba a la negociación colectiva, pese a que estuvieron varios tiempos con el contrato vencido y a los asociados les cancelaban todo, incluso los aportes que estaban dentro de la negociación en el artículo 13, que decía que el día del asistente de la educación, se les pagaría por el empleador, es decir, por la corporación \$25.000 por asociado, para la actividad. También se les cancelaba una Gift Car para final de año de \$30.000 pesos, la que se entregaba a cada socio en la fiesta de finalización de año. Pero teníamos que presentar el proyecto, creyendo todo eso estaba vigente y se dieron cuenta que iban a ser traspasados y la ley de educación pública decía que

los sindicatos tenían que pasar con un instrumento colectivo vigente, seis meses antes del traspaso. De ahí fueron con Juan Astorga y el jefe de recursos humanos de la corporación, Rodrigo Quintanilla y la abogada Rocío Escudero a la dirección regional donde les explicaron que el artículo no existía, pues estaba sobre la ley y les dieron la opción de presentar un nuevo proyecto de contrato colectivo, el que presentaron el 22 de octubre de 2019, después vino el estallido social, y los llamó (a ambos acusados) Leonardo Gajardo, para preguntarles si podían hacer una prórroga de esa negociación para dar la respuesta.

En el año 2019 en la Inspección de Trabajo la señora Marcela López no dio ninguna observación de la presentación, lo visó y después aceptó la prórroga diciendo que era legal, por lo que ellos pensaron que con la prórroga le estaban dando tiempo. Después vino el tema del estallido social, y después como se estaba cumpliendo el tiempo para pasar al servicio local de educación y no tenían respuestas del empleador, fueron a la Inspección nuevamente para ver qué pasaba con la prórroga, y la señora Marcela López envió un documento a la Corporación Municipal para que dieran respuesta al instrumento colectivo. La respuesta que dio Leónidas Quiroga, que estaba como gerente de la Corporación fue que aceptaba los términos de la negociación colectiva. De esa fecha en la que ambos sindicatos estuvieron sin proyecto de contrato colectivo, a ningún asociado se les dejó de pagar todos los beneficios, por ejemplo, la movilización, bonos, diferentes artículos que incrementaban el sueldo a los asociados, los que nunca se dejaron de pagar. Cuando empezó la pandemia, tenían el día del asistente de la educación, pero se suspendió la fiesta y les pagaron el aporte que les daba la Corporación, que eran \$25.000, que estaban contemplados en la negociación colectiva. Ese dinero lo retiró él porque la tesorera en ese momento andaba en Santiago por un problema médico, y Alejandro Aguilera le pasó \$5.200.000 con relación a la cantidad de socios. Cuando llegó la tesorera se hicieron sobres de \$25.000 pesos para cada socio y se les entregaron el 22 de diciembre del año 2020. Además, se les entregó a los socios una gift card que también era beneficio del instrumento colectivo que todavía no estaba reconocido y lo vinieron a reconocer después, a mitad de año. Siempre se los canceló en los mismos términos con los aportes de la Corporación.

Se hizo aportes para celebrar el día de la madre, el día del padre, se les cancelaba las cuotas sindicales, las que cobraban y eso lo usaban para hacerles a los socios cajas para el 18. Que se vino a enterar de lo que se le está acusando cuando fue detenido en su colegio, llegó PDI y le dijeron que era por falsificación de instrumento público y al tiro tuvo que entregar su teléfono, frente a lo que no tuvo ningún problema, de ahí se fue al cuartel de la PDI donde estuvo toda la noche y al otro día, en el momento del juicio, cuando lo estaban formalizando, se enteró y estuvo 49 días con visitas del abogado y él le explicó que se les acusaba que les habían pasado plata por abajo. Nunca negoció solo con algún jefe, tampoco alguien le propuso acordar algo así ni escuchó eso, y todavía sigue sorprendido por todo lo que ha vivido desde la detención, por todo lo que vivió dentro de la cárcel. Siempre se dedicó al trabajo de gremio de los asistentes, sobre todo de los auxiliares o asistentes de la educación, a buscar más beneficios, tratar de que la gente hiciera cursos de capacitación, porque también había un incremento para ellos que implicaba aumento de sueldo. Nunca perdieron algún beneficio obtenido en una negociación.

A las preguntas efectuadas en primer lugar por su defensor, señaló que nunca dejaron de recibir los aportes de la corporación. La última vez que hicieron una fiesta de funcionarios fue en el año 2019. El nuevo proyecto lo presentaron el 22 de octubre de 2019 y la fiesta la hicieron el primero de octubre y la Corporación les facilitaba el internado del Liceo Eduardo Charme y ahí también hacían la fiesta del sindicato y premiación de los asistentes que cumplían 25 y 30 años de servicio. La fiesta aludida la hacían porque era un beneficio que estaba dentro de la negociación colectiva 2015-2018, pero se las siguieron pagando después.

El proyecto de contrato lo presentaron primero al empleador y lo recibe Leonardo Gajardo que era en ese tiempo gerente general de la Corporación Municipal, cargo que ejerció hasta abril del 2020, porque tuvo un accidente vascular y de ahí asumió Leónidas Quiroga. Entre octubre de 2019 y abril de 2020 Gajardo estaba todos los días en la corporación. Cuando iban a la corporación (ambos acusados) se relacionaban siempre con Rodrigo Quintanilla de recursos

humanos porque veía los temas de personal, temas de asociados, algún beneficio que no se les estuviera cancelando o cosas así del gremio de los asociados.

También se relacionaban con el secretario general, cuando había alguna situación compleja en algún colegio. Entre octubre de 2019 hasta diciembre de 2020 fue secretario general Leonardo Gajardo. También conversaban cuando iban a la corporación con Humberto Hermosilla, que era el que veía la salida de los dineros de la corporación y él le decía a Don Alejandro que él era el que cancelaba las cuotas sindicales de alguna fecha, porque las cuotas sindicales nunca se pagaban mensualmente. Ellos iban todos los meses a cobrarlas, pero no tenían dinero. Entonces llegaba el punto de que a veces retiraban cuatro meses de cuotas sindicales y hasta seis meses seguidos, pero siempre recuperaban las platas.

La explicación que les daban para no pagarles a tiempo las cuotas sindicales era que no tenían dinero y por eso se hicieron denuncias ante la inspección y también les mandaban oficios.

Acompañaba a los socios a la corporación por diversos problemas, por ejemplo, acosos laborales y se hacían las denuncias correspondientes en la inspección de trabajo para llegar a soluciones, como cambios de colegio, además, casos de socios a los que no se les pagaban los bienios, o para que les reconocieran los años de servicio y a la cuando incrementaban el sueldo y pasaban dos meses y los asociados se daban cuenta que no les estaban pagando, entonces tenían que ir para que se los pagaran retroactivamente.

También había asociados que podían optar al incentivo al retiro y eso lo veía con Rodrigo Quintanilla y Leonardo Gajardo y “la jurídico” para ver la forma de pago. Lo que siempre era en más de una cuota, pero de todos modos más conveniente para los asociados que demandar con abogado el cobro del incentivo.

Sobre la presentación del último convenio colectivo afirmó que los llamó Leonardo Gajardo para proponerle la prórroga, la que aceptaron por una parte porque estaban viendo el tema de los dineros, tratando de ordenarse en el tema de lo que iba a pasar adelante, de los documentos que tenían que mandar al Servicio Local de Educación Pública que se venía y les estaban pidiendo (a la Corporación) toda la documentación y por otra parte porque les estaban cancelando todo lo

correspondiente al contrato colectivo dentro de las liquidaciones de sueldos y ellos esperaban que la batalla era que tenían que tener ese contrato seis meses antes del traspaso al SLEP, ese era el objetivo de ambos dirigentes, para no perder los derechos adquiridos.

Una vez pidió un préstamo para arreglar la sede sindical, pero nunca se llevó a cabo porque la sede era una casona de adobe, que se estaba cayendo y propuso que les pasaran dinero para arreglarla y se los pagarían con cuotas sindicales. Lo pidió a Leonardo Gajardo y él le dijo que lo iban a ver y también lo hablaron con Rodrigo Quintanilla y con el jefe de operaciones, pero ese préstamo nunca se concretó e incluso tuvieron que entregar el edificio porque se cayó el techo. También pidió varias veces anticipos porque no le alcanzaba el sueldo y se los descontaban por planilla, los que fueron como de \$200.000.

Sobre su trabajo señaló que es auxiliar de servicio en mantención en el colegio Villa Centinela y sus tareas concretas son hacer aseo y reparación de cualquier índole. Además, emitió unas boletas a la Corporación, por unos trabajos, pero fue en la época del alcalde Molina y esas boletas fueron de \$50.000 aproximadamente por trabajos de estructura metálica, soldadura en canchas de algún colegio, por ejemplo, en la escuela Centinela, fuera del horario de trabajo porque algo extra y en la corporación había trabajadores que hacían ese trabajo, pero no les alcanzaba el tiempo para ver todos los otros colegios y era más rápido que lo hiciera él. Todo eso pasó en el año 2012 y una vez en el primer periodo de Berwart por trabajo de pintura de salas de la misma escuela.

Su relación con el alcalde Luis Berwart era como la de cualquier ciudadano y dirigente y no tenían reuniones periódicas, pues podían pasar 2 o 3 meses que no lo veían. No participó en sus campañas políticas ni fue apoderado de mesa ni vocal y tampoco lo hizo para otro candidato.

Su relación con Rodrigo Quintanilla era como la de cualquier jefe, empleador- trabajador dirigente. Trataba de solucionar con él ámbitos de lo que le afectaba a algún asociado, lo que ocurría en la oficina de la Corporación Municipal. En el año 2018 o 2019 cuando Quintanilla ya no estaba en la Corporación los invitó a él y a Astorga a su oficina en el colegio San Fernando College, para mostrarles la

oficina y contarles por qué se había ido de la Corporación. Después los llamó para ofrecerles un trabajo porque se venía el tema del traspaso y nadie sabía si iban a haber despidos porque ellos ya no iban a tener la calidad de dirigentes y perdían el fuero. A él le ofreció trabajar en manutención en el colegio, pero no aceptó y a Juan le ofreció trabajar como nochera, con casa. Después no los volvió a llamar ni se reunieron con él.

Consultado por el motivo del llamado de Rodrigo Quintanilla cree que hay maldad en lo que les hicieron porque aquel dice en una declaración que supuestamente les entregó plata en la oficina del citado colegio, supuestamente dos millones a cada uno, lo que no es efectivo.

Que, don Alejandro Aguilera era el tesorero de la corporación. Ellos iban visados por el secretario general a ver el tema de las cuotas sindicales, les entregaba los aportes de la negociación colectiva en sobre. Para el día del asistente le entregaba en cuotas dos millones quinientos con un decreto de pago, el cual él firmaba, sin quedar con copia de eso.

Respecto de su relación con el señor Hermosilla dijo que se comunicaba con él en la corporación, a veces por teléfono o por WhatsApp, que una vez le pidió un anticipo, el que estaba avalado, él lo tenía que visar, no tenía tarjeta de débito en ese tiempo y le tenían que pagar en efectivo y ahí le dijo que lo depositaran en la cuenta Rut de su padre. El sacó a finales del año 2019 tarjeta de débito, y fue por el tema del traspaso que les exigía una cuenta vista.

Con Carlos Bozo se relacionaba muy poco, sabía que trabajaba en operaciones, una vez les gestionó las gift card, se las trajo a la corporación, pero más allá nada.

Con el señor Herrera casi nada de relación, vino como secretario general de la corporación cuando estaba en crisis. En mesas colaborativas llegaron acuerdo de pago del 70 a 30 %.

Con respecto a doña Luisa Faundez, dijo que era la tesorera del sindicato, dentro de las mesas colaborativas ella tenía nula participación. Que como tesorera cobraba las cuotas sindicales y participar en reuniones cuando negociaban colectivamente, en su sindicato cobraba las cuotas a veces él o ella.



Respecto de doña Marcela López señaló que siempre iban a la Inspección y conversaban con ella, le explicaban el tema de vulneración de derechos interponían denuncias, lo que le extraña que cuando presentaron el proyecto el 22 de octubre de 2019, ella sabiendo que el anterior había caducado en noviembre de 2018 no les hizo ninguna observación. Luego ocurrió el estallido social y la pandemia.

Que entre octubre de 2018 y diciembre de 2020 presentaron acciones contra e empleador solo ante la inspección del trabajo.

Con doña Magdalena estuvieron en mesas colaborativas, nunca tuvo conflicto con ella.

Que tuvo un permiso en su trabajo de no ir a trabajar, se conversó con el empleador, pues además del fuero sindical que tenía, la tesorera y secretaria les traspasaban sus horas y además estaba en una coordinadora regional de los asistentes de la educación que estaba en Rancagua. Ese permiso duro cuatro años y no iba a su lugar de trabajo. Fue en el año 2016 hasta el 2019.

Con relación a don Pablo bravo refirió que era administrador municipal y cuando no estaba el alcalde a él los atendía en casos puntuales como por ejemplo ayuda para un asociado que falleció su madre, por el tema del cementerio, eso era municipal no de la corporación.

La relación con los docentes era buena, sus luchas iban por caminos distintos eso sí. Que participaron en dos movilizaciones, una incluso a nivel nacional. Que no participaron en movilizaciones netamente docentes, pues a ellos se les cancelaba todo.

A las consultas de la fiscal señaló que tenía permiso sindical de 10 horas a la semana legalmente, y eso era lo que tenía antes de llegar al acuerdo de no ir a su lugar de trabajo. Su concurrencia a la corporación era según la situación que tuvieran, a veces estaba toda una semana en la corporación a veces llegaban a las 9 de la mañana y salían casi a las dos de la tarde.

En cuanto a la negociación de los proyectos colectivos dijo que desde el año 2000 se iban agregando artículos pero siempre eran los mismos contratos. Aludiendo que tenían un beneficio de reajuste del 7, 5 es sobre el reajuste de los

funcionarios fiscales. Sumado que tenían un beneficio de pago por los estudios, era una beca de estudio que pagaba el empleador Corporación Municipal San Fernando. Tenían fiestad de fin de año, pago de gift card, día del asistente sin conflicto. Las negociaciones eran calmas y tranquilas, eran los contratos similares. Además se pactaba un bono de termino de conflicto, y se pagaban cien mil pesos a cada trabajos cuando había conflicto, pero dice que estaba pactado el pago, y si había conflicto ahí aplicaban ese pago. Que nunca hubo conflicto. Que en el año 2013 se fijó un pago de cien mil pesos por termino de negociación se pagó, en el 2105 también y se pagó.

Que en el año 2019 presente el proyecto con la firma de Leonardo Gajardo ante la Inspección, quedó formalmente ingresado, que era lo mismo que se hacía siempre, la diferencia que estuvieron sin contrato desde el año 2018 a 2019, pero en la realidad le siguieron pagando los beneficios. Que el proyecto una vez presentado queda en espera y ahí luego firmaron la prórroga. Que fueron hablar con la inspectora Marcela López para que le dieran respuesta el empleador, ya que no tenía respuesta de aquel,, para que mandaran un documento a la corporación a fin de dar respuesta a la negociación colectiva. Que no conocía la norma de los 20 días de plazo máximo. Que la señora Marcela nunca les hizo observaciones que esto no se podía hacer por un tema legal. Que ella oficio en documento a la corporación que tenían que dar respuesta y de ahí don Leónidas Quiroga aceptó el contrato colectivo en junio de 2020, don Leónidas adujo que no tenía el proyecto. Que pasaron 5 meses entre que presentaron el proyecto y presentaron esta prórroga de plazo en la inspección. Dice que no hubo contrato colectivo 2019 , que venía el traspaso al SLEP , que tenían que tener un instrumento colectivo vigente seis meses santes del traspaso al nuevo empleador, y eso ocurrió y fueron a la contraloría y le reconocieran el contrato colectivo y ocurrió. Pero estaba vigente el proyecto firmado en el año 2019, en primera instancia el SLEP lo desconoció.

Que, como dirigente había dialogo, tenía buenas relaciones, pero igual tenían que esperar ser atendidos, a veces pasaban cinco horas para ser atendidos.

Su relación con Rodrigo Quintanilla era más frecuente por ser jefe de recursos humanos, a veces semanal, dos veces a la semana y cuando estaban en las mesas colaborativas en la dirección provincial.

Con Pablo Bravo solo cuando no estaba el alcalde los atendía él. Solo se relacionaba con él y todos los directivos dentro del horario laboral.

Con el señor Hermosilla tenía una relación de empleador a trabajador, se trataban bien, tutear nunca, eso si el respeto, don Humberto don Rodrigo, en la mensajería e WhatsApp e le decía Rodrigo y él le decía jefe.

La solicitud de anticipo de remuneración no la hacían todos los asociados, pero gran parte si, lo hacían a través de él pero en algunas ocasiones no.

Que, en las mesas colaborativas, las que fueron varias, era una mesa técnica con alcalde, seremi, dirigentes de profesores y de asistentes de la educación e incluso apoderados de liceos, tocándose más el tema del sueldo, como se iba cancelar el mes que venía, para pedir recursos por parte de a SEREMIA y que no fueran desviados a otra partes, también conversaban del incentivo al retiro, el documento para que la educación pasara a agencias locales. Que los asistentes ganaban mucho menos que los profesores por eso la realidad era distinta y les pagaban el 70% y después de dos semanas el 30%, primero que, a los docentes, pero por ser más bajos sus sueldos. A los tres sindicatos se les cancelaba por igual y también era por las buenas relaciones. Que había sobredotación de asistentes, lo que venía de la época del alcalde Juan Pablo Molina, pero de los trabajadores fantasmas supo en una de estas mesas colaborativas.

En cuanto a su relación con el señor Berwart dijo que tuvieron una reunión con el alcalde en su oficina, que pasan dos o tres meses y había otra, que lo conocían.

A las consultas del querellante dijo ser auxiliar de servicio, tenía obligaciones funcionarais, que era auxiliar de la educación y se regía por la Corporación Municipal, siendo educación municipal. Además, tenía el cargo de dirigente sindical, teniendo obligaciones por dicho cargo, que era defender los derechos de cada trabajador, que estuvieran dentro de la negociación colectiva, que

le cancelaran sus bonos, era garante de los derechos de sus asociados. Que a la época de los hechos llevaba 10 años como dirigente.

En cuanto al proyecto de negociación colectiva del año 2019 indicó que ignoraba lo de la cláusula 19 de la negociación colectiva, en cuanto a la prórroga del contrato si no se presentaba otro, indicando que no debía saber ello, ya que no era legal.

Que dentro del plazo legal debía hacer apercibimiento le dice el querellante y dice que no hizo eso porque firmaron una prórroga, y que tenía entre 10 a 15 días. Presentaron esa prórroga en noviembre de 2019.

La fiscalía hizo un nuevo interrogatorio, y señaló que en marzo de 2020 presentaron la prórroga y se hizo en noviembre año 2019. Luego dice que la prórroga se presentó en noviembre de 2019 y en marzo hicieron presentación para que se diera respuesta al proyecto de contrato colectivo.

Que firmó la prórroga a principio del mes de noviembre, la firmó Leonardo Gajardo, Juan Astorga y su persona.

A continuación declaró **Juan Astorga Opazo** e indicó de manera libre comenzó negando rotundamente las acusaciones, dijo tener 75 años, y 20 años de labor sindical partiendo en el año 2004, defendiendo los derechos de los trabajadores, y ahora hace un año y medio que no tiene nada más. Que defendiendo los derechos de los trabajadores jamás escuchó de su parte un hecho de esta naturaleza, lo que lo dejó muy marcado hasta la fecha, porque cuando los detuvieron no había ninguna orden de la PDI, no los llamaron a declarar ni la fiscalía ni la PDI, solamente los detuvieron. Continuó y dijo que lo vivido fue horroroso, el infierno mismo, padre de familia, nietas, nunca pensó llegar a ese infierno, donde los trataron peor que un perro, donde con enfermedad, diabetes, hipertensión, covid, los tiraron en unas celdas de tres pisos, como una rata, estuvo siete días sin remedios, con baños con unas fecas hasta el tope, que su compañero tuvo que destapar con sus propias manos, no se lo da ni al peor enemigo, a su edad es terrible, pero confía en la justicia a pesar de todo. Luego afirmó estar acá porque se les acusa de que dejaron estar el convenio colectivo, dejamos pasar ese tiempo para que los socios nuestros no recibieran sus beneficios, y eso no es verdad. Los socios de principio a fin recibieron todos sus beneficios, ninguno quedó sin sus beneficios, obviamente que ellos utilizaron, tal como lo dijo

Rodrigo, el artículo donde decía que de no mediar ambas partes este contrato quedar estipulado como tal y así lo entendió la corporación, porque ellos también siguieron pagando. Se siguieron pagando todos los beneficios de los trabajadores, entonces no hubo ninguna señal que les dijera, oye, están sin contrato, efectivamente, porque se confiaron en ese artículo. Después de ello venía el traspaso, el traspaso implicaba que había que tener un contrato colectivo vigente, antes de los seis meses y ellos anteponiéndose a eso fueron a la Inspección del Trabajo y consultaron por dicho documento si efectivamente estaba legal y les dijeron no, porque no corresponde, pero como si lo presentaron ahí y no hubo ninguna observación. Que ante ello fueron a la corporación y hablaron con sus empleadores, de ahí concurrieron a la Dirección Regional de Rancagua con la jurídica del departamento Rocío Escudero y el jefe de Recursos Humanos Rodrigo Quintanilla y ahí el abogado de la Dirección Regional les dijo ¿quién inventó esto?. Que desde el 2002 viene dicho artículo, donde 15 años nadie hizo observación a ese contrato, a ese artículo, donde pasó por corporaciones, pasó por la Inspección del Trabajo y nadie hizo una observación que ese artículo no correspondía porque estaba por sobre la ley. Porque la ley dice claramente que una vez finalizado ese contrato colectivo se debe negociar otro o presentar un proyecto de contrato colectivo, pero como decía de no mediar ambas partes y estaba la situación caótica en la Corporación, iban a reuniones a la Provincial, ocupaban las platas de las subvenciones, era un despelote, entonces ellos y su empleador optaron por dejar ese artículo que después resultó que jugó en contra de nosotros. Pero reiteró, que ningún asistente de la educación perdió dinero porque se pagaron todos los beneficios. Con respecto al bono término conflicto indicó que efectivamente tenían que priorizar primero el contrato colectivo, donde iba inserto el bono de termino de conflicto, pero lo importante era que llegaran al SLEP con todos los beneficios, porque el traspaso a los servicios locales de educación era sin solución de continuidad, por tanto por el solo misterio de la ley debían pasar allá. ¿Es decir ellos tenían que tener un contrato vigente a la fecha antes de los seis meses, es decir junio. Obviamente que hubo algunas situaciones que escaparon porque ellos son dirigentes que se formamos a pulso, no tuvieron mayor preparación, no tenían conocimiento jurídico y eso permite que hoy en día nos cuestionen. Pero el tema es que los acusan que ellos se dejaron estar para que la gente perdiera plata y así poder sonarlos, pero en ningún momento la gente

perdió plata. Que se les cuestiona el 7.5, pero eso viene del 2008 y venían insertos en los tres contratos colectivos, eran contratos de cortar y pegar de esos contratos, porque ellos iniciaron ese contrato, estaba del 2000 y lo fueron perfeccionando de acuerdo a sus conocimientos y las consultas que hacían, que ese 7.5. viene del año 2008, el beneficio no era para él sino el beneficio era para todos los asistentes de la educación, porque eran los que menos ganaban, incluso lograron el reconocimiento a través de la ley 20.244, el reconocimiento de los asistentes de la educación, porque antiguamente eran co-docentes. Que a través de toda esta trayectoria hicieron dos congresos a nivel nacional con todos los asistentes del país en San Fernando, entonces jamás pensó de que iría a estar sentado en un estrado acá por esto, pues era su hobby, era lo que quería pero ya no, porque le mataron el alma, pero va demostrar su inocencia. Lugo afirmó que esta para decir la verdad, hubiese sido más fácil haber aceptado la propuesta de la fiscal porque les ofreció 61 días, pero tenían que declararse culpables, pero no, tiene nientas, principio y valores, nunca hubo mala intención con respecto al contrato colectivo, porque la única premisa era defender los derechos de los trabajadores.

**Luego ante las preguntas formuladas por la defensa** refirió que presentaron el último proyecto de contrato colectivo en noviembre, pero es malo para las fechas, del año 2019, cree que fue el cuatro de noviembre, que el empleador tenía diez días parece para contestar el proyecto, que antes que venciera el plazo el señor Gajardo, en ese entonces secretario general, les pidió una prórroga y aceptaron la prórroga porque no tenían mayor conocimiento de la legalidad, aunque llevaban muchos años de dirigentes, pero no tenían porque saber qué es lo que está bien o no, a lo mejor cometieron ese error y aceptaron la prórroga. Que esa prórroga la aceptaron antes de que venciera el plazo de respuesta. Luego el defensor le exhibe la prueba documental ofrecida por dicha parte y correspondiente a la número 19, del cual se indica que se trata de un documento cuya materia es prórroga del plazo, fechado en San Fernando 4 de noviembre de 2019. El acusado leyó "Prórroga de plazo, San Fernando 4 de noviembre de 2019. En mérito a lo establecido en el artículo 329 de inciso 1 y 1 del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 32 de inciso final del mismo texto legal, por este acto y de común acuerdo comparecen los sindicatos SETRACOM y SIDETRACOM, representados por los comparecientes Juan Astor Opazo, presidente de SIDETRACOM, y don Rodrigo Herrera Bustamante,

presidente de SETRACOM y directivas correspondientes de cada organización, todos con domicilio en la comuna de San Fernando, junto con su empleador, la corporación municipal de San Fernando, representada legalmente por su secretario general, don Leonardo Gajardo Valenzuela. En virtud de la resolución número 1328 de fecha 15 de abril de 2019, vienen en prorrogar los plazos establecidos en los artículos antes señalados para que el empleador haga entrega de la respuesta al proyecto de contrato colectivo, dejando como fecha final para el día 30 de mayo del 2020. Con todo, el plazo se amplía de esta manera para que los sindicatos conozcan de la auditoría contable y financiera que se está realizando en la corporación municipal de San Fernando, con objeto de traspaso al servicio local de educación de municipalización, que ayudará a conocer las posibilidades reales de compromiso económico por parte del empleador”, firman Leonardo Gajardo, Rodrigo Herrera y Juan Astorga. Ahora rectificó y señaló que el 22 de octubre presentaron el proyecto de contrato, y entonces antes de que se cumplieran los 10 días hábiles, firman este documento, el que fue firmado en la Corporación municipal, lo guardaron y después vinieron las vacaciones, estaba el estallido, la pandemia, vino enero, febrero y en marzo recién presentaron ese proyecto porque sabían que había que legalizarlo ante de los seis meses, fue la prórroga la que presentaron ante la a la Inspección del Trabajo a la señora Marcela López, quien le puso el timbre, no hace ninguna observación y la archiva. El plazo para contestar el empleador vencía el 20 de mayo y cuando venció el plazo de la prórroga ellos se preocuparon como dirigentes y como representantes de los trabajadores y fueron a la Inspección del Trabajo y le comentaron a la señora Marcela López ministro de fe de ese entonces que la corporación no contestó, ante lo cual ella les indicó que no se preocuparan que el contrato ya quedaba establecido como tal por la no respuesta del empleador, pero que ella le iba enviar un documento al señor Quiroga, quien se negó a firmar el documento porque aducía e no le correspondía en razón que no había firmado el contrato de prórroga . Que ante ello la señora Marcela le hizo ver de era un contrato solemne y que estaba establecido por ley y que debía firmarlo porque ya Don Leonardo Gajardo lo había firmado y él tenía que reconocer ese contrato. Al poquito tiempo llega el reconocimiento de Don Leónidas Quiroga oficiándole a la señora Marcela López y a ello de que el contrato sí se acepta en todos sus términos.

Prosiguió y dijo a su defensa que ellos les solicitaron vía oficio a doña Marcela López que les diera respuesta sobre el contrato pero no lo hizo. Que, entre que presentan el contrato el 22 de octubre de 2019 y el vencimiento de la prórroga que era para mayo de 2020 se pagaron íntegramente, no hubo ninguna pérdida de dinero con respecto a su sindicato. Luego señaló que tenían beneficios de dos tipos, unos que eran colectivos y otros individuales, como la cena aniversario a fin de año, el día del asistente de la educación, becas para los hijos de los trabajadores, asignación de hogar para la gente que trabajaba en los internados. En cuanto a las gift card indicó que era una compensación al día del asistente de la educación, también a quien cumplía 25 y 30 años de servicio, era de 25 y 30 mil pesos por su año de servicio. Consultado sobre la relación con Alejandro Aguilera señaló que era como con todos los funcionarios de la corporación municipal, no era cercana ni lejana, pues los funcionarios de la corporación municipal eran sus jefes, su empleador, por tanto no eran amigos, pero tampoco éramos enemigos, tendían un trato cordial, de respeto hacia ellos, independiente de la situación que pudiera pasar, porque su premisa como sindicato y como institución fue siempre mantener el respeto a la autoridad, independiente de dónde viniera o cómo llegara y por eso se les trató muchas veces de pasivos, de no hacer nada, pero la prueba es el contrato colectivo es el tercer mejor contrato a nivel nacional elaborado en el país, que iban a conversar con el señor Aguilera cuando tenían que ir a cobrar las cuotas o los beneficios del contrato colectivo, lo que era esporádico, porque de repente no tenían plata para las cuotas y ahí había que ir e insistir, y él iba generalmente con su tesorero, quien recibía esa plata y firmaba, cuotas que se pagaban en dinero en efectivo y nunca se les dio copia del recibo de pago. Que la última vez que cobraron cuotas sindicales fue a fines de año, ya cuando la corporación estaba terminando, no quedando cuotas impagas a diferencia de Rodrigo Herrera que le quedaron debiendo cerca de dos millones y tanto más o menos en cuotas sindicales. Luego aseveró que ese año 2020 estaba la pandemia, que ante ello se cerraron los colegios, que ese año por la fiestas de fin de año se les regaló dinero a los socios, los que se iban entregando en un sobre, dinero que salió de los beneficios del contrato colectivo, que fue dado por la corporación municipal, a través de don Alejandro Aguilera, el que fue entregado por mano a su tesorero, se contaba y firmaba un documento y se iban. Sobre otro punto refirió que llegar a una huelga, a una marcha, paro era exponer a su gente, aunque sí lo hicieron



algunas veces. Que muchos de sus afiliados no querían las marchas por miedo a ser despedidos otros más radicales iban a la marcha. Que iban a las reuniones, mesas técnicas, a él se le prohibía la entrada por Magdalena Valenzuela quien tenía cierta animadversión contra su persona, porque fue secretaria de su sindicato y él la expulsó por lo mismo, el sindicato la expulsó porque se arrogaba la representación de la institución, no eran las formas que ellos querían como sindicato, pues ellos buscaban el diálogo, buscaban los buenos oficios y ella iba por el camino más violento, más prepotente. Que hubo una persecución de parte de esta funcionaria contra él y hasta la fecha, porque ellos no aceptaban su forma grosera de actuar. Que le cerró el colegio, se tomó el colegio por dos meses, el liceo comercial, donde él vivía, en una casa ubicada al interior ya que su labor era cuidar el colegio día y noche, solamente tenía el día sábado libre en la noche. Y ella se tomó el colegio, le pone rejas, le pone candado, le pone cadenas al portón donde salía y le puso cadena acá a la entrada, y él tenía que pedirle permiso a ella, tenía que, poco menos que humillarse para poder salir del colegio con sus nietas. Llegó hacer tanto que presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones le dio el favor, mandó una orden de no innovar. Esas son las peleas que tenía con él. En las reuniones que había, porque hacía reuniones con el director provincial de educación, que en este momento está imputado, condenado, no sabe, el señor Riquelme, le prohibían entrar, solamente podía entrar Rodrigo Herrera. Que los acusaban a ellos que les pagaban. Que cuando se aprobaron los 50 millones, dentro de los concejales estaba el señor Riquelme, nunca se rindió cuenta de esos millones y nadie dijo nada. Que de parte de don Alejandro recibieron pagos desde que él asumió el cargo ya que era el tesorero, que cuando no había plata los desvirtuaban, vuelvan más tardes, también se pegaban plantones independientemente que fueran respetuosos, también recibieron portazos en las narices, no todo era de dulce, también era de la agraz. Luego afirmó que iba en vehículo porque había un estacionamiento para el personal y para las visitas, y se le cuestionó eso, se le dijo que era prepotente porque estacionada su vehículo, pero todos estacionaban su vehículo ahí, por qué él no. Que una de las premisas de su acusación fue que tenía un vehículo, tenía un auto, se llegó a decir que tenía tres vehículos y tres casas, lo único que tiene es su autito. Que tenía un vehículo chico, lo dio en parte pago y se consiguió un crédito en el banco, lo que está documentado. Lo único que tiene en este momento es su

casa de 50 años atrás, la que fue arreglando porque la arrendaba ya que vivía en el colegio, no pagaba luz ni agua, y fue ahorrando. Que su patrimonio hoy es su casa, su auto y su familia.

Que con don Albino Humberto Hermosilla tenía muy poca relación porque en realidad él no era prioridad para ellos, ya que era encargado de gestión, que cuando iban de repente estaba con el señor Aguilera, pero nada que dijera que éramos amigos con él, que nunca gestionó un pago o préstamo con él. Se le cuestionó que hiciera horas extras, dice que cuando había elecciones la municipalidad lo contrataba, el municipio, no la corporación, inclusive del actual alcalde tiene un contrato, le hacían un contrato de honorarios de 112 mil pesos porque atendía a los militares. Con respecto a alguna hora extra, si la corporación no quería contratar a otra persona, le decían a él que las hiciera, hora extra, vacaciones de verano, por qué no, si no salía a vacacionar. Y eso era los beneficios que tenía. Que los feriados 18 de septiembre y 1 de mayo no tenía día libre, ya que vivía en el colegio y las luces y el agua potable estaba en la entrada, por tanto pascua, 18, años nuevo, tenía que estar, ya que había que encender las luces en la noche y apagarlas en la mañana, lo mismo el agua, cortarla y darla. Entonces ellos de alguna forma lo compensaban, le decían te vamos a dar una hora extra, pero o todo firmado. Que con Carlos Bozo no tenía ninguna relación, que cuando falleció el jefe de operaciones quedo a cargo el señor Bozo y en alguna oportunidad les entregó una Gift card. Que con don claudia Herrera llegó como secretario general subrogante y tuvieron el mismo trato que con los otros secretarios generales, es decir, de secretario general a dirigente sindical. Por lo tanto, lo único que los unía con él eran los conflictos que habían con respecto a los no pagos con los socios y cuando no los atendía el secretario general buscaban otras instancias, porque esa era nuestra labor.

Que, se decía que ellos eran muy pasivos, pero ellos solo trataban de seguir el conducto de todos los demás dirigentes, poner los temas sobre la mesa, tratar de solucionarlos. Pero en ese aspecto, con diálogo, con respeto, no pegando patadas, groserías ni gritos. Entonces se les cuestionó por eso, pero lograron cosas. La señora Magdalena, sí pegaba patadas y gritos, porque era su forma. Que del año 2019 y luego del traspaso al SLEP el sindicato de doña Magdalena no tenía contrato colectivo, porque no lo presentó en tiempo y forma porque también se

confió, tenía la documentación, el mismo contrato de ellos, pero ella no hizo lo que ellos. Luego dijo que hay un informe de la Inspección Provincial, don Carlos Silva, que certifica que los contratos de ellos eran válidos y que Magdalena no había presentado. Entonces, se les culpó a ellos., y que culpa tenían si hicieron lo que tenían que hacer como dirigentes por su gente.

Ahora bien, respecto don Leonardo Gajardo dijo que fue un señor que trabajaba en el municipio y como habían pasado por tanto secretario general, porque ya nadie quería ser secretario general de la corporación por todas los problemas y dineros que ocupaban. Que el señor Gajardo les dijo que asumió el cargo porque lo manda don Luis, que es el secretario de la corporación, ahí le plantearon que tenían que firmar un contrato colectivo y que había que hacerlo sí o sí porque venía el traspaso y había que tenerlo, y ellos como dirigentes sindicales tenían que responderle a la gente. Y aun así, la gente seguía recibiendo su dinero y por ello le extraña cuando dicen es que la gente ha perdido plata. Que volviendo al señor Gajardo dijo que la última presentación del contrato colectivo, se lo hicieron a Leonardo Gajardo en la corporación y él le pidió por favor le dieran una prórroga para ver los estados financieros de la corporación porque en ese momento le estaban haciendo una auditoría y ellos como dirigentes, desconociendo la realidad, lo hicieron de buena fe, dijeron claro, demos una prórroga, si total, teniendo el contrato colectivo antes de los seis meses que nos pide el SLEP fantástico. Que a don Leónidas Quiroga lo conocieron cuando era jefe de finanzas, con quien tuvieron muchísimos problemas, ya que les decía que fueran al día viernes, por ejemplo, a buscar los dineros de los socios y parecía que él andaba viajando en España, es lo que le comentaban, entonces cuando lograba llegar y lo confrontaban no los trataba de buena manera y ellos hacían el reclamo correspondiente al secretario general, que cuando le sucedió el accidente al señor Gajardo llegó como secretario general el señor Quiroga, lo que fue un golpe bajo para ellos. Que fue él quien terminó aceptando el proyecto de contrato colectivo, porque la Inspección del Trabajo le envía un documento donde le dicen que los plazos están expirados y que por lo tanto debe aceptar ese contrato colectivo. Agregó que solamente conversaron con el señor Quiroga por los beneficios atingentes al contrato colectivo, que era lo más lógico, que con ningún dirigente de la corporación hablaron de beneficios personales.

En cuanto a la relación con el señor Berwart dijo que era una relación de trabajador a empleador porque en este caso él era el mandamás. Que en su primera alcaldía tuvieron buena llegada, se participó, les cumplieron con los contratos. No había mayores problemas. Pero ya en la segunda alcaldía se apartaron de él porque vieron muchas cosas que no condice con lo que ellos querían respecto a los asociados, a sus sindicatos. Que cuando iban a conversar con el señor alcalde era cuando no les daban respuesta en la corporación. Y cuando no estaba el señor Berwart los atendía el señor Bravo, porque era el administrador municipal. Que la relación con el alcalde era de dirigente a autoridad. Que no participó en las campañas políticas el señor Berwart y tampoco fueron apoderados de mesa de él.

Respecto de doña Marcela López dijo que no hubo buena llegada porque primero les validó un documento y después lo rechazó ahora último, al formar un asociación, eso fue antes que lo detuvieran. Que durante el año 2019 doña Marcela recibió el proyecto de convenio colectivo, lo timbró y firmó sin observación alguna. Que cuando recibió la prórroga la firmó y timbró nuevamente y no les hizo observación de su legalidad, que esto fue en marzo de 2020. Que entre que presentan el proyecto y el día que firman la prórroga el 4 de noviembre no fueron a la Inspección, porque había pleno estallido social, después vino diciembre, fiestas año nuevo, enero febrero y vacaciones y dijeron presentemos esta prórroga en marzo, lo que hicieron ante la Inspección. Luego fueron a la inspección y le solicitan que la corporación le de respuesta al documento, ella les dijo que iba enviar un oficio a la corporación donde dice que tenían la obligación de reconocer el contrato porque los plazos se vencieron, por tanto el contrato colectivo quedaba legal.

Que, con el señor Pablo Bravo no tenían ninguna relación, sabían que era el administrador municipal y que cuando no estaba el alcalde era él que determinaba la situación que pasaba en la corporación. Respecto del señor Quintanilla dijo que lidiaron con él por ser el jefe de persona y de recursos humanos, por tanto toda problemática que se producía con los asociados, ya sea de pago beneficio, pago previsión, lo tenía que solucionar él. Entonces, claro, se veían más con el señor Quintanilla por la situación que se presentaba, como él era jefe de recursos humanos y él tenía que responder. Como le reitero, siempre iban acudir a él

porque él tenía que solucionar los problemas, porque cuando hablábamos con el secretario general él nos decía, hablen con Quintanilla, que él es el que tiene que solucionar los problemas. Que conversaban la oficina de él en la corporación municipal. Que llegaban a la corporación y a la secretaria le preguntaban si estaba el jefe de recursos humanos, sí, adelante pasen, y los hacían pasar. Que a veces le reclamaban porque no pagaban las previsiones o lo de la caja. Que después que dejó de ser jefe de personal los invitó dos veces, una para hacer ostentación de su cargo, gerente general de San Fernando College, mostrarle las dependencias a su oficina y a tomar un café y a la chimuchina de qué pasó y por qué te fuiste y cosas por el estilo. Y la segunda oportunidad los invitó porque les tenía un ofrecimiento de trabajo, ante lo cual le respondieron que lo lamentaban mucho pero ellos estaban contentos donde estaban trabajando, que esto fue a fines del año 2020, antes de que terminara la corporación y los llamó vía telefónica, les pareció rara la invitación pero saber porque se había ido fueron.

Consultado sobre el bono de término de conflicto del último contrato colectivo dijo que estaban preocupados más que nada de pasar al Servicio Local de Educación con el contrato vigente. No estábamos mayormente preocupados del bono de término de conflicto. Porque si pasaban con ese contrato colectivo, la gente hasta ahora está muy conforme, muy contenta, porque pasó con todos los beneficios. Nadie les preguntó por el bono de término de conflicto, porque no hubo conflicto y ellos tenían la percepción de que también ese bono era ilegal al no tener huelga, caso contrario dijeron que la ley de traspaso decía que tenían que tenían cinco años para cobrarle al municipio, o quien esté, las deudas que quedaron con la corporación. Entonces, la idea nuestra era esa, formamos la asociación, una vez que tengamos la asociación formada, presentamos legalmente ante los tribunales el pago, esa era la idea.

**A las consultas de la fiscalía** señaló que ellos fueron a Rancagua y les dijeron que la cláusula de prórroga era ilegal, por tanto tenían que eliminar esa cláusula y presentar el contrato nuevo sin ella. Se les pregunta nuevamente ¿si estaban en el convencimiento de que tenían un contrato prorrogado por otros tres años, es decir 2019, 2020, 2021, por tanto estaba vigente? Y reitera que cuando fueron a Rancagua se les dijo que la clausura de prórroga no correspondía, por tanto debían negociar nuevamente y presentar otro proyecto de contrato colectivo,

pero fue bastante antes de la presentación del proyecto. Que viene trabajando como dirigente sindical pero hay cosas legales que las desconoce, ya que no por ser dirigente tiene que saber todo, se formó a pulso y hay cosas que se escapan. Que pasaron 15 años y recién les vinieron a decir que ese punto era ilegal, cuando pasó por varios municipios y nadie dijo nada. En definitiva hicieron las consultas en Rancagua y no se preocuparon porque la Corporación siguió pagando los beneficios igual. Consultado sobre cuál era la dificultad de presentar otro proyecto si era casi copiar y pegar, y señala que como dirigentes también tienen problemas de índole familiar y problemas de otra naturaleza y a lo mejor se les pasó el tiempo y se dieron cuenta después. Que la directora del trabajo de San Fernando recibe el proyecto que va firmado por él, por el señor Herrera y por el señor Gajardo, y ahí queda el documento. Que no sabía cuál era el plazo para responder que tenía el empleador, lo que si como se seguían pagando los beneficios dijeron estamos en lo legal. Que el documento de prórroga tenía fecha 4 de noviembre pero no se presentó ante la Inspección el 4 de noviembre y ese fue el gran error de guardar el documento. Presentaron esa prórroga en marzo por pecar de ingenuo, al creer que estando firmada estaba en lo legal, ellos y el secretario general la guardaron pero pasado el tiempo y recién en marzo presentaron el documento y le dijeron a la señora Marcela que tenían una prórroga, que luego paso mayo y la corporación no respondió y fueron a la inspección y doña Marcela les indicó que el contrato quedó legalizado porque la corporación no respondió, y que ella iba enviar un documento a la corporación, lo que hizo. Luego dijo que nunca ella le dijo que se salieron de una negociación colectiva reglada al haber presentado la prórroga en marzo. .

Consultado por las horas extraordinarias dijo que el jefe de recursos humanos debía visarla o autorizarlas, y el director del colegio debía dar cuenta de esas horas cumplidas, porque el director debía hacer un informe. Se le exhibe decreto de pago, y respecto de aquel dice que debería aparecer la firma del director del establecimiento pero no está firmado, tal vez se comunicaron con el director por teléfono. Ante ello dice que no sabe si esto es una excepción a la regla. Que vivía en el colegio, que siempre trabajo de noche cuidado el establecimiento, velando por la seguridad de colegio, que cuando se tomó doña Magdalena el colegio él iba saliendo al hospital, pues estaba enfermo y al otro día le informó al director de ello. Que le pagaban vacaciones de verano, a lo que explica que él le

ofrecían quedarse por menos dinero y él lo hacía, eso era en el día, mientras él estaba de vacaciones aprovechaba eso, pues había que hacer mantención y aseo. Se le exhibe documento del 9 de mayo de 2018 donde se indica horario de trabajo 2019 y refiere que trabajaba de las 20:00 hasta las 12 horas y de las tres y media hasta las siete y media, solo trabajaba de noche. Que conversaba con el alcalde cuando no le daban respuesta en la corporación, pero sobre el contrato colectivo no tuvieron contacto con él siempre los evadió, los mandaba al secretario general, de hecho en este último contrato no estaba la firma del alcalde, estaba en otra., no quería transar, en los otros contratos aparecía el alcalde firmando

Que doña Marcela López nunca fue concisa en sus respuestas, decía no sé, lo voy a conversar y existía a su juicio más afinidad con el sindicato de Magdalena. En cuanto al contrato colectivo ella les recibió el contrato, lo firmó y timbró, pero no había mayor dialogo con ella. Que no preguntaron por el bono de término de negociación sus asociados porque confiaron siempre en ellos, que en ese tiempo no estaban preocupados de saber sobre la situación del contrato colectivo, algunos delegados sabían , pero no le daban mayor importancia, confiaban en ellos, mientras no perdieran los beneficios

Al interrogatorio de la querellante dijo que se desempeñaba como auxiliar de la educación municipal y también tenía el cargo de dirigente sindical a la época de los hechos. Que como dirigente sindical debía negociar con el empleador condiciones comunes de trabajo, se trataba que tuvieran la implementación, de que se cumplieran con los horarios, y que el trabajador cumpliera a cabalidad lo que se estipulaba en el contrato. Luego dijo no saber si era garante de los derechos de los asociados pero era el representante de ellos, que entre las obligaciones de dirigente estaba la de negociar contratos colectivos. Que recurría al conducto regular primero jefe de recursos humanos, secretario general sino administrador y por último el señor alcalde como presidente de la corporación, eso a nivel de sus empleadores. Que ante la omisión de respuesta de la corporación en cuanto a haber depositado un proyecto de negociación colectiva dijo que debía ir a la Inspección del Trabajo para hacer la denuncia correspondiente y dice que esto no lo hizo en este caso porque estaba el artículo 19 que se renovaba automáticamente. Luego dice que había que hacer otro contrato colectivo porque en Rancagua le dijeron que estaba fuera de la ley el artículo 19 del contrato colectivo. Que

presentó el proyecto de contrato colectivo, que estaban dentro del plazo cuando presentaron la prórroga que les pidió el secretario general, que el error fue guardar la prórroga creyendo que lo estaban haciendo bien porque le seguían pagando los beneficios, no era más que eso. La presentaron en marzo de 2020 la prórroga. Que la corporación no sabía que ese articulado no era legal, por eso le seguían pagando los beneficios. Que llevaba 20 años de dirigente, que no todo lo sabe porque es ser humano, su cabeza puede asumir muchas cosas pero también olvidarse muchas cosas. Que antes no había prorrogado un contrato colectivo, y en esta ocasión lo hizo por la situación de la corporación, pues había caos financiero, exceso de personal. Y pese a ello les seguían pagando los beneficios, pues hay un piso que no se puede eliminar ningún punto, no podían decirle a la corporación dada la situación financiera rebájeme el contrato colectivo, además no era culpa de ellos el problema financiero.

**SEXTO:** Convenciones probatorias Los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

**SÉPTIMO** Prueba incorporada en el juicio. El **Ministerio Público** y la **Querellante** ofrecieron prueba común. En tal sentido incorporaron como **prueba testimonial** las declaraciones de Alejandro Aguilera Bava, Albino Hermosilla Cabrera, Ana Rozas Toro, Carlos Bozo Hevia, Gladys Trujillos Moscoso, Leonardo Gajardo Valenzuela, Leónidas Quiroga Montenegro, Luis Berwart Araya, Luisa Faundez Hidalgo, Marcela López Ávila, María Valenzuela Morales, María Quiroz Contreras, Pablo Bravo Cruz, Rodrigo Quintanilla Maldonado, Sergio Díaz Díaz, Valentina Danna Parra y .....

Como **prueba documental** incorporaron lo siguiente:

1. Copia Contrato Colectivo 2013 -2015, de la CORMUSAF con los Sindicatos SETRACOM-SIDETRACOM, 07 de agosto de 2013, suscrito, entre otros, por Luis Antonio Berwart Araya y los presidentes de los sindicatos Juan Astorga Opazo y Rodrigo Herrera Bustamante.
2. Copia de Contrato colectivo Sindicatos de Asistentes de la Educación y la CORMUSAF 2015-2018.
3. Copia Proyecto contrato Colectivo Setracom- Sidetracom y CORMUSAF.



4. Copia de oficio, de 22 de octubre de 2019, de los Sindicatos Setracom y Sidetracom a la directora provincial del Trabajo, con timbre de recepción de la misma fecha. MAT.: Oficio conductor.

5. Ordinario N°152, de la Inspectora Provincial del trabajo a SIDETRACOM y SETRACOM, de 5 de julio de 2021.

6. Ordinario N°236, de la Inspección Provincial del Trabajo

7. Informe de Exposición de fiscalización N°167 del año 2021

8. Caratula de Fiscalización N°167 de 2021

9. Informe de Exposición de fiscalización N°208 del año 2021

10. Caratula de Fiscalización N°208 de 2021

11. Informe de Exposición de fiscalización N°209 del año 2021

12. Caratula de Fiscalización N°209 de 2021

13. Correo electrónico de 25 de octubre de 2022 de Marcela López Ávila.

14. Presentación de Sindicatos a doña Marcela Lopez con timbre de recepción en la Inspección del trabajo de 14 de enero de 2016, adjunta contrato colectivo 2015-2018

15. Nómina de trabajadores socios de Setracom año 2015

16. Nómina de trabajadores socios de Sidetracom año 2015

24. Copia de Acta de renovación de Directorio del Sindicato de Trabajadores de Empresa Corporación Municipal SIDETRACOM, de 03 de diciembre de 2020.

25. Documentos contenidos en carpeta colgante a nombre de Juan Astorga Opazo. NUE 6345037, que corresponden a liquidaciones de sueldo,

28. Copia de contrato de prestación de servicios a honorarios de Juan Enrique Astorga Opazo y la I. Municipalidad de San Fernando, representada por Luis Antonio Berwart Araya, de 7 de junio de 2021.

34. Planilla con detalle de Decretos de Pago de la CORMUSAF a Sindicatos.

40.43

Decreto de Pago N°38, de 08.01.2020, a SINDICATO SIDETRACOM., por concepto de pago de cuota sindical mes de diciembre 2019, ascendente a \$214.000,

40.44

Decreto de Pago N°1421, de 26.06.2020, a SINDICATO SIDETRACOM., por concepto de pago de cuotas sindicales mes de enero 2020, ascendente a \$214.000,

40.46

**TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL**  
**SAN FERNANDO**

---

Decreto de Pago N°2570, de 18.12.2020, a SINDICATO SIDETRACOM., por concepto de pago de cuotas sindicales correspondiente a los meses febrero hasta noviembre 2020, ascendente a \$2.030.000,

40.47

Decreto de Pago N°2581, de 21.12.2020, a SINDICATO SIDETRACOM., por concepto de pago aporte según contrato colectivo + gift cards a 2 funcionarios faltantes del sindicato Sidetracom, ascendente a \$110.000,

43.4

Decreto de Pago N°1664, de 21.08.2017, a JUAN ASTORGA OPAZO, por concepto de pago según memorándum n°726, por horas extraordinarias realizadas en el mes de julio 2017, ascendente a \$308000. NUE 6345046

43.5

Decreto de Pago N°2528, de 07.11.2017, a JUAN ASTORGA OPAZO, por concepto de pago según memorándum n°774, por horas extraordinarias realizadas en instituto comercial, ascendente a \$112000. NUE 6345046

44.1

Planilla con detalle de Decretos de Pago cancelados a Rodrigo Herrera Bustamante por parte de la CORMUSAF.

44.7

Decreto de Pago N°162, de 03.02.2015, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago boleta de honorarios n°6, por apoyo departamento de operaciones mes de enero 2015, ascendente a \$222222.

44.14

Decreto de Pago N°1030, de 21.06.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago retenciones voluntarias sindicato Setracom meses de diciembre 2016- marzo 2017, ascendente a \$2174000.

44.15

Decreto de Pago N°1218, de 07.07.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$50.000 que serán descontados por planilla de remuneraciones del mes de agosto 2017, ascendente a \$50000.

44.17

Decreto de Pago N°2041, de 28.09.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago cuotas sindicales del mes de mayo-junio-julio y agosto 2017, ascendente a \$1812000.

44.18

Decreto de Pago N°2044, de 28.09.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte por \$2.676.000, para financiar actividades recreativas "acto oficial del día del asistente de la educación", ascendente a \$2676000.

44.19

Decreto de Pago N°2395, de 24.10.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte a sindicato Setracom por premiación de asistentes con cumplimiento de 25 y 30 años de servicio, ascendente a \$1260000.

44.20

Decreto de Pago N°2574, de 10.11.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte por \$2.899.000 correspondiente a segunda cuota del 50%, para financiar actividades recreativas "acto oficial del día del asistente de la educación", ascendente a \$2899000.

44.21

Decreto de Pago N°2726, de 20.11.2017, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$400.000 que serán descontados por planilla de remuneraciones en 4 cuotas a contar del mes de diciembre 2017, ascendente a \$400000.

44.22

Decreto de Pago N°45, de 04.01.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$134.000 que serán descontados por planilla de remuneraciones del mes de febrero 2017, ascendente a \$134000.

44.23

Decreto de Pago N°336, de 02.02.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$134.000 que serán descontados por planilla de remuneraciones del mes de febrero 2018, ascendente a \$134000.

44.24

Decreto de Pago N°807, de 05.04.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$50.000 que serán descontados por planilla de remuneraciones del mes de abril 2018, ascendente a \$50000.

44.25

Decreto de Pago N°1009, de 24.04.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales, Setracom mes de septiembre 2017, ascendente a \$446000.

44.26

Decreto de Pago N°1459, de 31.05.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales, Setracom mes de octubre y noviembre 2017, ascendente a \$882000.

44.27

Decreto de Pago N°2227, de 09.08.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de retenciones voluntarias de extensión de beneficios desde enero 2016 a julio 2018 (sindical se adjunta nomina), ascendente a \$999072.

44.28

Decreto de Pago N°2563, de 12.09.2018, a HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales meses de diciembre 2017, enero, febrero, marzo anticipo mes de abril por \$104.000, ascendente a \$1800000.

44.29

Decreto de Pago N°2690, de 28.09.2018, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales mes pendiente de abril 2018 por \$104.000 y meses de mayo a agosto 2018, ascendente a \$1806000.

44.30

Decreto de Pago N°2739, de 03.10.2018, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte por \$5.600.000, para financiar actividades recreativas "acto oficial del día del asistente de la educación", ascendente a \$5600000.

44.31

Decreto de Pago N°2740, de 03.10.2018, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte a sindicato Setracom por premiaciones de asistentes con cumplimiento de 25 y 30 años de servicio, ascendente a \$1650000.

44.34

Decreto de Pago N°3394, de 05.12.2018, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales meses de septiembre a diciembre 2018, sindicato Setracom, ascendente a \$1786000.

44.35

Decreto de Pago N°3692, de 28.12.2018, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de rendición por gastos en compra de galvanos y carne fiesta sindicato, ascendente a \$216374.

44.36

Decreto de Pago N°3808, de 28.12.2018, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales del mes de enero y febrero 2019. sindicato Setracom, ascendente a \$900000.

44.37

Decreto de Pago N°115, de 18.01.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago adelanto de cuotas sindicales meses de enero y febrero 2018. sindicato Setracom, ascendente a \$900000.

44.38

Decreto de Pago N°482, de 08.03.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales del mes de marzo y abril 2019, ascendente a \$868000.

44.39

Decreto de Pago N°527, de 13.03.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$300.000 que serán descontados por planilla de remuneraciones del mes de marzo 2019, ascendente a \$300000.

44.40

Decreto de Pago N°2307, de 08.08.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago anticipo de sueldo por \$150.000, que serán descontados en el mes de agosto 2019, por el libro de remuneraciones, ascendente a \$150000.

44.41

Decreto de Pago N°2720, de 10.09.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales de los meses mayo - junio 2019. y 50% mes de julio 2019, ascendente a \$1123000.

44.42

Decreto de Pago N°2979, de 30.09.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte por \$5.750.000, para financiar actividades recreativas "acto oficial del día del asistente de la educación", ascendente a \$5750000.

44.43

Decreto de Pago N°2983, de 30.09.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales mes de julio 50%, agosto y septiembre 100% 2019, ascendente a \$1147000.

44.44

Decreto de Pago N°3059, de 04.10.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de aporte a sindicato Setracom por premiaciones de asistentes con cumplimiento de 25 y 30 años de servicio, ascendente a \$2070000.

44.45

Decreto de Pago N°3687, de 19.11.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales Setracom mes de octubre 2019, ascendente a \$458000.

44.46

Decreto de Pago N°4191, de 26.12.2019, HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO, por concepto de pago de cuotas sindicales de los meses de noviembre y diciembre 2019, enero 2020 y abono por \$192.000 al mes de febrero 2020, ascendente a \$1600000.

Por último, como **otros medios de prueba**: Planilla Excel extraída del drive asociado al correo electrónico institucional de Alejandro Aguilera Bava, Alejandro.aguilera@cormusaf.cl, adjuntado en archivo nombre pagos de la semana, de fecha 16 de diciembre de 2019; 3. Planilla Excel extraída del drive asociado al correo electrónico institucional de Leonardo Gajardo Valenzuela leonardo.gajardo@cormusaf.cl adjuntado en archivo nombre caja junio de 2020 según contingencia, de fecha 4 de junio de 2020; y 9 capturas de mensajería de WhatsApp del teléfono de Albino Humberto Hermosilla

Por su parte, **la defensa** presentó como **prueba propia la declaración de los testigos** Rocío Escudero Vergara, Luis Pizarro Barahona, Juan Acero Lamas, Carlos Meriño Díaz, Marta Rojas Contreras, María Rojas Contreras, Beatriz Meza Torres, Erick Pavez Núñez, José Becerra Valdés, y Luis Navarrete Pezoa.

Además, como **prueba documental** incorporó:

1.- Contrato a Honorarios de Juan Astorga en periodo de Elecciones 07 de junio de 2021, para prestar servicios de nochera y en los días en que el Establecimiento estuviera ocupado para dicho fin.-

- 2.- Copia de Presentación SOLICITA MEDIACIÓN de fecha 08 de junio de 2018 presentado en la Inspección del Trabajo denunciando Práctica Antisindical de la Corporación que implica influir a afiliados a cambio de sindicato.
- 3.- Copia de Presentación SOLICITA CAPACITACIÓN A CORPORACIÓN Solicitud al Secretario General de Corporación pidiendo el cumplimiento del artículo 12 contrato colectivo vigente de fecha 13 de agosto de 2018.-
- 4.- Solicitud de MEDIACIÓN POR ACOSO LABORAL A Sra Marcela López de Inspección del Trabajo de San Fernando, en defensa de asistentes de la educación afectados, presentada por ambos presidentes de sindicatos de fecha 11 de abril de 2019.-
- 5.- Copia de Escrito de Denuncia Practica Antisindical REITERADA presentada a doña Marcela Soto en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo con fecha 17 de noviembre de 2020.-
- 6.- Presentación SOLICITA AUDIOS AL CONSEJO MUNICIPAL Rodrigo Herrera solicita al consejo audios de sesión que toca temas relacionados con educación. Da cuenta de como los dirigentes siempre siguieron los conductos regulares en su actividad como tal de fecha 17 de diciembre de 2019.-
- 7.- Copia de Escrito por la cual los dirigentes imputados Solicitan Audiencia a Seremi de Educación para discutir la situación de la Corporación y los problemas de sus socios de fecha 26 de mayo de 2020.-
- 8.- ACTA SLEP CAMBIO DE SINDICATO de 27 de mayo de 2021.-
- 9.- 3 ACTAS DE REUNIONES ENTRE LOS DIRIGENTES JUAN ASTORGA Y RODRIGO HERRERA CON AUTORIDADES DEL SLEP COLCHAGUA Actas de reuniones efectuadas el 27/05, 14 y 18 de Junio del 2021, muestran a los dirigentes en reuniones formales con SLEP en busca de soluciones a problemáticas arrastradas desde la Corporación Municipal de Educación de San Fernando.
- 10.- SOLICITUD DE BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO Dirigentes solicitando al entonces Secretario General, Leónidas Quiroga, el bono de perfeccionamiento de acuerdo a contrato colectivo de los socios de 19 de octubre de 2020.-
- 11.- Copia del CONVENIO OFTALMOLÓGICO Suscrito el 05 de Noviembre 2018, se firma convenio con nuevo beneficio para socios.

- 12.- Copia de los Contratos Colectivos de ambos Sindicatos SIDETRACOM Y SETRACOM correspondientes a los bienios 2000-2002; 2002-2004; 2004-2006; 2006-2008; 2008-2010; Dichos documentos dan cuenta de la antigua data de los beneficios, prestaciones y convenios que los sindicatos tenían con su empleador desde mucho antes que asumieran mis representados.-
- 13.- Copia de los Convenios Colectivos de ambos sindicatos de los bienios 2010-2012; 2012-2014.- Que sirven para ilustrar las condiciones contractuales colectivas de ambos sindicatos en comparación al Contrato colectivo Celebrado en 2020.-
- 14.- Solicitudes de Pronunciamiento por denuncias de prácticas antisindicales de ambos Sindicatos a doña Marcela López de la Inspección del Trabajo de San Fernando, de fechas 18 de junio de 2020; 30 de junio de 2020; y respuesta de la Corporación Municipal de Educación de fecha 26 de junio de 2020.-
- 15.-Acta de Medicación de fecha 19 de agosto de 2019 En que ambos Sindicatos y la Corporación Municipal acuerdan acudir a la Dirección Regional del Trabajo a fin de exponer consultas respecto del Contrato colectivo del Trabajo de ambos Sindicatos.-
- 16.- Copia de Acta de Audiencia de Juicio de fecha 12 de diciembre de 2019 RIT S-1-2019 respecto a denuncia por practicas antisindicales deducida contra la Corporación Municipal de Educación por el Sindicato SIDETRACOM dirigido por don Juan Astorga.-
- 17.- Copias de Denuncias contra la Corporación Municipal de Educación, deducidas por Incumplimientos de cláusulas de los Contratos Colectivos de ambos Sindicatos presentadas ante la Inspección del Trabajo con fechas 10 de marzo de 2021 y 03 de mayo de 2021, acusando el incumplimiento del contrato colectivo de 2019 por prestaciones adeudadas desde los años 2018, a 2020.-
- 18.- Copia de Solicitud de Mediación presentada por ambos Sindicatos a la Inspección del Trabajo de San Fernando con fecha 05 de Agosto de 2019 a fin de que se citase a la Corporación Municipal de Educación a discutir y regularizar el Contrato Colectivo entre dichos Sindicatos y la entidad empleadora.-
- 19.- Copia de Acuerdo de Prorroga firmado entre los imputados y la Corporación Municipal de Educación de San Fernando debidamente representada, para que el empleador, la Corporación, hiciera entrega de la respuesta al proyecto de Contrato Colectivo presentado por ambos los sindicatos SIDETRACOM Y SETRACOM.-



20.- Copia de Respuesta del Director Regional de la Inspección del Trabajo, de fecha 10 de febrero de 2019 a ordinario de fecha 25 de noviembre de 2019, donde se le consulta por parte de la Corporación Municipal y los Sindicatos la legalidad de la clausula de prorroga tácita existente en el Contrato Colectivo, haciendo las sugerencias que luego se traducirían en la presentación de un nuevo proyecto de Contrato Colectivo.-

21.- Copia de Informe de Investigación de Derechos Fundamentales ante denuncia de practicas Antisindicales Reclamo N° 0602.2019.204 interpuesto por Don Juan Astorga en representación del Sindicato SIDETRACOM y Oficio de Remisión al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando de fecha 07 de mayo de 2019.-

22.- Copia de Registro de Actividad de la Dirección Regional del Trabajo de San Fernando de Reunión celebrada el 11 de abril de 2019 entre el Presidente de SIDETRACOM don Juan Astorga y el Coordinador Inspectivo Alejandro Vergara Galaz, por temas de incumplimientos de pagos de cotizaciones previsionales; no pago de ellos bonos de incentivo al retiro; y denuncia el no pago de créditos de la CCAF La Araucana.-

23.- Copia de Denuncia ingresada a la Inspección Provincial del Trabajo de fecha 10 de julio de 2017 contra la Corporación Municipal de Educación, por no pago de cuotas sindicales.-

24.- Copia de Carta enviada al Consejo Municipal por los presidentes de los sindicatos SIDETRACOM y SITRECOM con fecha 04 de julio de 2017 por no pago de sueldos, y solicitan se de curso a la documentación necesaria para obtener los fondos para dichos pagos. La carta demuestra el apego a la institucionalidad y legalidad vigente en el trato con su empleador y autoridades.-

25.- Copia de Listados de Asistentes de la Educación del Sindictato SIDETRACOM en paro por no pago de sueldos los días 3 y 4 de mayo de 2017.-

26.- Copia de Informe de Fiscalización y del Informe de Investigación de Derecho Fundamental N° 602/2017/525 de la Inspección Provincial del Trabajo de San Fernando, por denuncia por descuentos y no pago de las cuotas sindicales de los meses de abril a junio de 2017. Denuncia hecha por don Juan Astorga en representación del Sindicato SIDETRACOM.-

27.- Copia de Informe de Fiscalización e Informe de Exposición n° 602/2017/436 de 26 de junio de 2017, por denuncia presentada por don Juan Astorga y Rodrigo

Herrera como presidentes de los Sindicatos SIDETRACOM y SETRACOM respectivamente por no pago de remuneraciones íntegras y no cumplimiento de estipulaciones de los contratos colectivos vigentes, tales como Bonos de Escolaridad; Capacitaciones y Perfeccionamientos; Becas de Estudio; Cuotas Sindicales, Desempeño Difícil; Excelencia Académica; Desempeño Laboral; y Deuda firmada según protocolo de acuerdo.-

28.- Copia de Informe de Fiscalización e Informe de Investigación de Derechos Fundamentales N° 602/2017/524 de fecha 07 de julio de 2017 por denuncia presentada por el presidente del Sindicato SETRACOM don Rodrigo Herrera, por descuentos y no pagos de las cuotas sindicales de sus afiliados (practica antisindical).-

29.- Copia de Informe de Fiscalización e Informe de Investigación de Derechos Fundamentales N° 602/2020/470 de fecha 17 de diciembre de 2020 por denuncia presentada por los presidentes de los Sindicatos SETRACOM don Rodrigo Herrera, y SIDETRACOM don Juan Astorga, por prácticas antisindicales.-

30.- Copia de Acuerdo alcanzado por la Corporación Municipal de Educación con el Sindicato SAECOM presidido por doña Magdalena Valenzuela Morales de fecha 10 de mayo de 2018.-

31.- Copia de 19 Actas del Equipo Colaborativo Fiscalizador Educacional, referidas a las reuniones sostenidas entre el 06 de septiembre de 2018 al 11 de abril de 2019; en dichas reuniones participaron el Seremi de Educación, el Jefe RRHH de la Cormusaf (Rodrigo Quintanilla); Jefe de Control y Gestión de Cormusaf (Humberto Hermosilla), el Presidente del Sindicato de Profesores , el Deprov Colchagua; Delegado del Mineduc, Inspector Provincial del Trabajo, la Asesora legal de la Cormusaf (Roció Escudero) y los presidentes de los sindicatos SAECOM, SIDETRACOM, SETRACOM, otros Sindicatos de la Educación y el Seremi del Trabajo.-

32.- Copia de Carta presentada al Secretario Ministerial de Educación de la Región de O'Higgins, Sr. Felipe Muñoz Yáñez de fecha 26 de mayo de 2020, haciendo presente la necesidad de solucionar sus problemas en el contexto de la realidad comunal que estaban viviendo.-

33.- Copia del Acta de la Primera Sesión de la Comisión Técnica de la comuna de San Fernando del Servicio Local de Educación Colchagua de fecha 20 de junio de

2020, a la que asiste y participa don Rodrigo Herrera como Representante de los asistentes de la Educación.-

34.- Copia de presentación hecha por don Juan Astorga y Rodrigo Herrera a la Inspección del Trabajo con fecha 03 de mayo de 2021, denunciando que la Corporación de Educación Municipal de San Fernando aún les adeudaba tres ítems importantes: Allí se señalan que esos son los créditos pendientes, dando cuenta que los otros conceptos reclamados previamente ya se encuentran solucionados, y hacen entrega de la lista de socios a quienes se adeudan dichas prestaciones.-

35.- Copia del Informe de Exposición N°602/2021/176, de la Inspección del Trabajo de San Fernando, derivado de la presentación señalada en el numeral 34; Allí se da cuenta que la Corporación de Educación Municipal no cumplió con la entrega de la documentación requerida, cursándose una infracción a la denunciada.-

36.- Denuncia por prácticas antisindicales de 06/12/2018 interpuesta por Rodrigo Herrera en la Inspección del trabajo en defensa de los derechos de asociados a su sindicato desvinculados con menos prestaciones.-

37.- Copia de Acuerdo entre SAECOM y La corporación de 10 de mayo de 2018 donde María Valenzuela se compromete a cambio del pago de prestaciones, a no solicitar la remoción de funcionario de la Corporación, al cual hizo referencia don Juan Opazo en su declaración;

39.- Oficio conductor de proyecto de contrato de negociación colectiva sindicatos SIDETRACOM Y SETRACOM de fecha 22 de octubre de 2019.-

40.- Solicitud de Capacitaciones para SIDETRACOM Y SETRACOM 08 de agosto de 2018.

41.- Contrato de arriendo de la casa ubicada en pasaje monseñor larrain de don Juan Astorga, por el cual percibía mensualmente la suma de \$250.000.- hasta julio de 2023.-

42.- Liquidación de Remuneraciones de Juan Astorga y Rodrigo Herrera, con el detalle de sus haberes desde enero de 2018 hasta el mes anterior a la audiencia de juicio.-

44.- Acta Final de Mediación Laboral ante la Dirección del Trabajo de Rancagua de los sindicatos SIDETRACOM Y SETRACOM y la Corporación de Educación Municipal de San Fernando de 19 agosto de 2019.-

45.- Recurso de Protección presentado por don Juan Astorga en contra de Magdalena Valenzuela con fecha 19 de noviembre de 2019 y oficio a carabineros de la Corte de Apelaciones de fecha 25 de noviembre de 2019, por bloquearle el ingreso y salida de su casa, ubicada dentro del establecimiento educacional en el cual ambos trabajan.-

47.- Contratos de arriendo de local comercial ubicado en calle Valderrama 010, perteneciente a don Juan Astorga, vigente hasta la fecha.-

**OCTAVO: Decisión del Tribunal.** Se resolvió por votación unánime, absolver a **Juan Enrique Astorga Opazo y Rodrigo Antonio Herrera Bustamante**, ya individualizados, respecto de la imputación que formulara en su contra el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado en calidad de querellante, en el sentido de ser autores de un delito de cohecho tanto del artículo 248 como 248 bis, ambos del Código Penal, descrito en la acusación.

**NOVENO: Contexto general.** En este caso previo a conocer del asunto traído a juicio conocimos de una Corporación Municipal prácticamente quebrada financieramente, entre otras cosas, por pagos irregulares a concejales, pago de remuneraciones a gente que aparecía contratada, pero que no asistía a trabajar, pago a proveedores por trabajos no realizados, utilización de facturas ideológicamente falsas. Todo ello se pagaba con fondos de la Corporación Municipal. Ese es el escenario que nos mostraron una serie de testigos, entre ellos el propio exalcalde Berwart Araya y directivos de la época como Leónidas Quiroga, Leonardo Gajardo, Rodrigo Quintanilla y Carlos Bozo. También funcionarios de la Corporación como, por ejemplo, María Verónica Quiroz Contreras.

Ese es el escenario que se dio a conocer por los referidos testigos y que por cierto no es materia de este juicio.

También supimos que los directivos de la Corporación de la época de los hechos eran el exalcalde en su calidad de presidente de la Corporación, Leonardo Gajardo como Secretario General, Leónidas Quiroga como jefe de Finanzas, Carlos Bozo como Jefe de operaciones, Humberto Hermosilla como Jefe de Control, Rodrigo Quintanilla como Jefe de Recursos Humanos y Alejandro Quiroga en calidad de Tesorero.

**DÉCIMO: En cuanto a la decisión absolutoria por el delito de cohecho del artículo 248 y 248 bis del Código Penal.** En el caso sub judice lo primero que debe indicarse, es que de acuerdo con los hechos descritos en la acusación y que son aquellos que se autoimpusieron los acusadores acreditar, estamos frente a un delito de cohecho del artículo 248 bis del Código de castigo, porque atribuyeron a los acusados un actuar concreto y de carácter omisivo con infracción a los deberes de su cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, cierto es que el artículo 248 del Código Penal es la figura base y que dice relación con un cohecho en función del cargo. Pero en ambas figuras comisivas llámese 248 o 248 bis el **sujeto activo debe ser un empleado público** y respecto de ello debe decirse que no existió controversia por parte de la defensa, es más desde el comienzo ambos acusados reconocieron tener la calidad de asistentes de la educación en establecimientos educacionales pertenecientes al Estado, es decir públicos. Así, Juan Astorga dijo haber ejercido funciones en el Liceo Comercial como nochera y Rodrigo Herrera en la Escuela o Colegio Centinela, ambos establecimientos educacionales ubicados en San Fernando.

A dichas labores principales se agregó que Astorga y Herrera se desempeñaban como presidentes de los sindicatos SIDETRACOM y SETRACOM, respectivamente. De lo anterior también dieron cuenta directivos de la Corporación Municipal de aquella época, como Luis Berwart, Leonardo Gajardo y Leonidas Quiroga. Además, los testigos Juan Acero y Erik Pávez Núñez, entre otros deponentes. Juan Acero, por haber sido el tesoro de SIDETRACOM cuyo presidente, como se dijo, era Juan Astorga y Erick Pávez por haber sido asociado de SETRACOM, sindicato presidido por Rodrigo Herrera.

Por tanto, atentos a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal los encartados reúnen la calidad de empleados públicos, al incorporar este articulado un concepto funcional y por ende amplio. A lo anterior se suma lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto de Funcionario Público, al disponer el mentado articulado *“Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas **que presten***

*servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración”.*

Por último, a mayor abundamiento se tiene en consideración, lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 21.109 sobre estatuto de los asistentes de la educación pública, que dispone: “Las relaciones laborales entre los servicios locales y los asistentes de la educación de su dependencia se regirán por las disposiciones de esta ley y, para estos efectos, serán considerados **como funcionarios públicos**.”

**UNDÉCIMO:** Ahora bien, para determinar la concurrencia de los demás presupuestos fácticos de la acusación, estas sentenciadoras debían previamente determinar cuál era el verbo rector que imputaban los acusadores, ya en su artículo 248 como 248 bis del código Penal, en cuanto a solicitar o aceptar un beneficio económico o de otra naturaleza, como se establece en las normas citadas.

En esa tarea primaria se debe indicar que el libelo acusatorio consigna “*La inactividad de los acusados Astorga y Herrera se explica por lo **acordado** con Leonardo Gajardo en su calidad de gerente de la Corporación y el exalcalde Luis Berwart Araya.*”

Al referir los vocablos “*lo acordado*” se desprende que existieron tratativas entre dos partes, es decir, entre los acusados en sus calidades de presidentes sindicales y el alcalde de entonces, no pudiendo colegirse de la simple lectura de la acusación quién solicitó y/o aceptó.

La citada incertidumbre pudo aclararse al avanzar en la lectura hasta el apartado donde se hace mención a la realización de pagos a los acusados, especialmente donde se indica “*La instrucción de pago la efectúa Luis Berwart Araya...*” “*Los pagos se hicieron en dinero en efectivo...*” Del tenor de estas afirmaciones se pudo sostener que se imputó a los acusados la **conducta relativa a aceptar un beneficio económico**, el que iba de la mano de una omisión del deber que les exigía el desempeño de sus cargos gremiales, según se lee también de la propia acusación, en concreto para que **dejaran pasar el plazo legal que tenían para apercibir a la Corporación Municipal y dejar de hacer cualquier solicitud posterior**. De esa forma el proyecto de contrato colectivo no se transformaba en contrato colectivo, dejando los afiliados de recibir importantes beneficios que debía pagar la Corporación, con **el propósito de recibir a cambio 15 millones de pesos cada uno**.

Para dicho fin se contó con la declaración de los testigos que a continuación se indican, en razón de ser los atinentes al tema en discusión.

1. Para cumplir ese cometido probatorio, se escuchó a LUIS **BERWART ARAYA**, quien señaló haber sido alcalde de la comuna de San Fernando durante los años 2014 y 2021, y presidente de la Corporación Municipal. Que durante el año 2017 en adelante las autoridades de la Corporación fueron Alejandro Aguilera como tesorero, Carlos Bozo como jefe de operaciones, Leonardo Gajardo y Leónidas Quiroga secretario, Hermosilla en departamento de control y Rodrigo Quintanilla en recursos humanos. Luego dijo que del año 2017 en adelante la situación financiera de la Corporación era de déficit y desde el inicio, principalmente en educación, las subvenciones no cubrían todos los gastos y se requería dinero municipal que eran aprobadas por el concejo municipal, que en cuanto a situaciones irregulares estas existían, en este caso lo del juicio, y que tenían que cubrirse con recursos principalmente municipales y que durante el año 2019 y desde siempre los recursos eran escasos para cubrir los convenios colectivos, es así como siempre iban un poco desfasados.

Ya sobre el tema que nos convocó a juicio indicó que una vez en el año 2019 llegaron a su oficina el señor Herrera y Astorga para conversar sobre una deuda pendiente de un bono de hartos millones y ellos pedían cierta cantidad de dinero para que esa materia se pudiera dilatar. Agregó no recordar en qué etapa estaba el convenio colectivo, pero sí que había una deuda pendiente y para que esa deuda se dilatara y no hubiera mayores problemas se solicitaba una cantidad de dinero, a lo cual les indicó que eso lo debían conversarlo con Gajardo. Luego especificó que le indicaron que necesitaban recursos y que si se accedía a cancelar evitaban que salir a la calle pudiera pasar, que **había una deuda pendiente**, que tenían presión por los asociados y que podían dilatar todo esto si cancelaban cierta suma de dinero, 10 o 15 por persona,. Preciso que después que se fueron los dirigentes llamó a Leonardo y le dijo que los dirigentes habían hablado con él, que estaban pidiendo plata para poder neutralizar y le dijo manéjalo tú, ante lo cual Leonardo le dijo juntémonos para verlo, se accedió a cancelar esto, pero los montos y la forma lo vio Leonardo.

Acto seguido afirmó que hubo una reunión donde participaron algunos funcionarios entre ellos si no se equivoca estaba Alejandro Aguilera, Leonardo,

Rodrigo Quintanilla, Pablo y su persona, donde se abordó el requerimiento de los acusados. La posibilidad de pago lo veía el secretario Leonardo y el jefe de finanzas Leónidas. Como iban a justificar los pagos indicó que descansaba entre Leonardo y Pablo, ellos veían la forma de poder operar, él no sabe cómo ni hasta cuando se hicieron los pagos, y que esto se relacionaba con temas de bono y negociación colectiva.

Luego dijo haber declarado una o dos veces en relación al tema, y que en la primera ocasión indicó que querían recursos para ellos, como un crédito, no recuerda bien. Se refrescó memoria con declaración del **8 septiembre de 2022** y se leyó “ *En cuanto a los dirigentes sindicales lo que puedo decir es que tuve una reunión con Leonardo Gajardo y él llamó a dos más de la corporación, ya que los dirigentes reclamaban trato discriminatorio, puede haber estado Leónidas, eso fue lo que se habló no pedí pago a los dirigentes sindicales.*”, ante lo leído indicó que en el contexto de la declaración se omiten situaciones y con el tiempo se recuerdan detalles y situaciones. Luego afirmó que el **26 de septiembre de 2023** también declaró que habían solicitado un crédito, plata para uso personal, no un crédito, utilizó la palabra crédito, pero lo que él quiso decir es que estaban solicitando recursos para ellos a lo mejor devolverlos o pagando pero no fue así sino lo que pasó es lo contado en estrados. En cuanto a la cifra solicitada dijo que eran 10 o 15, se le refrescó memoria y se leyó “ *...los dirigentes sindicales me pidieron un crédito, hablaban de 5 a 10 millones, eran para gastos personales, les dije que lo hablaran con Leonardo Gajardo en la corporación, posteriormente Leonardo Gajardo le comentó que tenía solucionado el tema, sabía que se les entregaba dinero, pero creía que era un crédito.*” . Ante lo leído indicó que en la época que declaró estaba muy complicado dentro de la cárcel y se bloqueaba un poco, y con el tiempo se acuerda de más detalles, pero lo realmente ocurrido era lo declarado en estrados. Acto seguido se utilizó la herramienta de evidenciar contradicción con relación a lo que pedían los dirigentes y leyó “ *Esto se enmarcaba en mantener a los asociados de Astorga y Herrera tranquilos, y eso si funcionó, es decir a cambio del supuesto préstamo ellos mantendrían tranquilos a sus asociados no se movilizarían como el sindicato de Magdalena*”. Dijo que no era préstamo sino una solicitud por el tema de los convenios colectivos, recursos para temas personales.



Finalmente, en lo relevante y pertinente afirmó que esto ocurrió en el año 2019, sin poder recordar mes y que si **no** accedía a esto la amenaza era la movilización de la gente, ellos manifestaban que tenían la presión de sus asociados para manifestarse, y esto era por una deuda, no recuerda cual específicamente. No le comunicaron después la cantidad que se les pagó.

2. Luego contamos con el relato de **LEONARDO GAJARDO VALENZUELA**, quien en lo pertinente y medular refirió que fue funcionario municipal a partir del año 2015 y el año 2019 fue destinado a la Corporación Municipal de San Fernando, ocupando el cargo de secretario general desde el 17 de abril de 2019 hasta del 8 de junio de 2020 cuando sufre un accidente cerebro vascular. Que como secretario general tenía que coordinar y relacionarse con todos los organismos, entre ellos los dirigentes sindicales, que dichos dirigentes sindicales -los acusados- tenían línea directa con alcalde y administrador para pedir lo que quisieran conforme ellos se lo mencionaron en una reunión.

**Llevado al tema del convenio colectivo del 2019** indicó que recibió de parte del alcalde la instrucción de poder postergarlo, dilatar ese tema, para no perjudicar el traspaso al SLEP y que a cambio de eso había que pagar a los dirigentes una cantidad de dinero. Perjudicaba al momento del traspaso porque ese convenio tenía una cantidad de beneficios para cada asociados, por tanto el hecho de postergar o dejar abajo ciertas situaciones implicaba no pagar eso por parte de la administración de esa época. Agregó que la instrucción debió haber sido dada en la Corporación y estando junto a otro directivo como Rodrigo Quintanilla, Quiroga y probablemente la abogada Rocío. Luego refirió que los dirigentes sindicales llegaron a su oficina y le entregaron el proyecto de convenio, el que quedó guardado en su escritorio, de manera de dilatar y les dijeron aquí está usted guárdelo, estamos cumpliendo con nuestra palabra para que ustedes también cumplan con la suya, que era el pago de lo que ellos habían pedido. En el fondo era dilatar para no cumplir con el convenio, y en ese contexto fueron a su oficina y le dijeron que iban a cumplir con su palabra y cuanto quería él, les dijo no me interesa, su función fue firmar y guardar ese convenio colectivo. Preciso que conforme el recuerda eran 15 millones para cada uno.

Luego afirmó que Alejandro el tesorero estaba al tanto de esta situación, lo que le consta porque existía una comunicación interna respecto de situaciones de

pago irregulares, pues había una nómina de listados de pago y los denominaban P y C. a los dirigentes por su apodo de pinky y cerebro. Que su persona no les hizo pagos directamente y que no tuvo como saber el cuándo, cómo y dónde se hicieron los pagos, el solo cumplió con la instrucción dada de poder negociar con ellos para que el convenio colectivo se dilatará, lo que ocurrió en el año 2019. Que debió después haberse firmado una prórroga de plazo para contestar, la que fue gestionaba en ese momento por la abogada Rocío para chutear la pelota, ya que no habían recursos para cumplir con el acuerdo, había que dilatarlo.

A su vez, señaló que se les pagaba en efectivo, eran pagos irregulares, sabía si que tenían acuerdos de antes, eso se lo comunicó el jefe de finanzas y el tesorero, lo que da por hecho porque ellos ejecutaban el pago. Que los pagos irregulares generalmente eran con iniciales, no habían boletas ni facturas de respaldo.

Finalmente, aseveró que el proyecto se lo entregaron los dirigentes, pero debería haber llegado por los medio formales. Que sobre los motivos de la prórroga firmada con los dirigentes indicó que era dilatar, pero que no recordaba si dieron algún motivo. En virtud de su falta de memoria se le exhibió el respectivo documento de fecha 4 de noviembre de 2019, y en lo pertinente leyó *“Con todo, el plazo se amplía de esta manera para que los sindicatos conozcan de la auditoria contable y financiera que se está realizando en la Corporación Municipal de San Fernando con objeto del traspaso al Servicio Local de Educación que ayudara a conocer las posibilidades reales de compromiso económico por parte del empleador”*, documento firmando por los acusados y el testigo. Señalando el testigo que las razones allí consignadas debían ser efectivas.

3. El relato del testigo **HUMBERTO HERMOSILLA CABRERA**, quien en lo pertinente indicó que llegó a la Corporación en el año 2017 mes de enero y ocupó el cargo de encargado de control desde marzo 2017, lo contactó Aníbal Quezada, necesitaban alguien para revisar una subvención llamada el FAE fondo apoyo a la educación pública, ya que la Corporación tenía dos años de observación a los fondos, que se relacionaba con el tesorero y jefe de finanzas Rodrigo Quintanilla, quien llegó en agosto o septiembre del año agosto de 2017 al cargo de jefe de recursos humanos. Adujo que en el tiempo se sostuvo un mecanismo en el cual seguían trabajando con los mismos proveedores de servicios pero no eran reales y

por ende las facturas no eran reales. Que el grupo estrecho del alcalde era el jefe de finanzas Leónidas Quiroga, Alejandro Aguilera, Carlos bozo, y por la municipalidad Pablo Bravo y Claudio Herrera como DAF.

Respecto de los dirigentes sindicales manifestó que las visitas de ellos eran recurrentes, tenían un sistema de trabajo que conocían el tesorero y al jefe de finanzas, iban por el tema de sus asociados, por los dineros que se le podían adeudar, que iban a lo menos una vez o dos veces a la semana, se relacionaban con recursos humanos, con el tesorero Alejandro, con el jefe de finanzas y a veces con su persona, donde los atendía y le planteaban sus dudas, siendo un trato fluido. A su vez, afirmó que lo que sabe de los dirigentes se lo contó Rodrigo Quintanilla cuando éste ya no estaba en la Corporación, refiriéndole que tenía que seguir conversando con los dirigentes porque el alcalde le solicitó, respecto de asuntos relacionados con la actividad de ellos como dirigentes. Rodrigo le planteó que le tenían que pagar un dinero a los dirigentes sindicales por algunas funciones o actividades propias de ellos por instrucciones del alcalde. Se le hace ejercicio de refresca memoria con declaración de 4 abril de 2023 y se leyó *"Sobre el pago que se hizo a Herrera y Astorga, se lo contó Quintanilla, se les pagaría a esas personas debido que necesitaban mantenerlos callados, cree que eran cuotas de 3 millones. Pero no sabe el motivo, esto lo deben haber conversado con la abogada de la época Gajardo o los que debían ver estos asuntos."* Luego dijo era para mantenerlos tranquilos, que no le generaran problema al alcalde.

Luego refirió de su relación con los dirigentes, señalando que conversaban ya que iban frecuentemente a la corporación, que las conversaciones con el señor Herrera era porque le dijo que tenía que depositar al papá y no a él por retenciones judiciales y cuando se venían las fechas de aniversario para los pagos. Que tenía una relación laboral con ellos. Que tenía mensajería de WhatsApp más con Rodrigo Herrera, que dicha mayor cercanía se gestó dentro de la Corporación, pero era un relación de trabajo.

En cuanto a la transferencia al padre del señor Herrera dijo no saber si era sueldo u otras cosas, pero era plata de Rodrigo Herrera. Se hizo ejercicio de evidenciar contradicción y se leyó "... Pero no tenía relación con el pago de sus sueldos eran extras convenidos con Herrera y Astorga, esto lo supo por Aguilera,

deben haber sido montos de \$400.000. Luego sobre el punto al ser consultado nuevamente dice por la fecha no era seguramente pago de sueldo.

Finalmente, dijo que el no vio personalmente hacerles ningún pago y desconocer si Rodrigo Quintanilla les hizo algún pago.

4. El relato de **RODRIGO QUINTANILLA MALDONADO, quien señaló que trabajó** en la Corporación desde el año 2018 hasta marzo de 2020 como jefe de recursos humanos, su función era con recursos humanos y remuneraciones, a él lo contactó Humberto Hermosilla y le comunicó que había posibilidad de trabajar, que al alcalde lo conoció por ser cliente del banco en el cual trabajaba, no sabe si fue compañero o profesor en la universidad. Sus primeras sorpresas en la Corporación fueron que había gente que estaba en la planilla y que no trabajan ahí. Luego dijo que Alejandro Aguilera un día le señaló si conocía alguien que tuviera facturas y dijo que si, le dijo que era para cubrir algo, podría ser para cubrir dineros, pero no recuerda si eran facturas falsas las que entregó. Don Alejandro le pasaba el IVA y él se lo pasaba a la persona, facilitando más de 10 facturas. Cuando se retiró de la Corporación una vez más Alejandro le pidió una y cree Humberto también otra factura.

Con relación a los dirigentes sindicales indicó haber tenido una relación laboral con ellos, representaban a los trabajadores, relación más agradable que la otra dirigente, no sabe cuántas veces iban a la Corporación. En el año 2020 estuvo hasta el 13 de marzo en la Corporación. Con los proyectos colectivos en el año 2019 tenían que negociar colectivamente y no hubo negociación, se pasó la negociación, eso lo veía el secretario general o gerente don Leonardo Gajardo. Cree que el 2019 o 2020 conversó con Gajardo de los contratos colectivos, como se operaba la negociación colectiva, supo que no hubo negociación, no sabe si se postergó. Luego afirmó haber sabido **que no tuvieron la negociación porque le ofrecieron dinero, eso lo supo porque un día fue a la corporación y** Leónidas le conversó que estaban con un problema, él fue por un tema de vehículos que arrendaba a salud, pues ya no estaba en la Corporación y **Leónidas Quiroga le dijo que estaban con este inconveniente que le habían pedido dinero a cambio de no sacar el contrato colectivo nuevo. Que don Juan y Rodrigo le habían pedido dinero, eran más de 10 millones de pesos, con ello se ahorran el bono de termino de conflicto y el aumento del porcentaje del convenio colectivos según lo**

que él piensa. Se ahorran 40 millones y el reajuste no debió ser más del 3 %. Que Leónidas le pidió conversar con ellos, que pidieron 15 o 13 millones, si él les podía pasar algo de dinero, y que Alejandro le iba pasar el dinero, ya que él no tenía buena relación con ellos. Luego aseveró que Alejandro Aguilera le pasó una cajita de termómetro con dinero, cree 4 millones, vio meter a Alejandro el dinero, se juntó con ellos y le pasó la cajita a don Juan, y él pensó que era un termómetro porque tenía reunión con sus trabajadores, le dijo entonces va la huelga, le dijo revisa la cajita, la vio y dijo a ya nos vemos, entrega que hizo después de marzo y antes de octubre de 2020. Agregó que una vez que trabajaba en la Corporación entregó un sobre que decía 1.5 imagina era dinero, a don Juan., Rodrigo estaba afuera y ese sobre se lo pasó Alejandro.

Consultado sobre el motivo y monto pagado a los dirigentes, dijo no recordar el monto ni el motivo. Con declaración del 28 de septiembre de 2022 se refresca memoria y se leyó “.. en una oportunidad y **posterior al accidente de Leonardo fue a la Corporación y Leónidas Quiroga le cuenta el problema del contrato, se le acerca y le pide ayuda y le expone que los dirigentes Herrera y Astorga piden 15 millones de pesos para no movilizar a su gente hasta la Corporación.**

Prosiguió su declaración indicando que ante la fiscalía mientras tuvo en prisión preventiva declaró tres veces. Que en la declaración del 21 de septiembre de 2022 no se refirió a los dirigentes, ante ello se le evidencia contradicción con dicha declaración y se leyó “*En cuanto al tema al pago que supuestamente yo habría estado encargado de hacer a los dirigentes sindicales Herrera y Astorga, no es efectivo, yo no estuve involucrado en ese tema y no sabía que se hacía*”, ante lo cual sostuvo que declaró ello porque no se recordaba de nada, estaba en la cárcel, era muy difícil salir de ahí y salir a declarar. Que la otra declaración fue el 28 de septiembre de 2022 hizo las afirmaciones que reconoce tener conocimiento de esto y haber realizado el pago de 4 millones, ante ello dijo no recordar que cambió para declarar lo último, pues ya han pasado 5 años. Que luego de esta declaración su defensa pidió la revisión de las medidas cautelares, pero no pudo salir de la cárcel, hubo otra audiencia y ahí se pagaron como 60 millones de pesos al tribunal. .

Finalmente en lo pertinente aseveró que señaló que eran 15 millones, pero no dijo a cada uno ni en total, cree que era el total, no sabe si fue así o no porque

no estuvo en la negociación y no participó en toda la entrega de dinero. Que en la conversación con Leónidas Quiroga, éste le dijo que pedían 15 millones por no movilizar a la gente.

5. **CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS**, quien refirió haber llegado en diciembre de 2012 a la Corporación de San Fernando donde estuvo cerca de un año, luego en mayo de 2014 se fue a la municipalidad como director de finanzas y que en el año 2017 por crisis severa de la Corporación le solicitaron que se fuera como gerente interino de la misma, donde estuvo 6 meses. Que en su cargo en la municipalidad evaluaba la petición de transferencia de recursos a la Corporación y había peticiones que salían de la normalidad. Había calendarios de transferencias mensuales y también había solicitudes adicionales para esos meses, todo eso se hacía a través de oficios.

Luego afirmó que se le envió archivo creado por el tesorero, una nómina. Había requerimientos y montos indicados con abreviaciones, existiendo una para los dirigentes sindicales, eso le señaló el tesorero. Eran pagos anormales e ilícitos los que estaban anotados en el costado derecho con una sigla, nombre de quienes iban a recibir. Al momento de exhibírsele prueba correspondiente a planillas de Excel dijo finalmente que los pagos que estaban al lado derecho no podía decir que fueran lícitos o ilícitos. Luego afirmó que el alcalde en su despacho le comentó que había que hacer traspasos a la Corporación por peticiones que atender y entre ello solicitudes de los sindicatos, pero no recuerda fecha.

Llevado a otro tema, señaló que durante el año 2013 el señor Aguilera después de ir al banco informó del robo dentro del banco de 6 millones de pesos, el abogado quedó encargado de la denuncia, parece que no se hizo, pero era difícil que le hubieran sustraído el dinero desde la mochila porque habían más personas mirando, lo que él presumió es que le faltaban esos seis millones en caja y trató de simular el robo.

Consultado sobre el motivo para pagar el soborno dijo no saberlo como tampoco su monto. Que el alcalde le mencionó pedir los dineros pero para cubrir actividades de los dirigentes. Que nunca entregó dinero a Carlos Bozo para pago de sobornos. No sabe el monto ni el motivo del supuesto soborno.

Finalmente, aseveró que mientras fue gerente de la Corporación mantuvo reuniones con los dirigentes, participaron de las movilizaciones el año 2017 y nunca le hicieron una propuesta indebida estos dirigentes. Y afirmó que el tesorero mencionaba que había peticiones de los dirigentes para sus actividades propias, no le mencionó para fines personales.

6.- **PABLO BRAVO CRUZ, quien expuso que en el** año 2014 llegó a la Corporación Municipal proveniente de Curicó a desempeñar funciones como jefe de salud, después de 5 meses asumió como administrador municipal desde 2015 al año 2020 y después asumió otro cargo, siempre de naturaleza directiva. Que, desde la municipalidad el alcalde le solicitaba que ayudara a la Corporación, el señor alcalde le solicitó agilizar procesos o evitar conflictos y esto llevó a cometer cosas que no correspondían como entrega de dinero a concejales, lo que se pagaba a través de la Corporación. Había que pagar a los concejales para aumentar el traspaso de dineros de la municipalidad hacia la Corporación y la forma de operar para los concejales era pidiéndole un respaldo como factura a un funcionario de confianza.

Que Rodrigo Quintanilla llegó a trabajar el año 2017 porque había sido compañero o profesor del alcalde, era un funcionario de exclusiva confianza de éste. Recuerda que se le encargó a esta persona, lo que supo por boca del exalcalde, que había que facilitar el tema de recursos o aporte de recursos a dos presidentes de sindicatos al señor Rodrigo Herrera y Juan Astorga, eso se lo dijo el año 2017 o 2018. Don Luis le dijo que era porque había situaciones colectivas y ese año era un infierno el tema de educación, ellos iban ayudar a tener tranquilo los conflictos y alguna vez le dijo que eran cerca de 14 a 15 millones de pesos. Agregó que venían de terreno con el alcalde y en esa instancia le hace mención de la situación, diciéndole que había que arreglar y entregar el dinero a estas personas Herrera y Astorga, y le dijo que eran 14 o 15 millones, cree en total para ellos. Reiteró que la situación de los dirigentes el alcalde se lo dijo el año 2017 o 2018.

Agregó que Carlos Bozo le hizo mención de entrega y don Alejandro Aguilera que había que tener los recursos para poder pagarle a "pinky y cerebro". Luego señaló no recordar haber escuchado a Leonardo Gajardo respecto del tema, ante lo cual se le refresco memoria con declaración 1 de marzo de 2023 y se leyó " .. que en una reunión Leonardo le dijo al señor Berwart que había que pagarles a

los sindicalistas y había que hacer plata.” Agrego no recordar si fue cuando fue suplente de finanzas o cuando fue secretario general Leonardo Gajardo.

Luego especificó que a cambio de los 15 millones debían mantener el apoyo político y mantener la descongestión educacional que había. Que el alcalde llegó al acuerdo con los dirigentes, y después solicitó a Quintanilla que resolviera el conflicto, él nunca le hizo pago a los dirigentes, solo se le pidió que viera el traspaso de recursos a la Corporación.

**7. ALEJANDRO AGUILERA BAVA**, declaró que desde el año 2013 hasta el 2020 fue el tesorero de la Corporación Municipal de San Fernando, estando los dos periodos del alcalde Berwart. Consultado sobre temas irregulares indicó que hubo pago a concejales para poder tener la mayoría, para efectos de aprobar ayudas municipales hacia la corporación municipal, personas que no se veían y no trabajaban y pese a ellos se les cancelaba remuneración, también proveedores que no prestaban servicios y que se les pagaba.

Llevado al tema de los acusados afirmó que los conoció dentro de la corporación estando él de tesorero, que hubo una reunión con ellos en junio de 2019, la que fue en la misma corporación estando de secretario general Gajardo se reunieron, estando además Rodrigo Quintanilla, Humberto Hermosilla, el alcalde, Pablo Bravo, Leónidas, Herrera y Astorga, la que terminó a las 11.15 de la mañana. Que cuando termina la reunión don Leónidas le dice Alejandro vamos a tener que cancelarles a los chiquillos, pero en ese momento no hubo pago. No se le explicó exactamente el motivo del pago, pero había una negociación colectiva, algo se estaba debiendo a los socios, se debía un bono de la negociación colectiva y salía cerca de 100 millones contando a todos los socios y no habían fondos. Se llegó al acuerdo que se les iba cancelar a ellos para que no llegaran a paro ni reclamaran el bono, ya que no estaban los fondos para cancelarlo. No le dijeron el monto, estuvo 4 meses cancelando de 2 millones en sobre que pasaba a Rodrigo Quintanilla y el último mes fue en diciembre DE 2020, ahí fueron Herrera y Astorga a su oficina a pagarse, a quienes se les conocía como pinky y cerebro, alcanzándose a pagar 10 millones para cada uno., debiendo ser ese el acuerdo al que llegaron, no recuerda cómo se justificó ese pago, pero salió de aporte municipal.



Luego afirmó que en una planilla Excel anotaba todos los pagos que hacía para llevar la caja. En la parte más chica llevaba los pagos que el iban a faltar para el cuadro de caja. Al lado derecho de la planilla lo identificaba con iniciales como P y C, Pablo Bravo PB. Y también para el alcalde para pagar algo, después le pasaban un documento ya sea boleta o factura de una empresa para justificar. Que en diciembre de 2020 asistieron los acusados a su oficina donde él les canceló 2 millones a cada uno, porque ya iba a ver el cambio la SLEP, ese mismo mes les entregó el fondo de las cuotas sindicales, donde viene un resumen con las sumas, lo que fue cerca de 1 millón de pesos. Que para la compra de las tarjetas gift card les paso dinero como \$ 800.000 algo así, eso debe haber sido en noviembre de 2020, eran 30.000 cada tarjeta para entregarse a los socios.

Prosiguió y señaló que entregó cuatro sobres de dinero a Rodrigo Quintanilla, en su mayoría contenían 2 millones, en un mes se hizo un abono de 500 mil y después uno y medio, que los meses fueron seguidos, máximo 6 meses. Dice que se comenzó el pago en junio de 2020, luego dice que no recuerda la fecha del primer pago. Que en la planilla Excel registraba pagos lícitos e ilícitos, él hacía la diferencia en la planilla según lo más urgente a cancelar, por eso era un recordatorio lo que colocaba al lado derecho. Que el bono que se debía salía 100 millones estimativo y la corporación no tenía dinero, y era para no tener problemas, por eso llegaron a ese acuerdo. Los dirigentes pasaban una vez al mes con él. Que cuando se les pagaba las cuotas sindicales, era personal y se emitía un documento y decía junio tanto, por ejemplo y de acuerdo a eso se emitía una orden de compra y se cancelaba, y cuando pagaban esto el recibo quedaba archivado con el decreto de pago. Lo que iba firmado por ellos o la tesorera. Habitualmente ellos solicitan la copia de pago.

Finalmente, señaló que los meses en que entregó los sobres a Rodrigo Quintanilla no debieron ser correlativos y que no le consta que se los haya entregado a los dirigentes.

**8. CARLOS BOZO HEVIA**, verbalizó que ingresó a la Corporación para hacer su práctica de prevención de riesgos en las cercanías del 2014, trabajo alrededor de 7 años en la Corporación, comenzó en el departamento de prevención de riesgo con el transcurso de los años recorrió diversos departamentos como operaciones, apoyo a educación y salud. En el departamento de operaciones estaba

Aníbal Quezada como jefe hasta que falleció. Dicho departamento estaba encargado de la seguridad de educación, salud y menores, y también el mantenimiento de los locales y transporte, y prestaba apoyo a departamentos de la corporación, como jurídico, de finanzas y recursos humanos. Con Víctor Aníbal hizo su práctica y le ofreció seguir trabajando en la corporación en apoyo en todas las actividades que nombró. Aníbal Quezada le dijo muchas cosas del alcalde, veía una parte más política también de la corporación.

Él empezó a percibir los dineros que don Alejandro le entregaba para pasarle al alcalde, a don Pablo Bravo y también a algunos abogados, también como apoyo hacia pagos con rendiciones y otros no tenía rendiciones. El tesorero le entregaba sobres con dinero para diferentes situaciones como sobres de dinero para el alcalde. Por bastantes años le entregaron mensualmente sobres para entregar a Pablo Bravo y al alcalde y algunos abogados, se los entregaba en diferentes lugares, al principio lo esperaban cerca de la Corporación, la plaza, ya después fueron perdiendo el miedo e iba a la casa del alcalde o de don Pablo, también al concejo y en su oficina. Todos los sobres que trasladó iban con una inicial que era un número con una coma. 1.8, 2.0 por ej. En el día a día con don Aníbal supo que había situaciones que se necesitaba a los concejales para que aprobaran modificaciones presupuestarias para pago de sueldos y se les hacía pagos. Que algunas veces le dijo don Alejandro que era para gastos operacionales del alcalde o Pablo. En varias ocasiones lo escuchó, ya que estaba a cargo de un vehículo y cuando trasladaba a los directivos, los secretarios generales, los abogados, los directivos de la municipalidad como el alcalde. De esos temas se enteró por reuniones de los directivos en la corporación y por conversaciones arriba de los vehículos. En una oportunidad estaba el alcalde y don Pablo en el vehículo.

Respecto de los acusados indicó que en una oportunidad el tesorero estaba siendo suplido por Mario Bustamante un funcionario de finanzas, estaba enfermo don Alejandro Aguilera. Él necesitaba recursos para obras propias del departamento, para ello conversó con don Leónidas Quiroga jefe de finanzas y el secretario general señor Gajardo pidiendo los recursos y en eso el señor Gajardo y Quiroga decían que iban hacer un solo valor a rendir que podía ocupar lo que necesitara, pero el secretario general necesitaba unos dineros para cancelar al

señor Herrera y Astorga no sabe porque concepto, les dejó los recursos y también necesitaban pagarle al señor Mario González. No recuerda haber visto documento a nombre de él, debe haber dado a nombre de otro. Eran cercano a los 4 millones, 1 millón para el señor González y al señor Gajardo le entregó 1,5 o 2. Millones. Le dijo que tenía que solucionar un problema con pinky y cerebro que era como apodaban a los dirigentes, los que tenían buena relación con el alcalde. Con los demás sindicatos no había muy buena relación.

Concluyendo en lo atingente dijo que escuchó al alcalde, al secretario y administrador hablar del pago a los representantes de los sindicatos, pero no sabe en qué fecha escuchó ello. Agregó que dichos pagos no eran de las cuotas que iban a cobrar, eran pagos extras. Esto lo escuchó arriba de los vehículos en estas conversaciones informales. Señaló ser pagos extras porque en razón que no fue una conversación de una sola vez, fueron varios años que escuchó el mismo ítem, como también estaba el ítem de pagar al abogado, eran los dineros que no tenían que ver con la caja, con los dineros que se presupuestaban en la corporación. Que esto lo escuchó por varios años, puede haber sido 2017, 2018 o el 2019, después dijo que no se atrevía a dar fechas por el tiempo que había pasado.

**9. LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO.** Señaló que a la Corporación Municipal ingresó en el mes de julio de 2013 en el área contable, y posteriormente tuvo los cargos de jefe de administración y finanzas, subrogando el cargo de secretario general de la Corporación y volvió al área de educación por el tema del traspaso a SLEP. Cuando ingresó ya estaba el alcalde Berwart y por el ministerio de la ley era el presidente del directorio de la Corporación Municipal. Dentro de la Corporación estaba el secretario general y luego venían los departamentos de administración y finanzas, recursos humanos, operaciones, de educación y de salud. Como secretario general estaba don Gabriel, quien estuvo 8 meses, duro poco porque los que tenían el mando en la Corporación era el señor Héctor Caro director del departamento jurídico y el fallecido Aníbal Quezada jefe de operaciones. Que cuando llegó a la Corporación estaba subrogando doña Lilian Soto quien le pidió hacer un asunto de rendiciones y poner al día la contabilidad. En primera instancia se contactó con el administrador municipal Aliro Millán, pero quien tenía la autoridad o relación directa con el señor Berwart era el abogado, quien también era subrogante como secretario. A esa época no conocía al

señor Berwart. Al administrador no lo veía en la Corporación. El señor Caro tenía la relación directa con el alcalde, él iba a las reuniones más que el secretario titular. Cuando ingresó a la corporación estaba de jefe de finanzas Claudio Herrera, después en el tiempo fue percibiendo las situaciones poco claras o irregularidades, específicamente cuando ingresó al cargo de jefe de finanzas. El tesorero que venía de la administración anterior don Alejandro Aguilera, era quien tenía la relación directa con los movimientos de dinero con el señor Quezada y Caro. Ahí él empezó a ver que habían facturas que no correspondían al trabajo de la Corporación. De eso se dio cuenta cuando se hizo cargo de las finanzas, pues había varias facturas que no correspondían a la operación directa de la Corporación como transporte, trabajo de los colegios, pinturas. En algunos casos los trabajos estaban sobrevalorados y en otros lo hacían personal de operaciones de la Corporación y facturaban para que hubiera caja, para cubrir las salidas de caja con otros fines. La señora Fedora era asistente social y era la pareja de Héctor Tulio Caro, después supo que formó una empresa con otra persona cree la pareja de Aníbal Quezada, y tenían una sociedad de transporte y facturaban transportes que no se hacían. También facturaban como que otras empresas hacían el trabajo para cobrar el dinero pero lo hacían los maestros de operaciones. Que el año 2014 llegó como jefe de finanzas a la Corporación don Juan Soto, ahí en ese momento él estaba en el área de la salud, lo veía porque le iba pedir cuentas de los recursos del área de salud, era tensa la relación porque utilizaban recurso de salud para cubrir educación como sueldo.

Luego señaló que volvió a la Corporación al área de finanzas en el año 2017, en ese momento estaba Calquín de secretario general, quien estuvo poco tiempo porque habían muchos problemas de pago de remuneraciones y finalmente lo desvincularon y se fue de secretario general Claudio Herrera, lo enviaron en comisión de servicio, y en la Corporación igual tuvo un contrato. Su cargo titular era en la parte de finanzas, entiende que recibía solo el dinero de la Corporación.

En mayo o junio de 2017 volvió a la Corporación, había empezado el segundo periodo de Berwart. Le pedían dinero al tesorero y lo justificaban con facturas ideológicamente falsas. El tesorero le dijo que después que falleció Aníbal Quezada faltan como 100 millones que no tenían como justificar. Cuando estaba preocupado de su imagen el alcalde contrató personas del área de comunicación.

En relación con los dirigentes sindicales indicó que en la Corporación habían alrededor de los 450 asistentes de la educación y los sindicatos de los acusados tenían mayor porcentaje de asociados, iban por ello constantemente a la Corporación, si usaban horas de dirigentes gremiales no lo sabe, porque eran sindicatos, pero pasaban muchas más horas de las que realmente les correspondía, él los veía. Había otro sindicato de doña Magdalena Valenzuela, ella iba en forma esporádica a la Corporación y la relación era más alejada, siempre andaba con conflictos por sus afiliados. Los otros dirigentes generalmente no tenían conflicto, ellos iban directamente al departamento de personal de la Corporación y también se relacionaban con autoridades de la Corporación, cuando estuvo de secretario general subrogante la relación era directa como dirigentes sindicales, iban donde la secretaria y pasaban directo al secretario. Que, los recibió un par de veces, iban casi todos los días a hablar con el jefe de personal señor Quintanilla. El señor Hermosilla subrogó el cargo de jefe de finanzas y en operaciones el señor Bozo, el señor Hermosilla tuvo una relación muy fluida también Quintanilla, se reunían dentro de la oficina de personal de la Corporación. Tenían una relación fluida en término de la cantidad de tiempo. Había tuteo y cercanía con ellos, se decían bromas y doña Magdalena era recibida por Hermosilla y Quintanilla, en un par de oportunidades se le hizo esperar y no la atendieron, se lo reclamó a él como secretario general. Como era conflictiva trataba el jefe de personal no tener una relación muy directa, era conflictiva en el sentido que ella pedía algo tenía que entregársela inmediatamente y sino empezaba a gritar, pero lo que pedía era para los asociados.

Luego indicó que lo que iba a manifestar era lo que presenció y tal vez participó. Que el área de Corporación tenía que pasar por ley al SLEP, se requería un protocolo de bienes. Se firmó un protocolo que no se podía aumentar las remuneraciones, estando de secretario general Gajardo, en eso los dos sindicatos presentaron un proyecto de convenio colectivo fines de 2019 a principio de 2020, porque después del accidente cerebro vascular del señor Gajardo asumió en julio de 2020 nuevamente él como secretario general, los meses posteriores a esa fecha estando en el cargo se acercaron los dos dirigentes diciendo que el convenio colectivo estaba vigente desde el momento que lo presentaron en la inspección, y eso se contraponía con lo que decía la abogada doña Romina, hicieron el análisis, estaba presentado en la inspección pero se contraponía a la ley y el protocolo de

acuerdo del ministerio. El protocolo fue firmado por los sindicatos y el secretario. Hicieron una investigación del proceso y no se ingresó a la oficina de partes, se firmó solo en la oficina del secretario ya que los dirigentes tenían esa llegada, era solo un proyecto, requería la respuesta de la Corporación, y no hubo nunca una respuesta de la Corporación, y ellos estimaban que estaba vigente por haberlo ingresado a la inspección del trabajo, pero sabían que se contraponía con el proceso de traspaso al SLEP, ahí pasaron los meses y comenzaron las conversaciones, el convenio significaba cerca de 500 millones de peso a favor de los sindicatos. Ante la falta de respuesta fueron hablar directamente con el alcalde, eso lo supo del propio alcalde, que los dirigentes querían hacer efectivo el proyecto de negociación colectiva. Él y la abogada le explicaron el motivo por el cual no podía ser, y se quedaron con eso, y después siguieron los dirigentes en negociaciones, y un día llegó el alcalde y se reunió con él y el tesorero y ahí le dijo que había llegado a un acuerdo para no hacer efectivo el convenio colectivo, que eran quinientos millones de pesos, y para no hacerlo pidieron 15 millones de pesos para cada uno y el alcalde ya había llegado a ese acuerdo, iban hacer pagados de 3 millones de pesos mensuales para cada uno, esto se empezó a concretar, él le volvió a repetir que era contrario a la ley. El señor Berwart siempre estaba pidiendo dinero al tesorero y después éste señalaba que le faltaba documento para respaldar contablemente esa falta de recursos, y los documentos eran pedidos a distintos proveedores por el señor Quintanilla. Ellos accedieron por ser el jefe máximo, pero les dijo que no quería tener relación con los dirigentes, pues él no tenía confianza con ellos. Se iba hacer cargo el señor Rodrigo Quintanilla de la entrega a través de un sobre, paso el tiempo no había caja y se fue dilatando el pago, y en vez de pagar los 3 millones les pagaba un millón y medio y se fueron dilatando los pagos, de tal manera que ya ad portad del traspaso ambos dirigentes le dijeron que se acordara del compromiso con el alcalde y que faltaba un saldo por pagar, ante ello les dijo que hablaran con el tesorero. Pues fue quien pagó pero no sabe en cuantas cuotas, pero sí se les pagó los 15 millones de pesos a cada uno. Que desde que se hizo el acuerdo de pago de los 15 millones, tal como lo dijo el señor Berwart, no se hicieron más gestiones.

Prosiguió su declaración y afirmó que los dirigentes le señalaron que se acordara del acuerdo que tenían con el alcalde, pero no le dijeron que era del soborno. Que cuando le indicaron del pago, no recuerda si se les debía cuotas sindicales, las que se pagaban con los procesos correspondientes, documentos de

pago, tesorería. Que, en el pago de las cuotas sindicales no iba al día la Corporación, se acumularon varias veces en una oportunidad. Cuando terminó la Corporación en diciembre no sabe si quedaron todas las cuotas pagadas. Tenían plazo hasta diciembre de 2020 para pagar todo.

Que, en noviembre de 2019 entre personeros de la Corporación con los dirigentes sindicales se firmó un acuerdo de prórroga de los plazos para contestar el proyecto de contrato colectivo. Que no sabe porque no se contestó el proyecto pues estaba don Leonardo Gajardo. Los montos del contrato colectivo significaba un aumento de remuneraciones en pagos futuros. Que nunca se dejaron de pagar los beneficios colectivos de los asociados, los contratos colectivos vigentes se pagaron.

Finalmente, dijo que el acuerdo con el alcalde era que no iban insistir en aplicar el convenio colectivo, era el nuevo proyecto de contrato colectivo, la abogada dijo que lo habrían hecho, no recuerda si a fines de 2019 o principios de 2020. Esta negociación de 15 millones la realizó el alcalde y no sabe si otras personas. Eran 5 cuotas le señaló el alcalde y esto debe haber sido en junio.

**10. VALENTINA DANA PARRA**, quien refirió que en el año 2012 entró a la municipalidad a desarrollar la ley de transparencia, después con la llegada del alcalde Luis Berwart fue trasladada a la Corporación como secretaria de la Ley SEC, luego la cambiaron a contabilidad en la misma Corporación.

En cuanto a situaciones irregulares indicó que habían boletas de honorarios que le llevaba el señor Juan Soto o Aníbal Quezada, jefe de operaciones, quien le decía paga sí o sí, y le pones pago de cuotas sindicales. Agregó que le llegaban documentos del señor Herrera y Astorga para el pago una vez al mes, los que eran por doscientos mil, cuatrocientos mil o seiscientos mil, y la glosa era pago de cuotas sindicales y ellos mismos retiraban el pago. Finalmente dijo que el señor Quezada le decía que esos pagos eran para domar a su gente, para que no fueran a huelga, pero ella le decía que le pongo, y le indicaba ponle pago de cuotas sindicales. Precisó que trabajó hasta el año 2015.

**DUODÉCIMO.** Que, sometidos los testimonios antes aludidos al análisis y valoración de rigor, el tribunal concluyó lo que sigue.

En efecto, respecto del **testigo Berwart Araya**, exalcalde de la comuna de San Fernando, su versión es la primera y única fuente directa del supuesto actuar delictivo de los acusados, al decir que fueron los señores Astorga y Herrera (los acusados) a su oficina a solicitarle dinero, solicitud que extrañamente no plantea la acusación. Por otra parte, habla de la deuda de un bono, que era de varios millones siendo ello el motivo de la solicitud de dinero, sin embargo, en el juicio no se probó la existencia de esa gran deuda con los afiliados a los sindicatos, de hecho todo lo contrario, los testigos de la defensa que eran asociados a los respectivos sindicatos que dirigían los encartados, a saber, Juan Acero, María Rojas, Marta Rojas, Erik Pávez y José Valdés, entre otros deponentes, fueron claros, precisos, categóricos y contestes entre sí, que nada se les adeudaba, que el pago de sus beneficios durante el año 2019 y 2020 fue íntegro, y solo aludieron a que el pago de las cuotas sindicales a veces se atrasaba, lo que explicitó principalmente el tesorero señor Juan Acero.

Además, este testimonio no reunió el carácter de ser coherente, es decir mantenido firme a lo largo de todo el proceso, lo que implicó que sus dichos se modificaron de forma sustancial, desde el momento que el 8 de septiembre de 2022 indicó *“En cuanto a los dirigentes sindicales lo que puedo decir es que tuve una reunión con Leonardo Gajardo y él llamó a dos más de la corporación, ya que **los dirigentes reclamaban trato discriminatorio**, puede haber estado Leónidas, eso fue lo que se habló no pedí pago a los dirigentes sindicales.”* Aquí niega la existencia de cualquier requerimiento de pago para los acusados y por la otra aduce que la reclamación de estos era solo por un trato discriminatorio, y luego extrañamente en septiembre del otro año declara que los dirigentes le pidieron un crédito de 5 o 10 millones para uso personal y hoy en el juicio indicó que fue error, que no era un crédito.

Frente a las evidentes diferencias de información el tribunal se preguntó ¿cuándo dijo realmente la verdad? ¿qué ocurrió que después de un año “aclaró su mente” como dijo? La duda beneficia a los encartados.

Ahora bien, en cuanto al **testimonio de Gajardo Valenzuela**, exsecretario General de la Corporación Municipal durante el 17 de abril de 2019 al 8 de junio de 2022, se podría sostener como uno de los más fuertes para lograr una condena, al dar cuenta de conductas concretas de los acusados, como haber ido a su oficina y haberle entregado el proyecto de convenio, el que quedó guardado en su escritorio,



de manera de dilatar y, que expresamente le dijeron "aquí está usted guárdelo, estamos cumpliendo con nuestra palabra para que ustedes también cumplan con la suya", agregando el testigo que era el pago de lo que ellos habían pedido.

Lo primero, que debe indicarse es que este testigo dijo que fue una instrucción del exalcalde señor Berwart con fines de dilatar el convenio colectivo, finalidad a la que en estrados no hizo alusión el señor Berwart, pero es más, como ya dijimos, dicho testigo vio mermada su credibilidad; y por la otra dice que le entregaron el proyecto del convenio colectivo para "dilatarlo", sin embargo, aquella supuesta entrega no tiene sentido porque dicho proyecto ya había sido entregado en la Inspección del Trabajo con fecha 22 de octubre 2019, tal como lo acredita el documento número 4 de la acusación fiscal y que se denomina **Oficio Conductor**, fechado en San Fernando 22 de octubre de 2019 de sindicatos SETRACOM y SIDETRACOM, dirigido a doña Marcela López Ávila, en el que se indica, en lo medular, que se presenta proyecto de contrato colectivo de trabajo, iniciando de acuerdo a este acto, el procedimiento de negociación reglada, firmado por ambos acusados, y puesto en conocimiento del empleador, en éste caso, por el mismo testigo Gajardo en su calidad de secretario general de la Corporación, tal como lo dijo la Directora Provincial del Trabajo doña Marcela López Ávila. De modo que no tiene lógica esa supuesta entrega con fines de dejarlo guardado, si ya lo conocía la autoridad respectiva. Y si la entrega del proyecto al testigo hubiere sido antes del 22 de octubre, a raíz de su posterior presentación ante la Inspección, el supuesto acuerdo ya no tendría sentido, y menos daría crédito a supuestos pagos realizados inclusive en diciembre de 2020, tal como lo dijo el testigo Alejandro Aguilera, del cual nos haremos cargo más adelante.

Por su parte, **el relato del testigo Hermosilla** es de oídas respecto de lo que le habría señalado el testigo Quintanilla, quien nunca refirió haber hablado con este deponente sobre el tema de los dirigentes. Pero pensemos que fue un olvido y que sí habló con el señor Hermosilla. Sin embargo, libremente dijo que el señor Quintanilla le indicó que tenía que seguir conversando con los dirigentes porque el alcalde se lo solicitó, pero agregó "por asuntos relacionados con la actividad de ellos", ya que le tenían que pagar un dinero a los dirigentes sindicales por algunas funciones o actividades propias, por tanto hasta aquí no existe ningún antecedente de una conducta delictual, pues dice relación con pagos de dineros por actividades

o funciones propias del cargo, pudiendo deberse perfectamente a pagos de las cuotas sindicales tantas veces nombradas, y que dada la crisis económica de la Corporación Municipal no se había cubierto en ese momento. Si bien, al testigo se le hace ejercicio de refresca memoria con su declaración de 4 de abril de 2023 y se leyó *“Sobre el pago que se hizo a Herrera y Astorga, se lo contó Quintanilla, se les pagaría a esas personas debido que necesitaban mantenerlos callados, cree que eran cuotas de 3 millones. Pero no sabe el motivo, esto lo deben haber conversado con la abogada de la época Gajardo o los que debían ver estos asuntos.”* Sobre el punto baste indicar que hoy en el juicio no mantuvo lo relatado hace más de un año, lo que debilita su versión, pues no mantiene su coherencia, lo que aminora su credibilidad y hace generar la duda razonable sobre qué fue lo que realmente le dijo el señor Quintanilla y si es que realmente le dijo algo de los dirigentes.

Respecto del testimonio de **Herrera Villalobos**, director del departamento de administración y finanzas durante el periodo materia del juicio, no es posible extraer información relativa a la supuesta petición de los dirigentes al alcalde, pues fue claro en indicar que el alcalde le mencionó la necesidad de pedir dineros para cubrir actividades de los dirigentes, es decir, nada ilícito. Es más, agregó desconocer el supuesto motivo del soborno y el monto. Asimismo, agregó que el tesorero, el señor Aguilera, le habló de los dirigentes, pero en el mismo sentido que el alcalde, es decir, sobre peticiones para sus actividades propias del cargo y no personales.

Y si bien a este testigo se le exhibieron planillas que daban cuenta a su costado derecho de al menos un pago en noviembre de 2019 a P y C, que serían los acusados por su apodo pinky y cerebro, y de carácter irregulares, ello lo dijo en base a lo que le indicó el tesorero, sin embargo, el mentado tesorero, a quien también se le exhibieron las planillas, dijo que en la planilla Excel registraba pagos lícitos e ilícitos, haciendo la diferencia según lo más urgente, y por eso era un recordatorio lo que colocaba al lado derecho. Es decir, descartó que fueran pagos irregulares los consignados en el costado derecho, por tanto, nuevamente nos preguntamos ¿quién dice realmente la verdad? No fue posible determinarlo y la duda beneficia a los acusados.

A su vez, respecto del **testimonio de Bravo Cruz**, Administrador Municipal durante la alcaldía de Berwart Araya, valga la pena indicar que titubeó bastante en

su exposición y trató de evidenciar olvidos, pero al fin y al cabo lo único de lo que dio cuenta fue de supuestos pagos y acuerdo con los dirigentes Astorga y Herrera en el año 2017 o 2018, fechas que dijo recordar muy bien por las grandes movilizaciones educacionales de esa época, pero jamás en los años que dice la acusación, esto es, 2019 a 2020, por lo que su narración de hechos no apoya en nada la imputación. Y si bien podría decirse que es un antecedente de la conducta ilícita de los acusados, lo cierto es que él único que lo refiere es dicho deponente, sin que alguien corrobore su versión, ni siquiera el alcalde, quien habría sido su fuente de información.

**Con relación al testimonio de Bozo Hevia**, también parte de la Corporación Municipal en diferentes cargo, hizo alusión en gran parte de su declaración a la entrega por años de sobres con dinero que le eran proporcionados por el tesorero el señor Aguilera, que eran para el alcalde, el administrador Pablo Bravo y abogados, que en nada tienen que ver con el juicio. Si bien hace alusión a una supuesta entrega de plata para los dirigentes, requerida por Gajardo para que la agregara a su presupuesto con la finalidad de ejecutar unos trabajos, no especificó el año de dichos trabajos como para encuádralos dentro del marco de la acusación. Además, Gajardo nada dijo en su exposición al respecto para dar fuerza a esa imputación. Y por último respecto de las conversaciones que dijo escuchar entre el alcalde y el administrador, sobre la entrega de platas extras a los dirigentes, dijo claramente no recordar el año, que podía ser 2017, 2018, 2019, y la duda no permite utilizar su relato para fundar una condena.

Ahora bien, con respecto al **testigo Quintanilla Maldonado**, lo primero que afirmó es que supo que le ofrecieron como 10 millones a los dirigentes para no sacar el nuevo contrato colectivo, en una conversación que tuvo con Leónidas Quiroga, una vez que ya se había retirado de la Corporación, esto es, después del 13 de marzo de 2020. Aclaró que iba a la Corporación porque tenía unos vehículos arrendados al área de salud. Sin embargo, el testigo Quiroga, pese a dar una exposición bastante larga, nunca refirió haber conversado con el señor Quintanilla del tema, y menos afirmó haberle dicho si podía pasar algo de dinero y que el señor Aguilera -el tesoro- se lo iba pasar. De manera tal que sus afirmaciones no fueron corroboradas por otro antecedente o prueba, mermando la fuerza de sus dichos.

Luego afirmó que Alejandro Aguilera le entregó una cajita de termómetro con dinero, cree que eran 4 millones, se reunió con los acusados y le pasó la cajita a don Juan. Precizando que dicha entrega la hizo después de marzo y antes de octubre de 2020. Agregó que una vez, mientras aun trabajaba en la Corporación, entregó un sobre que decía afuera "1.5" y que imaginó que era dinero, a don Juan, mientras que Rodrigo Herrera esperaba afuera. Dicho sobre se lo habría pasado Alejandro.

Esta entrega de dinero fue totalmente negada por los acusados y él único testigo que podría corroborar la entrega de una cajita de termómetro con dinero era precisamente el tesorero Alejandro Aguilera, y dicho deponente no adujo dicha entrega, es más, dijo que había entregado cuatro sobres al señor Quintanilla, estimando que los pagos no fueron correlativos, que siempre eran de 2 millones cada uno, pero que en una ocasión hubo uno de 500 mil y que luego se completaba el resto, es decir, el millón y medio restante.

Frente a dichas versiones las preguntas que surgieron para el tribunal fueron ¿quién le entregó una cajita de termómetro con 4 millones al señor Quintanilla? Si el tesorero señor Aguilera no la menciona. ¿Fue verdad o no entonces la entrega de dicha caja con dinero? Si del único que tuvimos noticia que entregaba dineros era el tesorero y éste nada dijo de dicha entrega. ¿Cuántos sobres le habría entregado el señor Aguilera al señor Quintanilla? ¿Cuatro o uno? Todas esas dudas no permiten dar fiabilidad a sus testimonios.

Por último, merma aún más su credibilidad el hecho que su relató no fue sostenido en el tiempo, **pues en declaración del 21 de septiembre de 2022** se leyó *"En cuanto al tema del pago que supuestamente yo habría estado encargado de hacer a los dirigentes sindicales Herrera y Astorga, no es efectivo, yo no estuve involucrado en ese tema y no sabía que se hacía"*. Es decir, negó haber realizado pago a los acusados y afirmó no saber que se hacían éstos, llamando la atención que luego, 7 días después, recordara sin más haber realizado el pago de 4 millones a los dirigentes. Frente a esta notoria discrepancia su explicación fue que en la cárcel era complejo y no recordaba. Sin embargo, pese a que siguió en la cárcel y pasaron tan solo 7 días sí recordó y al tiempo después salió en libertad bajo fianza.

Por su parte, **Quiroga Montenegro** sostuvo que un día, sin precisar fecha, llegó el alcalde, se reunió con su persona y el tesorero y les señaló que había llegado a un acuerdo para no hacer efectivo el convenio colectivo que implicaba una suma de 500 millones de pesos, para no hacerlo efectivo, los dirigentes habían pedido 15 millones cada uno.

Pues bien, es cierto que el alcalde fue el primero que recibió la noticia de la supuesta solicitud de dinero, según sus dichos, pero dicho testimonio conforme ya se dijo se vio afectado en su credibilidad, por tanto, al ser el señor Quiroga un testigo de oídas de aquel, no puede el tribunal dar por cierto lo señalado por éste. Pero aun en el caso de dar por cierto sus dichos, lo cierto es que el tesorero señor Aguilera fue categórico en indicar que él no participó en la reunión con el alcalde, pero si supo de ella. Además, este testigo habló de una suma de 500 millones que sería lo que el convenio generaría en gastos, sin embargo, no hubo sustento alguno de dicha afirmación, ni documental ni testimonial, es más tampoco él justificó dicha suma, por lo que a todas luces no pudo darse como un hecho cierto.

Luego indicó que casi cercano a la fecha del traspaso al SLEP los dirigentes le manifestaron que se acordara del compromiso con el alcalde y que faltaba un saldo por pagar, a lo que les respondió que hablaran con el tesoro.

La verdad es que de dicha afirmación no es posible concluir, sin atisbo de duda, que se referían al supuesto pago de 15 millones que habrían solicitado los acusados, y que constituiría el delito de cohecho, por la ambigüedad de la información. Por otra parte, no debemos olvidar que era común que las cuotas sindicales no se pagaran mes a mes, bien pudiendo ser a ese tipo de pago al que hubieren hecho alusión los acusados. Dicha falta de pago mes a mes, fue reconocida por los propios directivos y así también se dio cuenta por medio de algunos decretos de pagos acompañados por la fiscalía como, por ejemplo, en el Decreto de Pago N°2720 de fecha 10 de septiembre de 2019 en el que consta que se pagaron los meses de mayo, junio y un 50% de julio, de las mentadas cuotas.

Ahora bien, con relación al **testigo Aguilera Bava**, tesorero de la Corporación Municipal, y quien sería uno de los principales protagonistas en este delito de cohecho, entendiendo que él hacía la entrega de dinero para los pagos. Dicho testigo dijo haber recibido instrucciones de pago para los dirigentes de parte

de Leónidas, sin embargo, este testigo no lo afirma, todo lo contrario, dice que el tesorero estuvo presente en la reunión con el alcalde y en la oportunidad en que habló del mentado pago, presencia que negó el deponente, lo que merma la credibilidad en sus afirmaciones.

En cuanto a los sobres de dinero que dijo haber entregado al señor Quintanilla el tribunal ya se hizo cargo al momento de la valoración de dicho testimonio.

También afirmó que estando él de tesorero hubo una reunión en junio de 2019, la que fue en la misma Corporación, participando el secretario general, Gajardo, además, Rodrigo Quintanilla, Humberto Hermosilla, el alcalde, Pablo Bravo, Leónidas, Herrera y Astorga, la que terminó a las 11.15 de la mañana. Que al terminar la reunión don Leónidas le dice “Alejandro vamos a tener que cancelarles a los chiquillos”, pero en ese momento no hubo pago.

Esta afirmación de la supuesta reunión con el fin de acordar el pago, que con tanta precisión nadie más la indica, no se condice con la presentación que con fecha 5 de agosto de 2019 (documento 19 de la defensa) hacen los acusados en representación de sus sindicatos ante la Inspección Provincial del Trabajo, cuya materia es contrato colectivo, donde señalan expresamente la necesidad de solicitar una mediación con el empleador Corporación Municipal, por el tema del artículo 19 presente en los contratos colectivos y que decía relación con la prórroga automática. Además, se menciona que solicitan dicha mediación para efectos de regularizar el contrato colectivo vigente.

De lo anterior surgió una nueva interrogante para el tribunal ¿Quién que acuerda un pago y señala que no hará nada para sacar el contrato colectivo adelante hace una presentación como ésta? La respuesta es una: solo quienes nada han acordado. Por tanto un actuar contrario se aparta de las reglas de la lógica y de las máximas de experiencia, y nos induce a determinar que dicho acuerdo no existió.

Ahora bien, este testigo dijo haber pasado a los dirigentes Astorga y Herrera en su oficina de forma personal, en diciembre de 2020, un sobre a cada uno 2 millones, como último pago de lo acordado con el señor alcalde. Pero aquí es una versión contra otra, pues por una parte los imputados lo niegan y este testigo que

lo afirma no tiene ninguna prueba de ello, son solo sus dichos, no contando entonces con corroboración alguna, ni un dato periférico que reafirme su versión, como, por ejemplo, una planilla de Excel como la que fue exhibida con una anotación al costado derecho, sobre todo si supuestamente ahí se anotaban los pagos irregulares, o el testimonio de otro directivo. Así entonces, el mentado pago en la forma y por los motivos esgrimidos no resultó acreditado, al faltar algún dato o hecho independiente a la propia declaración que lo avalara.

Por último, la testigo **Valentina Dana**, si bien dio cuenta de irregularidades en el pago de dineros a los acusados al referir que Aníbal Quezada le decía que los pagos a Astorga y Herrera eran para domar a su gente, para que no fueran a huelga y que debía “ponerle” cuotas sindicales en los decretos de pago, lo cierto es que, esta testigo entregó información de los años 2013, 2014 y 2015, pues trabajó hasta ese último año, según lo manifestó. Por tanto, no pudo ser considerada como prueba directa de los hechos imputados, sin perjuicio que podría constituir un indicio, como lo dijo la señora fiscal, aunque dichos asertos no fueron corroborados por ningún otro medio de prueba como para dar fuerza a sus dichos.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, de los testimonios ya referidos, también debe indicarse que ninguno de ellos hizo alusión a lo señalado en la acusación en cuanto a que *“Transcurrido el plazo legal que tenía la Corporación Municipal para dar repuesta al proyecto, los acusados no solicitaron se hiciera efectivo el apercibimiento legal, que se traducía en que dicho proyecto se entendía aprobado por la corporación y pasaba a tener el carácter de contrato colectivo”* otro párrafo dice *“Dicho acuerdo consistió en que dejaban transcurrir el plazo de respuesta del empleador y omitían cualquier solicitud posterior..”*.

Ningún testigo explicitó ello en los términos expuestos en la acusación, y si bien el señor Gajardo habló del tema de dilatar el convenio colectivo por instrucción del alcalde, éste último dijo entre otras cosas, que el acuerdo fue por existir una deuda pendiente con los asociados, que tenían presión de estos y que podía dilatar ello si pagaban cierta suma de dinero, es decir, no habló del tema del convenio propiamente tal.

Así también el testigo Quintanilla Maldonado dijo que pedían dinero para no movilizar a su gente y el deponente Hermosilla dijo que era para mantenerlos

callados. Ante lo cual el tribunal se preguntó cuál fue el motivo para el supuesto acuerdo de pago o solicitud de pago, como quiera llamarse. La respuesta es que se desconoce, lo que tuvo suma relevancia, pues la misma acusación consigna la existencia de una motivación específica, siendo por lo demás esperable que quien solicita dinero de forma irregular lo haga motivado por un fin.

**DÉCIMO CUARTO:** En fin, ya sea que se hubiere atribuido por los persecutores una u otra acción, es decir, solicitar o aceptar un beneficio económico, lo cierto es que las principales fuentes probatorias de los acusadores, consistentes en los dichos de Luis Berwart, Leonardo Gajardo, Carlos Bozo, Leónidas Quiroga, Humberto Hermosilla, Rodrigo Quintanilla, y Alejandro Aguilera, en sus calidades de jefaturas de diversas áreas de la Corporación Municipal, con estrecha vinculación con el alcalde, no tuvieron la entidad para avalar las conductas ilícitas que se atribuyen a los acusados, pues sus testimonios adolecieron de diversas contradicciones internas y entre ellos, especialmente en cuanto a los motivos del presunto acuerdo, los montos y formas de pago, lo que no resultó baladí, pues se advirtió ausencia de corroboraciones periféricas o elementos externos que afianzaran sus dichos, sobre todo considerando que resultó patente que había dentro de la Corporación Municipal un evidente desorden financiero y prácticas ilegales reconocidas por los propios deponentes aludidos, lo que se hacía más riguroso el examen de la prueba al imputarse precisamente la aceptación de pagos en ese escenario de desprolijidad y considerando que no hubo otros medios de prueba objetivos e indubitados que suplieran las falencias advertidas en los testimonios.

También se evidenció en los deponentes falta de coherencia o mantención en el tiempo, pues algunos de los relatos fueron cambiando a medida que avanzaba el proceso, especialmente el de Luis Berwart, una de las fuentes principales de incriminación. Cuyo relato fue cambiando a medida que avanzaba el proceso, sin entregar una justificación que resultara plausible para estas sentenciadoras.

Como consecuencia de lo anterior resultó imposible para el tribunal tener por acreditada una conducta como la descrita en los tipos penales, **en cuanto a solicitar o aceptar los acusados un beneficio económico**, verbos rectores claves de la imputación, y si ello no se acredita, al ser un elemento del tipo penal, lo que



deviene es la absolución de los encausados, quedando incólume la presunción de inocencia que los amparaba.

**DECIMO QUINTO:** Sin perjuicio de lo ya resuelto, importante es decir que el libelo acusatorio indica la frase “ **omitían cualquier solicitud posterior**”, sin embargo, los dirigentes sindicales Astorga y Herrera firmaron el día 4 de noviembre de 2019 con el secretario general de la Corporación Municipal de San Fernando, Leonardo Gajardo Valenzuela, una Prórroga de Plazo, tal como da cuenta el documento número 19 incorporado por la defensa en el que se señala, en lo pertinente:

**MAT: PRORROGA DEL PLAZO**

*San Fernando, 4 de noviembre de 2029.*

*“...por este acto y de común acuerdo comparecen los SINDICATOS SETRACOM Y SIDETRACOM, representados por los comparecientes JUAN ASTORGA OPAZO, presidente de SIDETRACOM, y don RODRIGO HERRERA BUSTAMANTE, presidente de SETRACOM... junto con su empleador la Corporación Municipal de San Fernando, representada legalmente por su Secretario General don Leonardo Gajardo Valenzuela...vienen el prorrogar los plazos establecidos en los artículo señalados para que el empleador haga entrega de la respuesta al Proyecto de Contrato Colectivo, dejando como fecha final para ello el día 30 de mayo de 2020. Con todo el plazo se amplía de esta manera para que los sindicatos conozcan la auditoria contable y financiera que se está realizando en la Corporación Municipal de San Fernando con el objeto del traspaso al Servicio Local de Educación (Desmunicipalización) que ayudará a conocer las posibilidades reales de compromiso económico de parte del empleador. San Fernando.*

El mentado documento da cuenta de una conducta activa de los acusados frente a la presentación del proyecto colectivo, pues dentro del plazo legal, firmaron esta prórroga, tal como lo dijo la Inspectora Provincial del Trabajo, el tema radica en que no la presentaron de inmediato ante la autoridad para seguir con la negociación reglada, sino que recién en marzo de 2019, inclusive antes de la fecha de la prórroga que era mayo, aduciendo para ello desconocimiento, lo que a juicio de estas sentenciadoras alcanza a un error o una falta de diligencia, pero jamás a un dolo directo en su actuar, máxime si el propio secretario general al serle exhibido el referido documento dijo expresamente que las razones allí

colocadas para la prórroga eran verdaderas. Es decir, la prórroga estaba fundada en hecho reales.

Pero en todo caso lo que importa es que a través de la firma de esa prórroga los encartados realizaron una acción concreta por avanzar en el proyecto de contrato colectivo y no como se dice en la acusación que omitieron cualquier gestión posterior.

Además, acá no podemos olvidar que existía la mentada cláusula de prórroga tácita de los contratos colectivos, en el artículo 19 de los referidos instrumentos. Así el contrato colectivo del año 2015-2018 en su **artículo 19 dice en su inciso 2°: “De no manifestarse las partes, se entenderá prorrogado por periodos iguales, manteniendo la integridad de todas sus cláusulas, aplicándose un reajuste del 3% por sobre el IPC en todos los bonos, asignaciones, beneficios y reconocimientos establecidos en este contrato colectivo.”** Cláusula que los acusados entendían válida e incluso su empleador Corporación Municipal, y por ello no les generaba mayor preocupación, justificando así que firmaran esa prórroga y no la presentaran de inmediato. La validez de dicha cláusula tan solo se vino a cuestionar con fecha cierta en noviembre de 2019, ello en mérito del documento número 20 de la prueba de la defensa, que se denomina *ordinario 56, cuyo antecedente es ORD. n° 614/ 2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, de Leonardo Gajardo Valenzuela, secretario general de la corporación Municipal San Fernando*. En dicho documento el Director Regional del Trabajo de la región de O Higgins con fecha de 10 de febrero de 2020 (recepcionado el 17 de febrero de 2020) da respuesta a la inquietud, señalando en su párrafo final *“Respecto a la renovación contractual automática, de un contrato colectivo, por el mero transcurso del tiempo, cuando no hay actuación alguna de las partes, la ley no contempla esta opción, disponiendo que en estos casos, operaría la ultraactividad del artículo 325 del Código del ramo...”* siendo la respuesta que dicha cláusula no era válida y ahí el escenario para todos cambiaba, especialmente para los acusados en sus calidades de dirigentes. Tal como también lo dijo en estrados la abogada Rocío Escudero Vergara.

Siguiendo con el análisis, luego presentaron en marzo de 2020 la prórroga firmada en noviembre ante la Inspección, lo que fue un hecho no controvertido y con fecha 17 o 18 ( porque el timbre dice 17 y el documento 18) de junio de 2020

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL  
SAN FERNANDO

---

oficiaron a la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, específicamente a su jefa doña Marcela López Ávila, tal como lo da cuenta el documento número 14 de la prueba incorporada por la defensa y firmado por ambos acusados, que indica lo siguiente:

MAT. Oficio Conductor.

San Fernando, 18 de junio de 2020

DE: Sindicatos SETRACOM y SIDETRACOM.

PARA: Marcela López, Jefa Inspección Provincial  
Del Trabajo Colchagua.

MATERIA: Proyecto Contrato Colectivo sindicatos  
SETRACOM y SIDETRACOM.

*En mérito de ser partes de una negociación colectiva reglada con nuestro empleador, la Corporación Municipal de San Fernando, es que solicitamos su pronunciamiento respecto a la formal presentación que realizamos con fecha 22 de octubre de 2019, respecto de la cual no recibimos respuesta de nuestro empleador- independiente de la prórroga de plazo presentada que excedía el plazo legal, de la cual tampoco hubo respuesta y cuya presentación excediendo el plazo no invalida la presentación de octubre de 2019-. Por tanto, de acuerdo al artículo 337 del Código del Trabajo que señala expresamente que : “Efectos de la falta de respuesta y de aquella que no contenga las estipulaciones del piso de la negociación. Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto de contrato, será sancionado con una multa establecida de conformidad al inciso primero del artículo 406.*

*Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo sin que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo que las partes hayan acordado la prórroga del inciso primero del artículo 335,, en cuyo caso la sanción operará del día siguiente al vencimiento de la prórroga”*

*Por tanto, en virtud de lo que señala la ley, solicitamos formal pronunciamiento, respecto de la presentación de proyecto de contrato colectivo presentado con fecha 22 de octubre de 2019, el cual cumple con todos los requisitos legales, para que se declare la vigencia de este y las responsabilidades y obligaciones establecidas para nuestro empleador para con nosotros que debería cumplir de acuerdo a lo solicitado.*

A través de dicho oficio los acusados manifestaron su voluntad inequívoca de continuar con la tramitación del proyecto de contrato colectivo ingresado en octubre de 2019. Tanto es así que a raíz de ello la Inspectora Provincial doña Marcela López Ávila con fecha 22 de junio de 2020 en **ordinario N°220**, que es parte de la misma prueba del numeral 14 de la defensa, solicitó a la Corporación Municipal de San Fernando acreditar respuesta a proyecto de contrato colectivo. Documento que indica en su cuerpo:

*“Considerando que con fecha 17 de junio de 2020, los Sindicatos SETRACOM y SIDETRACOM, ha solicitado a esta Inspección del Trabajo que emita resolución donde conste que de conformidad al inciso segundo del artículo 337 del Código del Trabajo. “Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto ed contrato colectivo sin que el empleador haya dado respuesta se entenderá que lo acepta...”*

*“...Por lo anteriormente enunciado, solicito a Uds. En un plazo de 3 días hábiles desde la notificación del presente, acreditar elementos indiciarios de haber notificado su respuesta a la comisión negociadora sindical.*

*Lo anterior bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 3376 antes citado, procediendo ésta IPT a registrar el instrumentos como un contrato colectivo”*

Con fecha 26 de junio de 2020 mediante el **ORD. 319/2020**, el Secretario General de la Corporación Municipal Leónidas Quiroga dio respuesta al proyecto de contrato colectivo presentado el 22 de octubre de 2019, aceptándolo en todos los términos. A raíz de dicha respuesta con fecha 30 de junio de 2020 se solicitó mediante oficio por los acusados a la Inspectora Provincial tuviera presente y aceptada la respuesta de su empleador, y con ello resguardar la legalidad de proceso y que sea bien recibido por el Servicio Local de Educación Pública Colchagua, para su aplicabilidad (documento que también está dentro del número 14 incorporado por la defensa).

Todas las presentaciones y acciones que los acusados hicieron hasta aquí, dan cuenta de un actitud proactiva por sus asociados y sus propias personas, tendiente a que el nuevo contrato colectivo naciera a la vida del derecho, y no como lo señala la acusación en cuanto dice “omitían cualquier solicitud posterior” para que este no se verificara. Además, este accionar de los acusados, que insisten y piden pronunciamiento de la Corporación, no se condice con el supuesto acuerdo

al que habrían llegado con el alcalde y el señor Gajardo de “no hacer nada, de dilatar el contrato colectivo”, y menos se condice con que haciendo todo esto, en diciembre de 2020 les hubiera pagado el señor Aguilera 2 millones de pesos a cada uno de los encartados “para que no hicieran gestiones con el convenio”. Es decir, no resiste análisis, resultando contrario a toda lógica que les pagaran por no haber cumplido lo supuestamente acordado, pareciendo más lógico sostener que ese pago por dicho concepto nunca existió.

**DÉCIMO SEXTO.** Ahora bien, dicho lo anterior, toca señalar que a diferencia de lo sostenido por los acusadores en sus alegaciones finales, en cuanto a que a consecuencia del actuar de los acusados nunca hubo contrato colectivo 2019-2021, esta magistratura tiene serias dudas al respecto, pues si bien la Inspectora Provincial Marcela López dijo en estrados que en junio de 2020 ambos sindicatos solicitaron que el proyecto se declarara como contrato, ante lo cual pidió que la Dirección Nacional se pronunciara, dando como respuesta que no habiendo constado la respuesta de la empresa dentro de los 20 días y un documento de prórroga en los plazos establecidos no podían transformar el proyecto en contrato colectivo, lo que informó por oficio a las partes, oficio que no tuvimos la oportunidad de conocer, pese a que la fiscalía pudo haberlo requerido a la respectiva Inspección.

Por el contrario, se aportó un documento titulado **CARATULA DE INFORME DE FISCALIZACIÓN**, N° de fiscalización 470 y año 2020, con fecha de informe 17/12/2020, suscrito por el fiscalizador Carlos Silva Jiménez, y que corresponde al documento N°29 ofrecido por la defensa que señala en sus conclusiones finales, específicamente en la primera, lo siguiente:

*1. “Que si es efectivo que los sindicatos SIDETRACOMN Y SETRACOM, tienen contrato colectivo vigente con la CORMUSAF, cuya negociación reglada se inicia el 22/10:2019, tras presentación en las oficinas de la IPT de Colchagua del proyecto de contrato, consta además que las partes convinieron una prórroga fuera de toda norma en el plazo de la respuesta por parte del empleador, hasta el 30/05/2020, a lo cual posteriormente la IPT debió intervenir tras requerimiento de los sindicatos por la nula respuesta del empleador, dándosele un plazo de tres días para responder, lo cual finalmente sucede el día 26 / 06 / 2w020, aceptando el empleador el contrato colectivo en todas y con vigencia actual de diciembre de 2019 a diciembre de 2022” .*

Importa aquí decir que, dentro de los hechos a investigar, en el mentado documento se consigna: **Efectividad que los sindicatos SIDETRACOM Y SETRACOM, tienen contrato vigente**, y la respuesta afirmativa fue dada en la conclusión número 1, ya reproducida.

Entonces frente a este escenario el tribunal no puede afirmar, más allá de toda duda razonable, que nunca se perfeccionó en contrato colectivo el proyecto presentado en octubre de 2019.

Ahora bien, podría decirse por los acusadores que existe un INFORME DE EXPOSICIÓN FISCALIZACIÓN INVESTIGATIVA, cuyo número de fiscalización es 17 y año 2021, que en su apartado b.1. hace alusión al proyecto de contrato colectivo presentado 2019 y que en definitiva dice *“Que las partes, al haber acordado esta prórroga, superior al máximo legal, se salieron del proceso reglado”*. Y luego dice de consiguiente, *“dado que no se trata de una negociación colectiva reglada, y no consta que se haya depositado en este servicio, un convenio suscrito por las partes, lo que rigió a las partes hasta el 31 de diciembre de 2020, son sus respectivos contratos individuales”*.

En definitiva, lo que sostiene es que no hubo contrato colectivo durante el año 2019. Sin embargo, el tribunal estimó que no se le podía dar fuerza probatoria a este informe por sobre el otro, porque en ambos aparece como fiscalizador el señor Carlos Silva Jiménez, y éste no vino a juicio a dar razón de sus dichos y justificar el cambio de postura en su segundo informe.

Así las cosas, la duda razonable subsistió y se tornó aún más necesario haber contado con ese oficio respuesta de la Dirección Nacional del Trabajo y que dijo la Inspectora Provincial haber notificado a las partes, pero al cual nadie más hizo alusión. Máxime si como lo dijo el señor defensor en su alegato de clausura y apoyado en el texto denominado Manual Práctico de Negociación Colectiva del autor Cristian Aguayo Mohr, *“la prórroga a la respuesta al proyecto de contrato puede ser por el tiempo que las partes estimen necesario”*.

Además, a estas jueces no deja de llamarle la atención lo prescrito el artículo 337 del Código del Trabajo, en cuanto indica:

**“Artículo 337.- Efectos de la falta de respuesta** y de aquella que no contenga las estipulaciones del piso de la negociación. Si el empleador no diere

respuesta oportunamente al proyecto de contrato, será sancionado con una multa establecida de conformidad al inciso primero del artículo 406.

**Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo sin que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo que las partes hayan acordado la prórroga del inciso primero del artículo 335, en cuyo caso la sanción operará a partir del día siguiente al vencimiento de la prórroga”.**

Es decir, de una simple lectura, pareciera que, ante la falta de respuesta del empleador, no es necesario realizar apercibimiento alguno, y se entiende aceptado por el solo ministerio de la ley, tal como lo argumentó el defensor.

Pero es más, dio fuerza a la vigencia del mentado proyecto de contrato colectivo del año 2019 (incorporado por la fiscalía) que tenía como nuevos beneficios un bono de antigüedad por cada 3 años, pero para funcionarios con 30 años o más de servicio; un bono de asignación de riesgo y un aporte solidario en caso de enfermedades catastróficas, el hecho que el mentado bono de antigüedad y asignación de riesgo constaran como pagadas en las liquidaciones de remuneraciones del señor Astorga del año 2024, cuando lo cierto es que después del proyecto del año 2019 no existió ninguna otra negociación colectiva por el traspaso al SLEP. Por ende, dichos pagos solo pudieron tener su origen en el mentado contrato colectivo.

Por último, no debemos olvidar que el análisis realizado en este último aparatado vino a ahondar en la decisión absolutoria, pues ya con el hecho de no haberse acreditado las conductas de solicitar o aceptar un beneficio económico por parte de los acusados, los tipos penales imputados no pudieron configurarse.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** En definitiva, que se hubiere o no materializado la constitución del contrato de convenio colectivo 2019, no pudo imputarse a un accionar doloso de los acusados y menos que se hubiera debido al pago de una suma de dinero para dilatar ello, simplemente porque ello no se acreditó. Y si bien tenemos presente que los tipos penales imputados son delitos de mera actividad que no requieren para su consumación un desembolso real de dinero, sí requieren que se acredite la mentada solicitud o aceptación de un beneficio económico al cual no tenían derecho, y fue ello precisamente lo que no se pudo determinar con la

prueba de cargo rendida, pues la duda razonable se alzó, por tanto, ambos tipos penales imputados no se pudieron tener por configurados, tal como ya se razonó.

**DÉCIMO OCTAVO:** A las argumentaciones anteriores se suma que se rindió prueba de descargo que acrecentó la duda razonable, pues dieron cuenta de unos dirigentes activos en su calidades de presidentes de sindicatos, así lo demuestra parte de la prueba documental acompañada por la defensa.

Ese actuar activo y diligente del que dieron cuenta los testigos de descargo no se condijo con el espíritu o la finalidad del presunto acuerdo de dilatar un asunto y mantener con calma a sus asociados.

Es así como los testigos Luis Pizarro Barahona, Juan Carlos Acero Lamas, Carlos Meriño Díaz, Marta Rojas Contreras, María Rojas Contreras, Beatriz Meza Torres, Erik Pávez Núñez, José Becerra Valdés y Luis Navarrete Pezoa, fueron todos contestes en indicar que eran asociados indistintamente de los sindicatos SIDETRACOM y SETRACOM, que durante los años 2019 y 2020 no se les adeudaron beneficios algunos, les eran íntegramente pagados su sueldo, manifestando uno que otro que lo que se demoraban en pagar a veces era la cuota sindical, la que usaban para sus actividades como sindicato. Lo anterior, llevó a descartar lo declarado por el testigo Luis Berwart en cuanto a que los acusados se habrían acercado a él para buscar una solución a una cuantiosa deuda por un bono que mantenía la Corporación con los asistentes de la educación sindicalizados.

Además, refirieron los testigos de descargo, no tener ningún reproche que formular al señor Astorga y Herrera y que cuando tuvieron que salir a marchar por sus intereses lo hicieron.

En cuanto a prueba documental el tribunal tuvo en cuenta presentación sindicada como el N°10 en la prueba de la defensa, realizada con fecha 19 de octubre de 2020 dirigida por don Juan Astorga al señor Leónidas Quiroga como Gerente General de la Corporación Municipal, donde lo insta al pago a uno de sus socios del bono de perfeccionamiento; luego el documento N°17 de la prueba de la defensa referente a denuncia de incumplimiento de contrato colectivo de fecha 10 de marzo de 2021, presentada por ambos sindicatos ante la Inspección del trabajo, denunciando el incumplimiento del contrato colectivo vigente por su ex empleador Corporación Municipal de San Fernando, en relación a obligaciones de dinero exigibles en razón del artículo 326 del Código del Trabajo. Finalmente, el



documento N°5 referente a denuncia de practica antisindical reiterada, de fecha 17 de noviembre de 2020, días antes de recibir, en el mes de diciembre, el último pago supuestamente hecho por el señor Aguilera, y en donde piden a la Inspección del Trabajo la aplicación de multas por práctica antisindical en contra de la Corporación Municipal por la no aplicación del contrato colectivo.

Esta última presentación escapa de toda lógica hacerla si se tiene un acuerdo como el mencionado por los directivos de la Corporación, ya referidos.

**DÉCIMO NOVENO: Prueba inconducente de los acusadores.** En cuanto a la prueba testimonial de los acusadores Ana Luisa Rozas Toro, Gladys Trujillo Moscoso, Luisa Faundez Hidalgo, María Magdalena Valenzuela Morales, María Verónica Quiroz Contreras y Sergio Díaz Díaz, en nada alteran lo resuelto, pues no hacen referencia a los hechos de la acusación y si bien algunos hablaron de irregularidades, como lo hizo la testigo Quiroz al referir el pago de remuneraciones a trabajadores que no asistían a desempeñar funciones.

Así también algunos de estos testigos hablaron de la buena relación de los acusados con los directivos de la Corporación y que tenían un trato de mucha confianza, al punto que se tuteaban, a diferencia del trato al otro sindicato liderado por la testigo Magdalena Valenzuela, lo que al parecer era así, inclusive existió un WhatsApp entre el señor Hermosilla y Herrera donde se tuteaban, tildando incluso dicha deponente a los acusados como pasivos en su actuar.

Sin embargo, dichas apreciaciones para estas sentenciadoras en nada alteraron la decisión, porque aún en el caso de ser efectivas, ese trato pudo explicarse por los años que llevaban como dirigentes y no necesariamente vincularse a un actuar ilícito. Además, todos fueron contestes en indicar que no supieron de sobornos por parte de los acusados.

En cuanto a la documental.:

1.- La prueba signada con el N°1 de la acusación, en nada altera lo resuelto, pues es una copia del contrato colectivo del periodo 2013- 2015.

2.- Prueba signada como el N°5, de fecha 5 de julio de 2021, en nada puede influir en lo resuelto, pues no da lugar a nulidades invocadas por los acusados respecto de las fiscalizaciones 166 y 167 de 2021, pero que nada dicen relación con

solicitud o aceptación de dinero, que es el elemento base que debía acreditarse, ya sea por indicios o prueba directa, lo que en este caso, como ya se dijo latamente, no aconteció.

Corra la misma suerte la prueba documental signada desde los N°6 a 12, que son principalmente informes de fiscalización, básicamente derivados de problemáticas suscitadas por el traspaso al SLEP, principalmente por tema de remuneraciones.

3.- Los documentos N°13 y 14 ninguna relevancia tiene, pues el primero es una copia de un correo electrónico con solicitud de diligenciamiento y por medio del otro documento se indica que se envía copia del contrato colectivo 2015-2018 por parte de los dirigentes.

4.- Documento 15 y 16, da cuenta del número de socios de ambos sindicatos SITRACOM y SETRACOM del año 2015, a casi cuatro años de ocurrencia del hecho, por lo que en nada puede incluir en su decisión. Máxime si tenemos en cuenta que por informe de fiscalización 470-2020 a diciembre de 2019 eran 107 socios de SIDETRACOM y 235 de SETRACOM, mientras que al 2015 había 277 socios en SETRACOM y 115 SETRACOM.

5.- Documento N°24 Acta de Renovación de directorio de sindicato SIDETRACOM y contrato de prestación de servicios a honorarios, no influyen en la decisión, por no corresponder a un antecedente ni siquiera indiciario para la decisión.

La misma suerte corre el documento N°25 que contiene liquidaciones de remuneraciones del señor Astorga desde el año 2015 a 2020, anexo de contrato de trabajo y asignaciones de bono especial, entre otros documentos. Misma falta de influencia en la decisión tiene el documento signado con el N°34.

6.- La demás prueba aportada correspondiente a diversos decretos de pago, en su mayoría de cuotas sindicales como también pago de horas extraordinarias y pago para financiar actividades recreativas, entre otros motivos, no tiene el carácter o valor probatorio suficiente para influir en la decisión, sino más bien nos da cuenta de la forma al parecer habitual de hacer desembolsos de dinero por parte de la Corporación Municipal.

7.- Por último, la prueba nueva incorporada, correspondiente a dos sentencias dictadas en procedimiento abreviado en contra de los testigos Quintanilla y Gajardo, en nada altera lo resuelto, ya que aunque hace alusión a los hechos acreditados sometidos a juzgamiento, no tuvo la defensa la posibilidad de interrogar a dichos testigos sobre aquel procedimiento al que se sometieron, al haber sido incorporada al término de las probanzas de los acusadores, por tanto no pueden ser valoradas positivamente, de hacerlo se afectaría seriamente el derecho de defensa y el principio contradictorio.

**VIGÉSIMO. Prueba inconducente de la defensa.** La demás prueba documental de la defensa en nada altera lo resuelto, pues daba cuenta principalmente de presentaciones previas a los hechos, realizadas por los acusados ante la Inspección del Trabajo, liquidaciones de remuneraciones, contrato de arriendo de una propiedad del acusado Astorga, entre otros.

**VIGÉSIMO PRIMERO. Costas.** Que no se condena en costas a los acusadores, toda vez que el ejercicio de la acción penal estaba debidamente motivado, y la decisión absolutoria sobrevino por surgir la duda razonable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 248 y 248 bis, todos del Código Penal; artículos 259 y 261 siguientes del Código Procesal Penal; se declara que:

**I.- Se absuelve a JUAN ENRIQUE ASTORGA OPAZO,** ya individualizado, respecto de la imputación que formulara en su contra el Ministerio Público y la parte querellante, en el sentido de ser autor de un delito de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 y 248 bis del Código Penal, respectivamente, descrito en la acusación.

**II.- Se absuelve a RODRIGO ANTONIO HERRERA BUSTAMANTE,** ya individualizado, respecto de la imputación que formulara en su contra el Ministerio Público y la parte querellante, en el sentido de ser autor de un delito de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 y 248 bis del Código Penal, respectivamente, descrito en la acusación.

**III.-** No se condena al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado como querellante, al pago de las costas por estimarse que no existió un ejercicio infundado de la acción penal pública.

**TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL**  
**SAN FERNANDO**

---

Ejecutoriada que sea esta sentencia, remítanse los antecedentes pertinentes al Juzgado de Garantía de San Fernando a fin de que ponga en conocimiento lo resuelto de los organismos correspondientes.

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, inclúyase la presente sentencia en el respectivo informe mensual al Servicio Electoral, una vez que se encuentre ejecutoriada.

Devuélvase la prueba documental y otros medios incorporados, previa constancia.

Regístrese.

Sentencia redactada por la jueza Marcela Yáñez Cabello.

**RIT 66 - 2024**

**RUC 2300609088-5**

Sentencia pronunciada por las juezas de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando Marisol López Machuca, Marcela Yáñez Cabello y Marcela Paredes Olave, la primera y segunda como titulares y la tercera en calidad de subrogante legal.